AMÉRICA LATINA ACTUAL

DEL POPULISMO AL GIRO DE IZQUIERDAS

PEDRO A. MARTÍNEZ LILLO

PABLO RUBIO APIOLAZA



América Latina actual

CATARATA

PEDRO A. MARTÍNEZ LILLO

Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid y director de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco (UAM-Fundación Santillana). Especialista en historia de las relaciones internacionales contemporáneas y en la historia de la política exterior española del siglo XX, ha sido profesor visitante en el Instituto de Estudios Internacionales y el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA) de Chile, en el Colegio de Veracruz (México) y *visiting fellow* en el CERI-CNRS, Sciences Politiques de París. Entre sus obras destacan, junto a Pablo Rubio, *América Latina y Tiempo Presente. Historia y Documentos* (LOM, 2015) y asimismo, ha coordinado con Joaquín Estefanía el volumen *América Latina. Un nuevo contrato social* (Marcial Pons, 2016).

PABLO RUBIO APIOLAZA

Investigador de la Unidad de Historia Política Legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Es especialista en historia chilena y latinoamericana del siglo XX, y ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Alcalá e Institut d'Études Politiques de Lille. Entre sus obras destacan *Los civiles de Pinochet. La derecha en el régimen militar chileno, 1983-1990* (DIBAM, 2013) y, junto a Pedro Martínez Lillo, *América Latina y tiempo presente. Historia y documentos* (LOM, 2015).

Pedro A. Martínez Lillo y Pablo Rubio Apiolaza

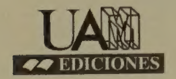
América Latina actual

DEL POPULISMO AL GIRO DE IZQUIERDAS



COLECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DEBATE

LA PUBLICACIÓN DE ESTE LIBRO HA SIDO POSIBLE GRACIAS AL APOYO
A LA EDICIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID



FUENCARRAL, 70
28004 MADRID
TEL. 91 532 20 77
FAX. 91 532 43 34
WWW.CATARATA.ORG

AMÉRICA LATINA ACTUAL.
DEL POPULISMO AL GIRO DE IZQUIERDAS

ISBN: 978-84-9097-249-6
DEPÓSITO LEGAL: M-247-2017
IBIC: 1KL/HBLW3/HBLX

ÍNDICE

PRÓLOGO

Toda historia se escribe desde un presente, afirmaba Benedetto Croce; por ello siempre se trata de historia contemporánea. No se trata de un *presentismo* que al final termina por negar la posibilidad misma de un conocimiento del pasado. El filósofo apuntaba a que el tiempo vivido por el historiador despierta preguntas nuevas, que se trasladan al pasado no para forzarlo, sino para abrir un posible nuevo ámbito de esa existencia que fue. Es la razón de por qué la historia se está reescribiendo siempre, lo que arroja un problema de supervivencia de la validez de lo escrito, que siempre termina siendo un drama para el historiador. Su obra es precaria, de validez temporal; es una raíz de injusticia e incide en que los propios historiadores olviden lo que se escribió, salvo para colocarlo canónicamente en las notas asegurando que la nueva visión supera a la anterior. Se olvida que en general solo la complementa, la abre a una nueva dimensión, pero no puede abolir del todo lo que antes se había escrito.

El libro de Pedro A. Martínez Lillo y Pablo Rubio se origina en la necesidad de pensar históricamente el presente, es decir,

demostrar que en los dilemas actuales existe una trayectoria y una experiencia y que, a pesar de las inmensas transformaciones de las últimas décadas, persisten procesos de larga duración y reiteraciones de problemas, aunque a veces el lenguaje cambia el acento a conceptos e interpretaciones. En el fondo, si bien el fin de la Guerra Fría supuso también un cambio de consecuencias sísmicas, incluyendo a América Latina, en esta región, la permanencia de antiguos dilemas se destaca más que en otras regiones del mundo, sobre todo en el mundo que podríamos llamar con ese concepto tan vago de subdesarrollado. En los noventa hubo una convergencia en torno a la democracia liberal y a una economía de mercado, aunque al momento de concretar esta última había una diferencia entre muchos países. En especial el grado de interacción con la economía global, con las grandes potencias y los grandes bloques —algunos más consolidados que otros— permaneció como un tema de intenso debate dentro de cada país. En la primera década de los 2000, casi hasta el presente, reapareció una división y a veces un foso ideológico que marcó la política latinoamericana y en muchos grados también su relación con el mundo. El protagonismo de la persuasión simbolizada por un Hugo Chávez y el gigante de Brasil —que era percibido como tal por el mundo— representaba una posibilidad que sin embargo no era del todo nueva. En especial, las fórmulas "neopopulistas" o "nacionalpopulares" dieron un rostro a América Latina, aunque expresan solo una de sus almas.

Sin embargo, una mirada desde la Segunda Guerra Mundial, que es lo que proponen los autores, nos muestra cómo estos dilemas cruzan toda la historia contemporánea de América Latina y han llegado a ser parte de su ser: la dualidad ante las relaciones con Estados Unidos, en el amor-odio como polos de un amplio abanico; la consolidación de la democracia política junto con la modernización económica y social, a veces también llamada democracia social; el grado de cooperación e integración según

el caso que debe existir entre los países latinoamericanos y, finalmente, qué implicaciones tiene esto en el mundo.

Aunque la clase militar ya no constituye un actor político, la inestabilidad política continuó siendo una marca importante, si bien en una intensidad algo menor al del periodo de la Guerra Fría, al menos hasta cómo esta se desarrolló hasta los años setenta. La misma fórmula de la Venezuela de Chávez se originó primero en una revuelta militar, no muy diferente de la que surgiría el peronismo en 1943. Desde comienzos de la experiencia republicana en el siglo XIX, existe una orientación hacia los grandes modelos de la modernidad política europea; también los hubo hacia persuasiones más radicales surgidas de la misma experiencia. En fin, la pregunta fundamental de este libro acerca de la evolución política, entendida en un sentido amplio, no separada de problemas sociales y económicos, como su especial inserción en el sistema internacional, adquiere una respuesta en esta mirada serena y meditativa de la historia desde 1945. Esta se halla atenta tanto a las continuidades como a las rupturas, y también a los retornos de problemas y de fórmulas.

Pedro A. Martínez Lillo es un conocido especialista en historia internacional y que ha contribuido en especial a iluminar muchos aspectos de las relaciones entre Europa y Chile. Pablo Rubio ha desarrollado sus investigaciones sobre historia política e ideológica, y ambos han podido reunir en esta contribución una mirada sintética y a la vez rigurosa que, en un solo aliento, analiza la historia latinoamericana de las últimas siete décadas.

JOAQUÍN FERMANDOIS H.
Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica de Chile

PRESENTACIÓN

El libro que el lector tiene en sus manos pretende contribuir al debate sobre la situación actual de la región latinoamericana en sus aspectos políticos, sociales, económicos y los relativos a la posición internacional del continente. Aspira, en esa misma línea, a proporcionar elementos de análisis con el objetivo de establecer un diálogo entre quienes estén interesados en comprender la posición actual de América Latina, dentro de un marco democrático, de respeto mutuo y de diálogo interdisciplinar.

Bajo estas premisas, el libro propone una revisión de los principales procesos históricos del continente, desde 1945 a la actualidad, examinando las continuidades y rupturas del devenir de América Latina. Particularmente, el texto plantea una mirada de síntesis de ese conjunto de procesos, organizados bajo la variable temporal, aunque también situando la atención en conceptos considerados clave. Estos conceptos han determinado —en parte— ciertas rupturas o puntos de inflexión en el desarrollo latinoamericano; rupturas que se entienden y formulan como coyunturas críticas que ha debido asumir la región,

convertidas en una oportunidad a fin de repensar el continente bajo nuevas perspectivas.

En sus aspectos metodológicos, el texto se organiza en torno a cinco capítulos, cada uno de los cuales corresponde a determinados elementos que, a su vez, plantean determinadas rupturas históricas. El primer capítulo, "Populismo y sistema interamericano: los comienzos de la Guerra Fría", aborda el desarrollo de las dos dimensiones que marcaron la realidad de mediados de siglo: el desarrollo de los populismos y el ingreso de la región en las lógicas del orden bipolar. El segundo capítulo, llamado "De la Revolución cubana a los golpes de Estado: conflictividad política e integración económica (1959-1973)", trata de las consecuencias del proceso cubano sobre la región, que provocó quizás la ruptura más importante del siglo XX, aparejado a una intensa conflictividad política. El capítulo 3, "Dictaduras de seguridad nacional y transiciones a la democracia. La década perdida y el final de la Guerra Fría (1973-1990)", examina el giro autoritario que experimentó América Latina, junto a la violencia política en Centroamérica y la llamada década perdida, que rompió con los moldes del desarrollo económico. Finalmente, los últimos dos capítulos abordan el tiempo más reciente. El capítulo 4, titulado "Entre democracia y neoliberalismo: la globalización (1990-2002)", se enfrenta al nuevo contexto de los años noventa, marcados por este doble desafío de la democratización, pero a la vez por la incorporación de una nueva matriz económica. En el tramo de cierre, el capítulo 5, "El giro a la izquierda y los nuevos desafíos del continente (2002-2016)", ansía ofrecer un análisis preliminar de la década de los 2000, planteando hipótesis para comprender el presente inmediato de la región.

El objetivo final de la publicación responde, en definitiva, al interés de considerar el análisis histórico como una herramienta apropiada para la comprensión del tiempo presente. Pretende transformarse en un libro de referencia y de consulta

tanto para los integrantes del mundo académico, científico y universitario, especialistas de distintas ciencias sociales como para ciudadanos interesados en comprender la evolución histórica de América Latina de la segunda mitad del siglo XX y los quince primeros años de la actual centuria, respecto a los problemas pendientes y a los desafíos actuales que enfrenta. Aproximarse críticamente a un espacio, a una geografía social de un profundo e intenso pasado y decisivo futuro. No resulta tarea fácil ni sencilla ambicionar tales objetivos, conscientes —como somos— del carácter heterogéneo y diverso de la realidad latinoamericana, de la tensión entre lo nacional, regional e internacional a la hora de explicar e interpretar el devenir de sus sociedades, hacerlo además desde determinados enfoques académicos, abiertos —como estamos— a permanentes innovaciones epistemológicas, y dentro de un relato tan sucinto en su extensión. En todo caso, los autores responsables de las siguientes páginas decidimos asumir el reto motivados por la inquietud intelectual que nos supone repensar América Latina. Nuestro agradecimiento a la editorial Los Libros de la Catarata y a UAM Ediciones.

PEDRO A. MARTÍNEZ LILLO Y PABLO RUBIO APIOLAZA
Madrid y Santiago de Chile, 10 de noviembre de 2016

CAPÍTULO 1

POPULISMO Y SISTEMA INTERAMERICANO. LOS COMIENZOS DE LA GUERRA FRÍA (1945-1959)

El periodo comprendido entre la Gran Depresión de 1929 y el fin de la Segunda Guerra Mundial se define como una coyuntura de grandes transformaciones en América Latina, cambios que alcanzaron los ámbitos económico y político, así como el contexto internacional. En primer término, la desarticulación del modelo de economía primario-exportadora, adoptado por sus países a mediados del siglo XIX, supuso una importante transformación productiva que dio inicio a una lenta, gradual y desigual modernización de su estructura económica, que —dependiendo del país— continuó hasta bien avanzado el siglo. En segundo lugar, se distingue la aparición de Gobiernos y movimientos políticos denominados populistas o nacional-populares, que encauzaron gran parte de las adhesiones ciudadanas. Todo ello en un marco internacional caracterizado, entre otros factores, por las experiencias fascistas y el auge de las opciones antiliberales en Europa y en gran parte del mundo.

En la región, los Gobiernos de Juan Domingo Perón en Argentina (1946-1955), Getulio Vargas en Brasil (1930-1954)

y Lázaro Cárdenas en México (1934-1940), podrían catalogarse de populistas, de igual forma que movimientos tales como la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en Perú o el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia. Si bien es cierto que muchos de estos proyectos populistas crecieron al margen de la democracia tradicional, desde el punto de vista social lograron grandes avances para los trabajadores urbanos y sus derechos, dentro de políticas económicas altamente desarrollistas y estatistas. Su análisis resulta, por ello, complejo y contradictorio.

Así pues, América Latina atravesaba en los comienzos de la segunda mitad del siglo XX procesos sociales, políticos e internacionales sumamente complejos. Estos se intensificaron en el escenario internacional posterior a 1945, donde la conformación de dos bloques definidos e inmersos en una lucha de poder mundial —el comunista y el capitalista—, el orden bipolar de la Guerra Fría, condicionó significativamente el devenir histórico del continente americano. Asimismo, desde el punto de vista económico, esos mismos años vienen marcados por la búsqueda de alternativas al modelo de libre mercado decimonónico, al cual habían criticado transversalmente el fascismo, el comunismo y el New Deal de Roosevelt. Como resultado de todo ello se consolidarían en la región distintos intentos de planes de industrialización dirigidos por el Estado y apoyados por la inversión extranjera, lo que tuvo resultados importantes en países como México, Brasil y Argentina, que desarrollaron una tecnología de cierto nivel permitiendo modernizar la antigua estructura industrial. También se destacó la ejecución de la propuesta industrializadora en Chile, emprendida por los Gobiernos reformistas entre 1938 y 1952, los cuales intentaron transformar la estructura económica y social del país a través de la acción estatal.

No obstante, en la mayoría de las naciones latinoamericanas el sistema productivo estuvo caracterizado por una economía inestable y con rasgos tradicionales (Centroamérica y los

países andinos), lo que unido a las deficiencias estructurales del modelo industrializador dio como resultado un crecimiento desigual. A veces, ese crecimiento económico, particularmente en los años cincuenta y sesenta, logró un relativo progreso en algunas regiones del continente, en especial después del inicio de la Guerra Fría.

Al analizar la sociedad, lo que sí puede distinguirse con claridad es la aceleración del crecimiento demográfico, cuyas importantes repercusiones se hicieron sentir en el largo plazo. De acuerdo con algunas cifras, la población comenzó un acelerado crecimiento ya desde comienzos del siglo XX: si en 1900 América Latina tenía 61,9 millones de habitantes, cincuenta años más tarde alcanzaba la cifra de 159 millones (Malamud, 2010a). Como consecuencia de esto, y con fuerza desde la tercera década del siglo XX, se fueron acelerando los procesos de migraciones internas —desde el campo a la ciudad— que dieron pie a la aparición de nuevos actores sociales y de nuevos problemas antes inexistentes. Junto a ello, se manifestó un lento pero ascendente proceso de urbanización, que si bien no fue homogéneo, transformó las estructuras sociales de América Latina que habían permanecido siglos sin mayores cambios.

EL POPULISMO COMO FENÓMENO Y SUS PRINCIPALES CASOS

En el marco latinoamericano, el concepto de populismo, o de movimientos nacional-populares, es uno de los más importantes para analizar el desarrollo histórico de la región. Más allá de su significado político-coyuntural, siempre presente más bien en su faceta negativa, hay que afirmar que el populismo es un fenómeno permanente en las sociedades de muchos países, en las que ha cubierto una gran trayectoria histórica, desde la crisis de 1929 hasta la década de los setenta. Sin embargo, es desde los

años treinta y hasta la década de los cincuenta, cuando el populismo adquiere su variante "clásica", transformándose en un fenómeno político típicamente latinoamericano.

Definir a los movimientos nacional-populares y al populismo ha sido una tarea compleja (Malamud, 2010b). Se trata de conceptos polisémicos y controvertidos, que han sido objeto de interpretaciones contradictorias y que, por lo demás, no han estado exentos de valoraciones negativas, llegando a usarse como epítetos denigratorios antes que como categorías de análisis.

No existe pleno consenso a la hora de definir qué significa "ser populista". Con toda razón, Guy Hermet, en el momento de realizar una síntesis conceptual del término original, se refiere a "un balance indigente", que se caracteriza por: "1) la carencia de significación intrínseca del término populismo; 2) la contingencia o el oportunismo declarado de su uso, y 3) su deficiencia teórica extrema como concepto" (Hermet, 2003). Con todo, es posible hacer una pequeña síntesis de sus principales corrientes.

Las teorías clásicas del populismo, surgidas a mediados del siglo XX y que apuntaron a explicar la emergencia y a caracterizar a los movimientos nacional-populares latinoamericanos, se fundaron en la teoría de la modernización. De este modo, recibieron una fuerte influencia del estructural-funcionalismo norteamericano, especialmente de autores como Talcott Parsons y Robert Merton. La teoría de la modernización consideraba dicho proceso como un tránsito de carácter lineal hacia la secularización y la diferenciación funcional. Esto implicaría pasar de una economía agrícola a una industrial, de regímenes políticos de participación restringida a otros de participación más amplia y de la autoridad tradicional a la autoridad racional (Fernández, 2016).

Fue bajo este esquema que Gino Germani explicó los movimientos nacional-populares. En su opinión, estos se constituirían por "masas" que no habrían desarrollado una ideología

ni una organización autónoma de clase, y por ende terminarían quedando "disponibles" para ser subordinadas por un liderazgo carismático que dirigiera y controlara su movilización. Las causas de este fenómeno radicarían en que, en América Latina, los sectores populares habrían sido "movilizados", pero no "integrados", es decir, no habrían podido manifestar sus demandas de manera autónoma a través de los canales institucionales —a diferencia de Europa, donde el patrón predominante habría sido el de la integración—. La movilización sin integración sería el efecto de una situación de "asincronía", en la cual las masas populares de los países más atrasados observarían y demandarían las conquistas sociales y políticas alcanzadas por los sectores populares de los países avanzados, fenómeno llamado *efecto demostración*.

Sin embargo, estas demandas se darían en el marco de sociedades que no son modernas, con sectores populares que aún tendrían evidentes rasgos tradicionales, y cuyas mismas elites, también tradicionales, serían cerradas y no generarían instancias de integración. Esta mixtura de demandas modernas y características tradicionales es denominada por Germani como *efecto fusión* (Germani, 1977).

Muchos elementos de análisis de dicha matriz conceptual se han perpetuado en estudios posteriores. Basta pensar, al respecto, en uno de los esquemas más influyentes para analizar los movimientos nacional-populares, como ha sido el de Alain Touraine, quien lo ha conceptualizado como un fenómeno propio de sociedades con estructuras de clase que aún no han sido bien definidas, y que apuntarían a "generar una reacción de carácter nacional contra las modernizaciones dirigidas desde el exterior". De este modo, evitaría la conflictividad social generada por la modernización capitalista, articulando alianzas interclasistas (Touraine, 1989).

Si bien estas conceptualizaciones son muy necesarias para comprender el fenómeno del populismo, lo cierto es que dichos

esquemas adolecen de un excesivo universalismo y una visión teleológica de la historia, ya que analizan los movimientos nacional-populares como una suerte de fenómeno pasajero en el camino a la modernización.

Así, es interesante tener en cuenta referentes teóricos más recientes, que han abordado el tema, especialmente el caso de Ernesto Laclau (2005). De acuerdo a su propuesta, las conceptualizaciones clásicas del populismo estarían teñidas de una visión peyorativa que se fundamentaría en una tendencia hacia la "denigración de las masas", ante lo cual defiende la necesidad de poner atención a las demandas de los sectores sociales involucrados en una movilización populista. Según el autor, nos encontraríamos ante la emergencia del populismo cuando, al producirse una superación de la heterogeneidad social, un conjunto de demandas insatisfechas, distintas entre sí, pasan a oponerse al sector dominante, generando una "lógica de la equivalencia" entre sí y una "lógica de la diferencia" respecto a aquel. Al apelar emotivamente a ese conjunto de demandas equivalentes, mediante un principio de unidad afectivo o mítico, se generaría una "identidad popular". De este modo, el populismo sería una forma de articular demandas sociales heterogéneas y un modo de trasladarlas al campo político (Fernández, 2016).

Bajo estas precisiones conceptuales, los populismos comprenden movimientos o Gobiernos que dominaron la escena latinoamericana en países tan diferentes como Argentina, Brasil, México, Ecuador, Bolivia o Perú, y que se han extendido a lo largo de varias décadas, incluso hasta el siglo XXI, si bien bajo otras formas y manifestaciones (De la Torre y Arnson, 2013).

Desde la década de los treinta, el contexto histórico de crisis entreguerras y del orden oligárquico es importante en el surgimiento del populismo, porque ocurre en el marco del cuestionamiento del sistema económico y también de las democracias parlamentarias, cuando los movimientos liderados por Benito Mussolini y Adolf Hitler son las principales manifestaciones, pero

no las únicas. En América Latina, la crisis del orden oligárquico, expresada en la disminución de las exportaciones de productos primarios y la crisis de las sociedades (y la aparición de nuevos actores sociales), va generando frustración en la ciudadanía y en los actores políticos predominantes de la región, todo lo cual originó las condiciones históricas para el surgimiento del populismo.

Antes de proceder a enumerar los elementos de los populismos latinoamericanos, deben señalarse algunos elementos previos. El primero es destacar la heterogeneidad del populismo latinoamericano en sus diferentes facetas. Existen populismos liderados por militares, pero también los civiles juegan un papel de importancia; por otro lado, el populismo se puede definir como un "orden" construido desde el Gobierno o desde el Estado, como también en forma de movimientos que nunca logran llegar al poder en estas décadas; y por último, el populismo puede ser considerado como realidad permanente —proyección de un orden que lleva décadas—, o también como un fenómeno más bien accidental y que nunca se reproduce de la misma forma.

El populismo —tanto en sus definiciones conceptuales como en sus manifestaciones concretas— contiene ese rasgo multifacético y particularista que nunca se repite de igual manera en las diferentes y heterogéneas sociedades de América Latina. Sin embargo, dentro de esa multiplicidad de experiencias, es posible establecer algunos elementos fundamentales y básicos del populismo de las décadas de los treinta, los cuarenta y los cincuenta, componentes que ayudan a comprender la complejidad del fenómeno.

El primero de ellos se define en torno a la ambigüedad ideológica. En América Latina, no se puede categorizar el populismo en los típicos campos ideológicos de izquierda o derecha, ya que contiene elementos de conservadurismo y de progresismo a la vez. El populismo apuesta por reivindicar una *tercera*

vía, situada entre el socialismo marxista y el liberalismo capitalista, por lo cual muchas veces se puede considerar como cargado de pragmatismo, e incluso zigzagueante. Es por ello que, en un sentido más filosófico, el populismo se caracteriza por un eclecticismo ideológico, ya que no se adscribe a ninguna matriz teórico-ideológica en un sentido estricto, sino que plantea elementos de reformismo, aunque también de conservadurismo.

Derivado de este primer aspecto, se puede distinguir un segundo rasgo que vendría definido por la apelación discursiva al *pueblo*, dejando de lado la definición marxista de *clases*. Los populistas utilizan el concepto de *pueblo* en un sentido más flexible que el de clase social, destinado especialmente a una multiplicidad de actores. La apelación de *pueblo* incluye no solamente sectores organizados, sino también marginales, mujeres, migrantes, clases medias e incluso sectores del empresariado nacional. Esta apelación discursiva se corresponde con un discurso antioligárquico y *antiestablishment*, clave en su propuesta política y discursiva.

En tercer lugar, se encuentra el liderazgo personalista. En general, puede afirmarse que no existe populismo sin un líder —no necesariamente carismático—, lo cual puede derivar en tentaciones autoritarias con una facilidad importante. El líder es quien controla el propio movimiento, su discurso, su vinculación emocional e irracional, y es la cara visible de un movimiento social que se compone muchas veces de importantes contradicciones internas. Sin embargo, al propio tiempo, debe subrayarse que el populismo no puede "reducirse" a las palabras, acciones y estrategias de los líderes (Laclau, 2005). En otras palabras, aparece la necesidad de comprender el fenómeno populista más como una estrategia de reciprocidad —como una relación— que como una "manipulación de las masas" por un caudillo específico o por un grupo social superior.

En cuarto lugar, y en relación con esto mismo, el populista involucra una relación social —y electoral— entre líderes y bases caracterizada básicamente por el clientelismo, a saber, por la reciprocidad y la lealtad, entre la base electoral y el líder, aunque desde la verticalidad. Si bien en un primer momento está marcada por una relación más bien "personal" para luego pasar a la etapa de la institucionalización o burocratización (lo cual muchas veces llega a consolidar una cierta "corporativización" del aparato público), el vínculo personal nunca se pierde, ya que es parte esencial para mantener la movilización constante que necesita el populismo.

En este contexto, hay quienes señalan que el clientelismo atenta contra la democracia, debido a que impide el desarrollo de una ciudadanía autónoma. No obstante, existe otra forma de mirar el asunto porque en muchos países de América Latina el clientelismo es considerado como una forma común de "fortalecer la democracia" al integrar a las masas en sociedades donde las instituciones políticas son relativamente débiles (De la Torre, 2003).

Por último, como quinto elemento, se encuentra el nacionalismo económico y el reformismo social, probablemente los elementos que más unifican este entramado de movimientos heterogéneos que componen el populismo latinoamericano. Para los populistas, el Estado representa la suma de todos los intereses, o el bien común en su conjunto, y por ello creen en la acción económica del Estado más que en la privada, aunque no niegan esta última. En casi todos los casos, promueven programas de industrialización apoyada por el Estado, o programas sociales en temas de salud, vivienda y educación, así como una institucionalidad laboral que regule los conflictos sociales, marcándose una diferencia sustancial con las políticas sociales del periodo anterior a 1930.

En conclusión, y desde esta perspectiva, el populismo transformó con singular fuerza las formas de ejercer el poder en la política regional, aunque con diferente profundidad en cada caso.

Los Gobiernos o movimientos populistas proliferaron con fuerza tras la crisis económica de 1929. Ejemplos clásicos, entre los países andinos, serían el de Ecuador y la figura de José María Velasco Ibarra, que se transformó en el principal líder político ecuatoriano del siglo XX, influyendo en el país de forma permanente, casi siempre como presidente de la República, entre 1934 y 1972. En el Perú, se da el caso de un *populismo frustrado*, ya que sus referentes claves nunca alcanzaron el poder, al menos durante estas décadas. No obstante, su primordial representante, el APRA —fundado en 1924 por el gran intelectual Víctor Raúl Haya de la Torre—, se propuso hacer un cambio profundo en el país, basándose en una alianza de sectores populares y clases medias contra la oligarquía. En gran parte, la historia del APRA se confunde con la historia del propio Perú durante una porción importante del siglo XX.

Otro ejemplo relevante de régimen populista se da en el Gobierno de Getulio Vargas en Brasil. El llamado *varguismo* no solamente fue el gran referente político del país durante más de veinte años, entre 1930 y 1954, sino que inició un cambio económico y social de carácter estructural. Más allá de los diferentes regímenes o tipos de Gobierno que encabezó (democráticos, autoritarios), Vargas lideró una transformación que puede caracterizarse como de plena modernización: la unificación y centralización territorial y administrativa del país, así como la modernización económica marcada por la industrialización y el rol del Estado, son elementos que constituyen un cambio de matriz social y política que cabe calificar de "modernización" y de construcción de un pleno Estado moderno. Respecto a la parte económica de dicho cambio, esta solo se quiebra en la década de los años noventa del siglo XX, lo que es una prueba de su gran proyección histórica (De Castro Gomes, 2013).

Finalmente, aparecen dos casos que constituyen un cierto paradigma: Argentina y Bolivia. Respecto al primero, tras el golpe militar de junio de 1943 el país comienza a atravesar cambios que se asumen como en parte irreversibles.

El coronel Juan Domingo Perón, una carismática figura dentro del ejército, fue acumulando mucho poder dentro del Gobierno (vicepresidente de la Nación, ministro de guerra, secretario de Trabajo y Previsión), en torno a un programa de mejoras de la clase trabajadora y su inclusión en el sistema. Poco a poco, su liderazgo generó una fuerte oposición tanto entre compañeros de armas como de los sectores del radicalismo, conservadores, intelectuales y miembros de la oligarquía, así como también en la izquierda socialista y comunista. El 7 de octubre de 1945 Perón era relegado de sus funciones y, poco después, encarcelado, pero la reacción popular significó su consagración como figura clave de la vida nacional argentina.

El 17 de octubre una muchedumbre se concentraba en Plaza de Mayo para reclamar su liberación, hecho que marcó el ascenso de su carrera pública: fue presidente de la República entre 1946 y 1955, y después nuevamente entre 1973 y 1974 (electo por sufragio universal en ambas ocasiones), condicionando la política argentina y convirtiéndose en figura emblemática del siglo XX.

Una de las grandes particularidades de este país radica en la proyección del populismo de Perón, que se institucionalizó con la formación del partido peronista o justicialista. Este, en tanto que doctrina política, descansaba en una férrea defensa de la justicia social, el personalismo a la hora de ejercer el poder, un acentuado nacionalismo económico y una neutral "tercera posición" frente a Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena bipolaridad. Aparte de una incorporación de sectores populares antes excluidos. Sin duda, el peronismo constituye el movimiento político-social más importante del siglo pasado en Argentina (Romero, 2012).

Notable es, asimismo, el caso de Bolivia, toda vez que la aplicación de políticas populistas se hace después de una revolución armada que terminó con el sistema oligárquico en el país. El 9 de abril de 1952, el Movimiento Nacionalista Revolucionario

(MNR) de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo triunfaba frente a la llamada "rosca" oligárquica y el ejército, respaldado en una insurrección obrera, minera y campesina, en un país caracterizado por estructuras socioeconómicas altamente tradicionales. La Revolución boliviana —sufragio universal, nacionalización de las minas, reforma agraria—, si bien poseía rasgos antiimperialistas, no suponía el acercamiento a posturas socialistas. En el tiempo que se abre desde el éxito de la insurrección de abril, el MNR se esforzaría por encuadrar a las bases obreras y los sectores populares dentro de los objetivos de la revolución nacional (Hernández y Salcito, 2007). En febrero de 1953 el presidente Paz Estenssoro —la principal figura política entre las décadas de 1950 y 1980— enfatizaba la construcción de un programa de desarrollo capitalista en Bolivia marcando, además, una estricta diferenciación teórico-política con la izquierda y el marxismo.

AMÉRICA LATINA AL TÉRMINO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

El final de la Segunda Guerra Mundial introdujo importantes novedades tanto en el orden interno de los Estados como respecto al reordenamiento regional e internacional latinoamericano.

Dentro de esta matriz populista existente en América Latina —y en muchos casos de forma permanente, como Brasil y Argentina—, el clima de la posguerra propiciaba una ola democratizadora que, aun con sus limitaciones, significó un notable giro político. La lucha contra el fascismo y la victoria aliada, al privar de legitimidad a los regímenes dictatoriales, impulsaba las elecciones libres, el pluralismo y los discursos a favor de reformas sociales. Entre 1944 y 1946, seis países (Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Perú y Venezuela) pasaron de la dictadura a la democracia. Y en aquellos otros donde funcionaban

regímenes democráticos (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) estos se consolidaron. Incluso las dictaduras más arraigadas, en Paraguay o en América Central y el Caribe, se vieron afectadas por esta atmósfera. En Venezuela, la Junta de Gobierno tras el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, liderada por Rómulo Betancourt (1945-1948), apostaba por el sufragio universal y la reforma agraria. A su vez, el 20 de octubre de 1944, en Guatemala, un alzamiento cívico-militar —Revolución de octubre— terminaba con la herencia dictatorial arrastrada desde la década de los treinta y provocaba la convocación de elecciones presidenciales y legislativas. En marzo de 1945, Juan José Arévalo (1945-1951) accedía a la presidencia con un respaldo popular mayoritario para liderar un periodo de cambio económico-social y político único en la vida contemporánea guatemalteca. Y en Perú, el recién elegido presidente José Luis Bustamante (1945-1948), con inicial apoyo del APRA, abriría una etapa de avance reformista inédita también en la historia del país andino.

En el plano exterior, las tensiones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos afloraban en el epílogo del conflicto. Estos países veían con preocupación el marco futuro de sus relaciones económicas con Washington y, sobre todo, se mostraban inquietos ante la necesidad de determinar la forma en la que el continente se incorporaría al nuevo orden mundial construido en torno a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya estructura básica —de inspiración estadounidense— había sido aprobaba en octubre de 1944 durante la Conferencia de Dumbarton Oaks. En el continente no existía una organización adecuada para ese escenario y resultaba indudable que el problema que tenían planteado las naciones americanas era el de su descoordinación como tal grupo regional dentro de la organización universal. El panamericanismo —la principal forma de cooperación entre esas repúblicas desde 1889— necesitaba transformarse desde el modelo de la Unión

Panamericana (1910) en una comunidad jurídicamente organizada —un sistema— que articulara las relaciones hemisféricas (entre Estados Unidos y resto de países americanos) sobre la base de principios, normas, deberes y compromisos acordes al nuevo tiempo. Los pasos que se dieron entonces fueron claves para comprender los antecedentes orgánicos del sistema interamericano.

En diciembre de 1944, a instancias de México, Washington aceptaba celebrar una reunión donde abordar conjuntamente los problemas de la guerra y de la paz. Como requisito previo a su participación, los países que aún mantenían la condición de no beligerantes deberían declarar la guerra a la Alemania nazi y a Japón antes de asistir a la cita, formalizando así su ingreso en el bloque de las Naciones Unidas. La Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz, celebrada en el Castillo de Chapultepec (México), del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, aprobaba —entre otros acuerdos— la Resolución y Declaración sobre la Asistencia Recíproca y Solidaridad Americana —o Acta de Chapultepec— que recomendaba la adopción de un tratado de asistencia recíproca contra posibles agresiones extra o intracontinentales.

El Acta Final de la Conferencia incorporaría la firma de los Estados Unidos y de todas las repúblicas latinoamericanas, también la del Gobierno argentino, que el 27 de marzo de 1945, tras la presión estadounidense, declaraba finalmente la guerra a Japón y a Alemania, abandonando su neutralidad y evitando su aislamiento dentro de la región.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO: EL TIAR Y LA OEA

El fracaso en la construcción de la paz y la ruptura soviético-norteamericana precipitaron el advenimiento de la Guerra Fría. El 12 de marzo de 1947, el presidente Harry S. Truman (1945-1953)

anunciaba en la Cámara de Representantes el compromiso de Estados Unidos en la defensa del mundo libre —doctrina Truman— mediante una estrategia de contención activa ante las tendencias expansionistas del comunismo (Grecia y los Balcanes). La ayuda económica para la reconstrucción europea y militar en la organización defensiva occidental —Plan Marshall y Tratado de Washington (OTAN)— articularían los mecanismos de su seguridad frente a las primeras amenazas de la URSS. Por parte de la Unión Soviética, en septiembre de 1947, la doctrina Jdanov servía de base ideológica y programática para la creación del Kominforn, el órgano de coordinación de los partidos comunistas bajo supervisión de Moscú, en plena sovietización de la Europa central y oriental.

En un orden internacional definido por la bipolaridad y las zonas de influencia, la diplomacia norteamericana optó por acelerar la unidad hemisférica esbozada en Chapultepec. Entre 1947 y 1948, el sistema interamericano iba a quedar formalmente establecido sobre la base de cuatro acuerdos fundamentales. De un lado, junto al Acta de Chapultepec, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca; y de otro, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Pacto Americano de Soluciones Pacíficas[4].

El Tratado de Río de Janeiro (TIAR), fruto de la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Continentales (15 de agosto-2 de septiembre de 1947), era un acuerdo de seguridad mutua frente a las agresiones extra e intracontinentales. Mientras los Gobiernos latinoamericanos esperaban con el TIAR una garantía ante eventuales ataques vecinos o frente a las veleidades hegemónicas norteamericanas, Washington lo contemplaba como una pieza de la unidad hemisférica occidental, de forma similar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entre Estados Unidos y Europa occidental.

Si en Río de Janeiro quedaba sellada la seguridad interamericana, los fundamentos jurídico-políticos se alcanzaron en

la IX Conferencia Panamericana de Bogotá (30 de marzo-2 de mayo de 1948), al aprobarse la Carta de Bogotá, texto fundacional de la Organización de Estados Americanos. Sus artículos, junto a los del TIAR, sustentaban un nuevo orden regional sobre los principios de la no intervención, la igualdad jurídica de los Estados, el arreglo pacífico de las controversias y una defensa colectiva frente a las agresiones. Por el nuevo tratado, la Unión Panamericana era reemplazada por la OEA, en cuyo entramado organizativo destacaban: la Conferencia Interamericana (posteriormente Asamblea General) como órgano supremo; la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, diseñada para actuar en la solución de problemas urgentes; el Consejo como su cuerpo ejecutivo permanente y la Secretaría General dedicada a las labores administrativas y de coordinación, así como un conjunto de organismos especializados. En su faceta ideológica, la diplomacia estadounidense vinculaba la nueva comunidad con el rechazo a un comunismo incompatible con la libertad y la democracia. La aprobación de la Resolución XXXII de la conferencia —Preservación y Defensa de la Democracia en América— se convertía así en la primera expresión oficial de un anticomunismo hemisférico.

Al renunciar al uso de la fuerza en sus relaciones con América Latina y apostar por el no intervencionismo y la cooperación en pos de una unidad continental, Estados Unidos vinculaba el TIAR y la OEA con la tradición exterior del Buen Vecino practicada por Franklin Delano Roosevelt en la década de los treinta. Aunque la Carta de Bogotá articulaba un espacio sin hegemonías, toda esta arquitectura jurídica de la Organización de Estados Americanos quedaría de hecho supeditada a la superioridad finalmente norteamericana, ya fuese política o militar, de tal forma que el sistema no tardaría en convertirse en una útil herramienta al servicio de sus intereses geopolíticos, estratégicos y de seguridad, sin consideración hacia los principios proclamados. A la larga, tanto la OEA como el TIAR serían instrumentalizados para legitimar

un intervencionismo destinado a mantener el continente bajo su órbita durante la Guerra Fría.

De forma simultánea, América Latina sufrió un giro político autoritario que clausuraba el ciclo reformista posterior a la Segunda Guerra Mundial. Al tiempo que aumentaban las restricciones políticas, surgían o se consolidaban regímenes autoritarios —Manuel A. Odría en Perú (1948-1956); Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (1952-1958), Mariano Ospina (1946-1950) y Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) en Colombia o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana (1930-1961)— respaldados por la Administración norteamericana, convencida de que serían más anticomunistas que cualquier otro sistema, incluido el democrático. Las legislaciones antiizquierdistas y la ilegalización de los partidos comunistas se extendían por el continente. El 3 de septiembre de 1948, el presidente de Chile Gabriel González Videla —con el apoyo del Congreso Nacional—, aprobaba la Ley de Defensa Permanente de la Democracia o *Ley Maldita* y prohibía el Partido Comunista de Chile. En Brasil, la ilegalización del Partido Comunista también se explica bajo este nuevo contexto, tras el Estado Novo (1937-1945) de Getulio Vargas, que se había basado en la represión política y en el autoritarismo. Las dinámicas ideológicas se traducían asimismo en el plano diplomático. Si en 1946 Moscú mantenía relaciones con quince repúblicas americanas, a mediados de los cincuenta estas se redujeron a tres (Smith, 2010).

La violencia no tardó en aparecer. En Colombia, el carismático líder del Partido Liberal Jorge Eliecer Gaitán denunciaba el autoritarismo, las injusticias sociales y la represión institucional que acompañaban al sistema político, exigiendo cambios en la dirección de una restauración moral de la República. Dejando claro el componente altamente *populista* de su liderazgo, Gaitán lograba cuestionar el tradicional bipartidismo oligárquico reinante. Percibido como una amenaza, Gaitán caería asesinado el 9 de abril de 1948 en un atentado

orquestado desde los círculos del poder, desencadenándose un levantamiento popular de protesta, el Bogotazo, reprimido duramente por las fuerzas de seguridad. Su muerte frenaría por largo tiempo la auténtica democratización de Colombia y dio inicio al periodo denominado como La Violencia, enfrentamiento armado entre liberales y conservadores que entre 1948 y 1953 dejó un saldo aproximado de 300.000 muertos.

LA GUERRA FRÍA EN AMÉRICA LATINA. LA BATALLA DE GUATEMALA

Poco a poco, la Guerra Fría se mundializaba. Desde las crisis europeas —bloqueo de Berlín y división de Alemania—, el conflicto alcanzaba a Extremo Oriente a raíz de la proclamación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949, llegando a su máxima tensión tras el inicio de la Guerra de Corea el 25 de junio de 1950.

¿Cómo llegaba la Guerra Fría a América Latina? ¿Cómo se insertaba la región en la dialéctica bipolar? ¿Cuál era la reacción norteamericana? La Segunda Guerra Mundial había provocado un cambio radical en el estatus internacional de los Estados Unidos que, transformado en una superpotencia, asumía obligaciones y compromisos mundiales, abandonando su tradicional aislacionismo para enfrentar los retos del pulso estratégico con la Unión Soviética. Vista desde Washington y con las crisis mundiales de fondo, América Latina aparecía como un actor menor y periférico, relegado a un plano secundario dentro de sus graves preocupaciones, centradas sobre Europa occidental y Asia oriental. Cerrado el sistema interamericano, Estados Unidos desvió la atención del continente.

En el plano económico, los países americanos venían reclamando a Washington desde el final de la Segunda Guerra Mundial un programa de ayudas similar al Plan Marshall,

enfocado no tanto en la reconstrucción de sus sociedades, sino en impulsar el crecimiento industrial, mejorar los niveles de desarrollo y aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos. La Conferencia de la OEA celebrada en Bogotá había hecho concebir ciertas esperanzas cuando se anunció la presencia del secretario de Estado, George Marshall, y del secretario de Comercio, Averell Harriman. En contra de lo esperado, la delegación norteamericana rechazó todas las peticiones de ayuda y ofreció únicamente negociaciones que facilitasen la llegada de inversiones privadas. La marginalidad latinoamericana en la estrategia de ayuda económica global estadounidense sería una constante durante la Administración del presidente Harry S. Truman y hasta casi el final de la presidencia de Dwight Eisenhower (1953-1961). Entre 1948 y 1958, América Latina solo recibía el 2,4 por ciento del total de esa ayuda (Pettiná, 2011).

En cuanto a una amenaza estratégica real, el Gobierno norteamericano descartaba la posibilidad de una agresión militar directa de la Unión Soviética sobre América Latina, sintiéndose preocupado en cambio por las consecuencias de una infiltración política y subversiva de los sectores comunistas y grupos simpatizantes y el peligro añadido a sus intereses (acceso a los recursos naturales latinoamericanos, defensa de inversiones e actividades económicas, control sobre los principales enclaves geoestratégicos o preservación de las rutas de comunicación). Washington, con todo, vivía convencido de que la seguridad de Estados Unidos era sinónimo de la seguridad del hemisferio, y el presidente Truman aumentaría desde principios de los años cincuenta la ayuda militar directa para América Latina.

Al amparo de un discurso que privilegiaba la defensa de las instituciones libres y el anticomunismo, se proyectaba una sombra *macarthista* sobre el continente. Dominado por la histeria ante el *peligro rojo*, la "pérdida de China" o la guerra de Corea, Washington observaba con sospecha el avance de los movimientos reformistas latinoamericanos, democráticos en

lo político y nacionalistas en lo económico. Su aceptación y, por tanto, su desarrollo como proyectos autónomos, quedó supeditado al grado de entendimiento y colaboración o, en sentido contrario, de distanciamiento respecto a los sectores comunistas. El peligro para la seguridad norteamericana no era solo el marxismo militante, sino también el de sus cómplices involuntarios. Los sucesos de Guatemala demostraron con nitidez el límite hasta el que llegaba la tolerancia de Washington.

En Guatemala, emplazada en una zona geopolítica más sensible para Estados Unidos, los acontecimientos se desarrollaron de manera diferente. El país centroamericano vivía desde 1944 una inédita experiencia reformista, democrática y nacionalista —Revolución de octubre—, enfrentada tanto a los sectores oligárquicos y conservadores internos como a los intereses extranjeros radicados en su propio territorio, en concreto a las empresas fruteras norteamericanas, cuyo poder casi les había convertido en un Estado dentro del propio Estado. En marzo de 1951, la elección del nuevo presidente Jacobo Arbenz (1951-1954) supuso un refrendo popular a intensificar ese programa de cambio, por lo que no tardó en concretarse el conflicto con Estados Unidos.

Varios fueron los motivos de la crisis. A la participación del Partido Guatemalteco del Trabajo —comunista— en los órganos de la Administración de Arbenz, se sumó la aprobación, el 17 de junio de 1952, de una moderada reforma agraria que sin embargo encontró el rechazo frontral de la United Fruit Company (UFCO) y la International Railway Company, propietarias de una gran parte de las tierras cultivables del país. Poco después, la notificación de un envío de armas procedente de Checoslovaquia acabaría encendiendo todas las alarmas. Ante el temor de que Guatemala cayera bajo la influencia comunista y se convirtiera en un satélite soviético, el Departamento de Estado y la CIA —bajo la directa supervisión de la Casa Blanca— operaron en completa sintonía con el objetivo de derrocar al Gobierno de Jacobo Arbenz. Mientras la diplomacia instrumentalizaría a la

OEA en busca de una cobertura política, la agencia de seguridad preparaba una operación militar encubierta, denominada PBSUCCESS, reclutando y equipando a un grupo de exiliados guatemaltecos al mando del coronel Carlos Castillo Armas en Honduras y Nicaragua. El apoyo logístico, táctico y operativo de la Administración Eisenhower resultaría, a la postre, decisivo en el éxito del golpe.

El 17 de junio de 1954, unos ciento cincuenta exiliados armados penetraban en Guatemala desde Honduras, contando con la cobertura aérea de pilotos norteamericanos contratados por la CIA, procedentes de Nicaragua, quienes bombardearon diferentes objetivos. La OEA y la ONU permanecían paralizadas por la labor diplomática de Washington. Aunque no hubo tropas estadounidenses sobre el terreno, la labor de los agentes de inteligencia fue muy determinante en acciones tales como el control de la radio guatemalteca y la difusión de propaganda contraria a Arbenz al tiempo que buscaban convencer a la población de que el avance del pequeño cuerpo rebelde era una amplia invasión armada.

Acorralado y sin haberse librado combates importantes, Jacobo Arbenz dimitió, siendo reemplazado en la presidencia por Carlos Castillo Armas (1954-1957), cuyo Gobierno claramente pronorteamericano y anticomunista liquidaría en lo esencial los avances de la Revolución de octubre acompañado de una contundente represión político-sindical. El decisivo papel jugado por la CIA, si bien se sospechaba, no fue revelado. Más aún, el secretario de Estado John Foster Dulles negaría la implicación de Washington en el golpe, declarando que su origen obedecía exclusivamente a motivos internos.

¿Cómo interpretar lo sucedido? La clave, llegaría a manifestar Arbenz en su discurso de renuncia a la presidencia, no era tanto el factor comunista como el temor de las compañías norteamericanas, con sus intereses extendidos por toda América Latina, a que cundiera el ejemplo guatemalteco de un Estado

asumiendo soberanamente el control sobre sus propios recursos económicos. El Departamento de Estado sostenía, por el contrario, que la única solución aceptable para encauzar políticamente el desafío surgido en Guatemala habría pasado por una ruptura de la alianza de Arbenz con los comunistas. Washington rechazaba todo entendimiento o connivencia entre las fuerzas nacionalistas y comunistas en América Latina por considerarlo una reedición de la estrategia de los frentes de liberación nacional empleada por Moscú en la sovietización de la Europa del Este tras el final de la Segunda Guerra Mundial y, más recientemente, de su comportamiento con los movimientos nacionalistas surgidos en el Tercer Mundo (Pettiná, 2011).

De la batalla de Guatemala se extraían varias lecciones. Por un lado, constituía un éxito de los Estados Unidos, que dejaba su impronta a la hora de ejercer el control sobre el sistema interamericano y reafirmaba su poderío sobre una zona clave de sus intereses nacionales. Era el punto final a la política del Buen Vecino y el triunfo de su intervencionismo unilateral. Incentivada por el exitoso desenlace, la CIA volvería a ensayar ese mismo procedimiento en abril de 1961 en Bahía Cochinos contra la Cuba de Castro. La Revolución de octubre, así contemplada, era la primera víctima de una vía latinoamericana reformista, ahogada por los condicionantes estratégicos de la Guerra Fría y la deriva anticomunista. Por otro, también la izquierda sacó sus propias conclusiones. Ernesto Che Guevara, testigo directo de los hechos, comprendió que la única respuesta a la violencia imperialista pasaba por la resistencia armada (Krauze, 2011).

A finales de los cincuenta, los Gobiernos autoritarios entraban en crisis. La falta de legitimidad democrática de dictaduras y Gobiernos movilizaba a unas poblaciones acuciadas, asimismo, por un grave deterioro económico y social, en especial en los centros urbanos cuya desordenada expansión daba alas al descontento. Los deseos de reforma política recorrían la región. En 1956, Manuel A. Odría abandonaba el poder en Perú;

en 1957 y 1958 se ponía fin respectivamente a las experiencias de Rojas Pinilla en Colombia y Pérez Jiménez en Venezuela. En estos dos países la transición política siguió una fórmula similar: negociación previa entre elites y partidos con vistas a dotar de estabilidad al nuevo sistema y garantizar el funcionamiento de la democracia representativa a través del reparto y la alternancia en el poder, excluyendo a los comunistas. En Colombia, liberales y conservadores ponían fin a diez años de antagonismo e inauguraban el llamado régimen de Frente Nacional, que se prolongaría durante dieciséis años. En Venezuela, las reglas del juego político —*un sistema populista de conciliación de las elites*— quedaron establecidas en el Pacto de Punto Fijo suscrito el 31 de octubre de 1958 entre Acción Democrática, el social-cristiano COPEI y la Unión Republicana Democrática bajo el compromiso de defensa de la constitucionalidad y un Gobierno de unidad nacional. En otro orden, el 2 diciembre de 1956, el desembarco del Granma en Cuba de los líderes del Movimiento 26 de julio (M-26-7), Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, daba inicio a la revolución. En 1953 esos mismos guerrilleros anti-Batista habían fracasado en el intento de asalto al cuartel Moncada.

LA CEPAL Y EL MODELO ECONÓMICO. DESARROLLISMO Y OPERACIÓN PANAMERICANA

La ausencia de libertades y el déficit democrático no explicaban por sí solos la dinámica conflictiva de las sociedades latinoamericanas. Su origen se encontraba ligado asimismo a las profundas desigualdades socioeconómicas y a los niveles de subdesarrollo padecidos por sus habitantes. Por aquellos años, una innovadora escuela de pensamiento económico, llamada posteriormente estructuralismo, y encabezada por el ex director del Banco Central de Argentina, Raúl Prebisch, buscaba explicaciones al crecimiento desigual de América Latina y a las razones

de su atraso desde enfoques diferentes a los formulados por la teoría clásica del desarrollo (Dosman, 2010).

En febrero de 1948, la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) —de Naciones Unidas— ubicada en Santiago de Chile, iba a profundizar en el conocimiento científico de la realidad material de la región —al contar con series regulares de datos económicos y sociales por países— e impulsar con vigor esas investigaciones y preocupaciones a partir de dos teorías complementarias magistralmente sistematizadas por Prebisch, su primer secretario ejecutivo (1949-1963): la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) y la doctrina centro-periferia. La CEPAL —adicionalmente— plantearía una crítica sistemática de los diseños económicos defendidos por el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos, cuya diplomacia, además, había manifestado su oposición a la creación de este organismo de la ONU (Holden y Zolov, 2000).

El sistema de comercio mundial donde se proyectaba dinámicamente un deterioro en términos de intercambio condenaba —según Prebisch— a los espacios periféricos a ser simples exportadores de materias primas y consumidores de costosos productos manufacturados de los centros industrializados, lo que se traducía en un empobrecimiento de sus economías incapaces de generar ahorro y acumulación capitalista. La industrialización, al no producirse de forma espontánea, debía provocarse deliberadamente. Así pues las estrategias hacia el desarrollo latinoamericano pasaban por la activa presencia del Estado para impulsar un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, orientar el crecimiento hacia adentro, *desarrollo hacia adentro* —menor apertura al exterior— atraer la inversión extranjera y construir mecanismos de cooperación e integración regional capaces de superar el problema de los limitados mercados nacionales (Pérez Herrero, 2007). En 1949, Prebisch redactaba su trabajo *El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas*, que a modo

de introducción al *Estudio Económico de América Latina* (1948) serviría para enunciar las bases de su pensamiento. A la larga, estas recetas (ISI, intervencionismo, proteccionismo, integración) modelaron buena parte de las economías latinoamericanas hasta la década de los ochenta (Dosman, 2010).

Los años cincuenta serían para la CEPAL un periodo de gran actividad creadora y de notable influencia, aunque no sin dificultades. Al liderazgo de Raúl Prebisch se sumó la calidad intelectual de unos brillantes colaboradores —Celso Furtado, Víctor L. Urquidi, Regino Boti, Jorge Ahumada, Osvaldo Sunkel o Aníbal Pinto— determinantes en las nuevas concepciones del desarrollo. ¿Qué convocaba a estos jóvenes economistas y sociólogos en torno a la CEPAL? En primer lugar, la conciencia de participar en una experiencia única, un desafío intelectual como pocos: en la creación de América Latina. Se trataba de comprender el lugar de América Latina en el sistema económico internacional y resolver sus problemas económicos, tecnológicos y de desarrollo atendiendo a sus propias experiencias, no a las de los países industriales. Como llegaría a reconocer el diplomático mexicano y fundador del Fondo de Cultura Económica, Daniel Cosío, "antes de la CEPAL no nos conocíamos, estábamos aislados. El gran mérito de la CEPAL fue brindar pruebas de nuestros comunes denominadores [...] La CEPAL fue un elemento de cohesión latinoamericana [...], un sentimiento latinoamericano, una forma latinoamericana de acción, una forma de pensar latinoamericana" (Palazuelos, 2014). Y en segundo término, el pluralismo y respeto ideológico —desde la izquierda hasta la democracia cristiana—, que acompañaba un trabajo de equipo compartido, cuando los vientos de McCarthy arreciaban en la sede de la ONU (Devés, 2003).

Sus innovadoras concepciones encontraban asimismo un campo propicio a la hora de su divulgación. La teoría cepalina encajaba con los proyectos emprendidos por varios Gobiernos americanos, tanto en el orden de la integración y cooperación

regional como respecto a las políticas industriales. El 14 de octubre de 1951, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmaban la Carta de San Salvador, origen de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). Entre 1956 y 1957, Raúl Prebisch lanzaría su proyecto de un Mercado Común Latinoamericano, aleccionado por el avance de la construcción europea tras la Conferencia de Messina y los Tratados de Roma. Simultáneamente, en América del Sur la industrialización acelerada desde el Estado —piedra angular del crecimiento, la justicia social y la modernización— tomaba cuerpo en el llamado desarrollismo, aplicado por una nueva generación de estadistas.

En Brasil, el presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), bajo su lema "Cincuenta años de progreso en cinco años", ponía en marcha el Plan Metas, y en Argentina, Arturo Frondizi (1958-1962), la rápida industrialización. Ambos fomentaban la llegada del capital extranjero. Para Frondizi, más allá de lo económico, esa ideología concebía un proyecto nacional, relacionado con la cultura, las instituciones y la paz social, donde todos los recursos de la nación se enfocaban al impulso de la Argentina.

Las demandas latinoamericanas a favor de los avances democráticos y de mejores condiciones económico-sociales acabaron proyectándose sobre el sistema interamericano para alcanzar directamente a los Estados Unidos, cuyas relaciones con los países de la región se habían ido deteriorando de forma notable. La Administración Eisenhower no solo amparaba dictaduras anticomunistas, sino que seguía sin comprometerse con el desarrollo del continente ni tampoco favorecía una más estrecha colaboración económica. La falta de un amplio programa de ayudas seguía caracterizando la acción de Washington hacia sus vecinos del sur, muchos de los cuales mostraban su decepción ante la asimetría que arrastraba el panamericanismo: los progresos en materia de cooperación jurídica o de seguridad no se correspondían en absoluto con los de naturaleza económica, prácticamente inexistentes. El último episodio

de este desencuentro tuvo lugar en la Conferencia Económica de la OEA de Buenos Aires (15 de agosto-4 de septiembre de 1957), clausurada sin avances sustanciales. No solo fracasaba la aprobación de un proyecto de convenio económico general, sino también la creación de un banco interamericano —ambas ideas muy apreciadas por buena parte de las delegaciones asistentes— y la apuesta por un gran mercado regional defendida desde la CEPAL. Un resultado así añadía mayor desesperación en la frustración latinoamericana.

Las tensiones afloraron. Durante la gira efectuada por el vicepresidente Richard Nixon en Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia y Venezuela (28 de abril-15 de mayo de 1958), el mensaje comunicado por la mayoría de los Gobiernos fue siempre el mismo: de no mejorarse las condiciones económicas, se producirían graves estallidos sociales que afectarían a la estabilidad general. El propio Nixon pudo comprobar en persona el sentimiento antinorteamericano que anidaba en las calles. En Montevideo, en Lima y, sobre todo, en Caracas, su presencia desencadenaba importantes manifestaciones de protesta y rechazo. En la Universidad de San Marcos, los estudiantes declaraban a Nixon *persona non grata*, y en Caracas, los incidentes incluyeron conatos de agresión a la comitiva oficial. Como consecuencia del accidentado viaje, la Administración republicana procedió a reevaluar su estrategia en la zona. Si bien se responsabilizaba de los altercados a los sectores comunistas, Washington decidía abrirse a un cambio en el terreno de la cooperación económica sin alterar sus líneas básicas en el ámbito estrictamente político.

En esta atmósfera iba a ver la luz una importante iniciativa brasileña: la Operación Panamericana. Aprovechando los incidentes sufridos por Nixon, el presidente Juscelino Kubitschek dirigía una carta personal a Eisenhower —28 de mayo de 1958—, transmitiéndole la necesidad de proceder a reformular las relaciones hemisféricas y estudiar conjuntamente aquellas acciones correctoras que les dieran mayor estabilidad. Aun cuando el

gobernante brasileño no concretaba un plan específico, la respuesta de Eisenhower aceptando abrir consultas entre ambos países auguraba un nuevo escenario.

La doctrina brasileña fue concretándose en los meses posteriores. Para Kubitschek, se trataba de revisar a conciencia el panamericanismo, situando el desarrollo económico como uno de sus ejes centrales. Así lo planteaba el 20 de junio de 1958 en un discurso público en el Palacio de Itamaraty ante los embajadores latinoamericanos. En su opinión, el subdesarrollo surgía como principal desafío del sistema interamericano que, además de su faceta jurídica y defensiva, necesitaba el complemento ineludible de la económico-social. En el tiempo de la Guerra Fría, sostenía, la desigualdad y la pobreza amenazaban con desestabilizar profundamente a las sociedades americanas, que de verse empujadas hacia el comunismo acabarían resquebrajando la unidad del mundo occidental. El deseo de comprometer a los Estados Unidos en la industrialización periférica era evidente. El 9 de agosto de 1958 el Gobierno de Río remitía a todas las repúblicas americanas el Programa de Desarrollo Económico del Continente, con seis puntos básicos. La Operación Panamericana quedaba oficializada. Su eco fue inmediato, galvanizando en torno a sus ideas a administraciones y opiniones públicas. El respaldo argentino era completo. De esta forma, Kubitschek y Frondizi pasarían a defender una misma fórmula: el peligro para la seguridad del hemisferio estaba en el atraso económico, no en la amenaza de potencias extracontinentales.

La lucha contra el subdesarrollo ocupaba ahora un mayor espacio. Aun cuando Estados Unidos ignoraría calculadamente la Operación Panamericana, su cambio en materia de ayudas era evidente. Todas esas iniciativas, sin embargo, quedaron empequeñecidas frente a los sucesos políticos, ya que a esas alturas la atención se trasladaba a la isla de Cuba, donde los acontecimientos revolucionarios iban a determinar la historia presente de América Latina.

CAPÍTULO 2

DE LA REVOLUCIÓN CUBANA A LOS GOLPES DE ESTADO: CONFLICTIVIDAD POLÍTICA E INTEGRACIÓN ECONÓMICA (1959-1973)

El proceso histórico que se inaugura en 1959 abrió en América Latina una etapa caracterizada una alta conflictividad a todos los niveles. La incorporación de nuevos actores políticos y sociales a la esfera pública, junto con la masificación de propuestas ideológicas de naturaleza rupturista (revolucionarias/contrarrevolucionarias) fueron profundizando fuertes desajustes en el sistema político-institucional, por un lado, y en el patrón de desarrollo económico, por otro. En efecto, la exigencia de demandas cada vez más intensas fue aumentando el nivel del conflicto sociopolítico, llegando a profundizar los niveles de violencia política y de enfrentamiento público en sus diferentes facetas (Ansaldi y Giordano, 2012). Respecto al orden internacional, la Guerra Fría se transformó definitivamente en el marco que determinaba en gran parte los conflictos de la región, atravesando de forma transversal las sociedades latinoamericanas, aunque cada una de estas —de acuerdo a sus particularidades, siempre presentes— procesó dicha conflictividad de diferente forma (Holden y Zolov, 2000).

En la dimensión económica, ya desde mediados del siglo XX se manifestaban en América Latina los primeros signos de debilitamiento del modelo desarrollista que se había impulsado desde la década de los treinta. Esto se puede resumir en la incapacidad del sistema productivo para crear empleo en número suficiente, absorbiendo a la vez el alto crecimiento demográfico de la región. La generalización de la desocupación y el crecimiento del sector informal de los trabajadores fue aumentando el nivel de descontento, especialmente entre obreros y campesinos. Desde el punto de vista macroeconómico, se manifestó un aumento de los índices de inflación, de estancamiento productivo y del déficit de la balanza comercial, producto de los llamados cuellos de botella del modelo industrializador.

La situación socioeconómica del continente, en consecuencia, se deterioró de manera notable y generalizada, en especial desde finales de los años sesenta hasta bien entrada la década siguiente. Ese panorama, junto a la gran agitación obrera y a la movilización social, provocaron que las iniciativas a favor de la integración económica se hiciesen más comunes entre los países del continente, a la vez que la teoría de la dependencia y las visiones inspiradas en la CEPAL adquirían aún mayor influencia sobre una parte importante del mundo intelectual, administradores, técnicos, así como también en líderes políticos que asumieron el Gobierno entonces.

Se suscitó entonces la aparición de nuevos conflictos asociados a la modernización que vivía el continente, modernización que tenía muchos elementos de una sociedad tradicional y que por tanto resultaba incompleta y contradictoria. La manifestación de una intensa y masiva migración campo-ciudad fue aumentando a su vez —y popularizando en las ciencias sociales y otros actores— el fenómeno de la marginalidad, que se manifestó por varias ciudades, especialmente en los núcleos urbanos más poblados como Buenos Aires, São Paulo o Santiago de Chile. Nuevos conflictos, por lo tanto, de carácter sociocultural

se fueron haciendo presentes dentro de una sociedad latinoamericana cada vez más diversa y conflictiva (Del Pozo, 2012).

Estas profundas deficiencias de base del proyecto de industrialización comenzaron a mostrar sus primeros síntomas de agotamiento productivo, reflejo a su vez de la debilidad de la propuesta industrializadora y de la propia estructura social y cultural latinoamericana. Ello sin duda aumentó los niveles de frustración y de desencanto de amplias capas de la población, lo cual explicará su adhesión a opciones políticas de cambio social radical o, por otro lado, de apoyo a opciones autoritarias que cuestionaban los —escasamente desarrollados— sistemas democráticos que se habían instaurado en la región.

Desde el punto de vista de los procesos políticos, 1959 marca una coyuntura que estableció un punto de inflexión o una ruptura en muchos sentidos irreversible, e instala un paradigma de cambio social, o, dicho de otra manera, un paradigma utópico que alteró los equilibrios de poder, los lenguajes políticos e ideológicos, y la propia dinámica del proceso político en sí mismo: la Revolución cubana, triunfante ese año, se considera —ciertamente— como el hito fundamental para comprender la historia de América Latina de la segunda mitad del siglo XX.

Bajo esa consideración, la Revolución cubana y su rápida adopción del marxismo-leninismo como doctrina de ese nuevo régimen cambiaron las prioridades de distintos actores —internos, regionales e internacionales—, ya fueran partidarios del proceso cubano o sus frontales opositores, y especialmente de los Estados Unidos. Tanto la Alianza para el Progreso como la doctrina de la Seguridad Nacional, pasando por las propias iniciativas políticas auspiciadas por Cuba, deben ser consideradas manifestaciones notorias de este nuevo contexto histórico.

Uno de los elementos más distintivos y originales de la Revolución cubana, y que la distingue de las grandes revoluciones latinoamericanas del siglo XX —la mexicana de 1910, la boliviana de 1952 e incluso la nicaragüense de 1979—, radica en su

capacidad de proyectarse como una alternativa política e ideológica al *statu quo*, en lo que se llamó *el modelo cubano*.

Esto se manifestó también frente a la política exterior de la URSS, que enfatizaba ya desde la década de los treinta su tesis del *socialismo en un solo país*, y desde los años sesenta promocionó una cómoda política de distensión con su enemigo Estados Unidos. Al contrario de los soviéticos, Cuba marcó una diferencia con esa estrategia, en el sentido de propender a "exportar" su modelo a otros países de la región latinoamericana, e incluso del mundo de los países subdesarrollados de continentes lejanos como Asia y África. El tremendo impacto internacional del proceso cubano, quizá, es uno de sus aspectos más destacables de identificar, por su capacidad de proyectarse en diferentes sociedades nacionales del continente latinoamericano (Fermandois, 2004).

Bajo esas circunstancias, la masificación del ejemplo cubano trajo, de manera general, dos consecuencias. En primer lugar, la formación de movimientos guerrilleros, surgidos en diferentes países, desde México a Chile, y que intentaron "tomar" el poder en sus respectivas sociedades a través de la vía armada, estableciendo un factor de inestabilidad político-institucional sobre los sistemas políticos de la región. Sin embargo, el surgimiento de las guerrillas también se explica por la gran frustración de jóvenes de clases medias y bajas, de sectores obreros, campesinos y también con formación universitaria, quienes no encontraron un espacio de expresión política ni de participación en los sistemas políticos latinoamericanos.

Esto último puede relacionarse con otro fenómeno presente en la década de los años sesenta, de naturaleza generacional y también política: el protagonismo de los jóvenes en los espacios de participación política y social, lo que está relacionado con la juventud, en términos etarios, de la sociedad latinoamericana, en comparación con las más avanzadas. Fueron los jóvenes quienes impulsaron en parte estos cambios, desde

distintos espacios de la sociedad civil y desde organizaciones políticas específicas.

La segunda consecuencia de la Revolución cubana en el continente se vincula con el desencadenamiento de intervenciones militares en la esfera de la política, lo que tuvo derivaciones inesperadas a la vez que inéditas en el devenir latinoamericano. En efecto, la instauración de dictaduras encabezadas por las fuerzas armadas —cuyo primer hito lo podría marcar el golpe militar de 1964 en Brasil— inauguró una nueva etapa histórica, estableciendo regímenes de carácter novedoso, tanto en cuanto a los objetivos que perseguían dichos regímenes como a la violencia que aplicaron sobre la ciudadanía.

Tanto América del Sur como Centroamérica fueron gobernadas por duraderas dictaduras militares en la segunda mitad del siglo XX, en particular desde la década de los sesenta, aunque las excepciones siempre están presentes. Sin embargo, nuevamente hay que prestar atención al análisis de los casos particulares para determinar los elementos más centrales de dichas intervenciones y de las dictaduras que las siguieron. Lo que sí se puede asegurar es que las intervenciones demuestran el papel protagonista de las fuerzas armadas en la política latinoamericana, papel que en esta coyuntura se justificó en torno a las negativas consecuencias —de acuerdo a su visión— que trajo la Revolución cubana a los diferentes países.

Por lo que respecta a las instituciones culturales, la década de los sesenta también trajo aparejados interesantes fenómenos de cambio, en particular de la Iglesia católica. Esta institución, presente desde la conquista española y que facilitó la conformación de la identidad y del orden social del continente, si bien durante los siglos XIX y XX se había apoyado en los sectores más conservadores de la sociedad (además de establecer una firme alianza con el Estado oligárquico), tuvo una influencia importante sobre campesinos y obreros. Ya desde la tercera década del siglo XX, un sector pequeño de la Iglesia católica latinoamericana

se vio influido por las corrientes socialcristianas, aunque todavía no alcanzaba un predominio en las altas jerarquías.

Fue solo en el contexto post Revolución cubana, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando sectores de la Iglesia católica latinoamericana asumían una doctrina centrada en la necesidad de hacer cambios revolucionarios, o al menos reformas profundas en las estructuras económicas y sociales. Desde la llamada corriente socialcristiana, esta institución acogía elementos críticos al conservadurismo, aunque no fue hasta después de la Revolución cubana cuando se hicieron predominantes. Tras el golpe militar de Brasil en 1964, el Arzobispo de Olinda y Recife, Hélder Cámara, publicaba junto a quince obispos de Asia, América Latina y África, el *Mensaje a los pueblos del Tercer Mundo*, que planteaba la necesidad de realizar profundas reformas al orden social, llegando incluso a hablar de una "revolución radical". El propio Cámara se transformó en un decidido opositor a la dictadura militar brasileña.

Parte de esa evolución ideológica se denominó como la Teología de la Liberación, cuyo principal difusor fue el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. En síntesis, esta postura planteaba la idea de un cristianismo cercano a los pobres, y proponía una visión crítica de la sociedad capitalista, paso previo para la necesidad de la revolución. Inspirada originariamente en el Concilio Vaticano II (1962-1965), su formulación más acabada se realizó en la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en 1968 en Medellín (Colombia). También se vio una versión aún más radical, como fue —por ejemplo— la liderada por el sacerdote colombiano Camilo Torres, quien se uniría a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y terminaría muriendo en combate en 1966.

Por tanto, se hace necesario plantear una interpretación o una mirada más analítica de este "ciclo revolucionario", caracterizado por la presencia manifiesta de un fuerte conflicto que alcanzó todos los ámbitos de la vida colectiva.

LA REVOLUCIÓN EN CUBA COMO EJE DE INFLEXIÓN HISTÓRICA

El 1 de enero de 1959, y tras varios años de lucha guerrillera del Movimiento 26 de julio (M-26-7), Fidel Castro proclamaba una histórica revolución para terminar con el autoritarismo y la corrupción política. En la isla, después de la tardía independencia de 1898, sectores campesinos e intelectuales fueron expresando su descontento frente a lo que catalogaron como un *neocolonialismo* con epicentro en los Estados Unidos. Desde el asalto al cuartel Moncada de 1953, el M-26-7 había ido afinando un planteamiento político donde se adivinaban componentes nacionalistas, democráticos y antiimperialistas. Incluso podría relacionarse el liderazgo de Fidel Castro con un ingrediente propio de los movimientos populistas.

Si Cuba se presentaba como un polo de atracción para amplios sectores progresistas de América Latina, ese mismo proceso era percibido por los Estados Unidos como una amenaza directa a su seguridad e intereses nacionales (geopolíticos, económicos, estratégicos), ya fuera por el propio proyecto en sí como por la posibilidad de su expansión continental. Con el triunfo revolucionario y la aplicación de las primeras disposiciones del nuevo Gobierno, el cúmulo de desencuentros La Habana-Washington fue en constante aumento, sin tregua. Y conforme la isla se alejaba de la histórica influencia estadounidense, iniciaba un inédito acercamiento a la URSS.

Tres asuntos trazaron básicamente el camino que llevó a Cuba y a Estados Unidos de la desconfianza inicial a la completa ruptura. En primer lugar, la aprobación de la Ley de Reforma Agraria (17 de mayo de 1959), cuyas disposiciones afectaban a los intereses e inversiones norteamericanos. Inicialmente, el Gobierno de Eisenhower (1953-1961) reconoció el derecho del Estado cubano a expropiar grandes latifundios, incluyendo los de la United Fruit, pero rechazaba el monto y la forma de las

compensaciones a los propietarios estadounidenses afectados por el programa agrario (Krauze, 2011). El segundo vino del establecimiento de relaciones diplomáticas de La Habana con la Unión Soviética —9 de mayo de 1960—, que estuvo precedido de la visita oficial del viceprimer ministro soviético a la isla, Anastas Mikoyan, y de la firma del Convenio de Intercambio Comercial y de Pagos. Azúcar por petróleo era la base del intercambio entre ambos países.

A los acuerdos con la URSS seguirían otros con la República Democrática Alemana, Checoslovaquia o Polonia. En el verano de 1960, Estados Unidos parecía convencido de que el Gobierno revolucionario construía una alianza con el campo socialista. Cuando en junio llegó el primer cargamento de petróleo soviético a Cuba, y Texaco y Esso se negaron a refinarlo, Fidel Castro procedió a la incautación de sus instalaciones y a la nacionalización de bienes, empresas e industrias norteamericanas. En una escalada de la tensión, Eisenhower suspendía la cuota azucarera para asfixiar económicamente a la isla. El tercer contencioso nacía del respaldo cada vez mayor de Washington a los sectores contrarrevolucionarios cubanos. El 3 de enero de 1961, Cuba y Estados Unidos rompían relaciones diplomáticas. Meses después —en diciembre— Castro declaraba su adscripción al marxismo-leninismo (Thomas, 2006).

Uno de los elementos más atractivos del proceso revolucionario nos remite al influjo del pensamiento de Ernesto Che Guevara, miembro del M-26-7 y ministro —posteriormente— del régimen cubano. Médico de profesión y argentino de nacimiento, el revolucionario definió tempranamente una matriz de lucha guerrillera caracterizada por su radicalidad y novedades teóricas. Dejando a un lado los planteamientos etapistas y gradualistas de transición al socialismo, popularizados desde mediados de los cincuenta por Nikita Kruschev (1953-1964), los que suponían que inevitablemente —por *las leyes de la historia*— los países avanzarían al socialismo por la vía pacífica,

el Che discrepó de tales tesis. De acuerdo con su parecer, las condiciones de la revolución socialista había que forzarlas y generarlas desde un *foco* que extendería la insurrección hacia la sociedad en su conjunto.

La democracia parlamentaria, de escaso desarrollo en América Latina, jamás entregaría las opciones —opinaba— para concretar una revolución que acabase con el régimen capitalista, sino que solamente mediante la vía insurreccional y armada se podría implantar el socialismo. Y no solo en América Latina, pues el primer lugar donde se intentó llevar a la práctica esta tesis sería el Congo, país entonces recién independizado de Bélgica. El *foquismo* de Ernesto Che Guevara se constituyó en la novedad dentro del panorama de las izquierdas de la región, y sus escritos y reflexiones, en el manual para toda una generación de jóvenes revolucionarios. Su apresamiento y muerte —8 de octubre de 1967 en Bolivia cuando intentaba levantar un foco guerrillero en el espacio andino— elevarían su figura a la categoría de mito. Para Estados Unidos —cuyo operativo contrainsurgente había ayudado en la localización y eliminación del Che— se trataba del inicio del fracaso de toda una estrategia armada, a partir del rechazo campesino a sumarse al proyecto insurreccional.

ENFRENTARSE AL FANTASMA REVOLUCIONARIO: ALIANZA PARA EL PROGRESO Y DOCTRINA BETANCOURT

La Revolución cubana rápidamente se transformó en un problema para las autoridades estadounidenses. Recién instalado en la Casa Blanca, John F. Kennedy (1961-1963) abordó de inmediato el reto de mejorar la colaboración con las repúblicas americanas, condicionado por la sensación de la amenaza cubana. El 13 de marzo de 1961, a menos de dos meses de haber asumido la presidencia y en un acto inusual —reflejo de la *nueva*

frontera—, Kennedy anunciaba su proyecto estrella ante el cuerpo diplomático latinoamericano: la Alianza para el Progreso. Este se definía como un amplio programa de ayudas por diez años para América Latina, destinado a favorecer su crecimiento económico, acometer imprescindibles reformas sociales y fortalecer la democracia. Planteado como una ruptura con el pasado, esperaba que, de resultar exitoso, lograse transformar la sociedad y la política latinoamericanas (Smith, 2010) y así convertir los años sesenta en una década histórica de progreso democrático.

Sobre la Alianza para el Progreso —un desarrollo regional pensado en términos de seguridad nacional— convergían ideas y estrategias diversas (Taffet, 2007). De un lado, reflejaba singularmente las convicciones de Kennedy en torno a la decisiva importancia que los países subdesarrollados tenían como futuro campo de batalla de la Guerra Fría. Asimismo, en su concepción y en el formato adoptado, la Alianza para el Progreso encontraba su inspiración en la escuela de la teoría de la modernización, en Max Millikan y singularmente Walt Rostow, del Center for International Studies del MIT de Boston. Para estos, una ayuda exterior correctamente gestionada podía proporcionar el crecimiento prometido por Kennedy. Frente a la práctica de las administraciones precedentes, con una línea de ayudas escasas, de alcance limitado y enfocadas a evitar exclusivamente crisis políticas o militares, ahora se trataba de ofrecer un programa de ayudas contundente, de largo alcance y sostenido en el tiempo, mediante el cual los estados más atrasados fueran capaces de aprender a construir su propio desarrollo.

Para transformar esas teorías en recomendaciones, Kennedy formó un grupo de expertos, entre diplomáticos y académicos (Adolf Berle, Robert Alexander, Lincoln Gordon, Teodoro Moscoso o Arturo Morales), quienes dieron forma definitiva al proyecto. El asesor de la Casa Blanca —y escritor— Richard Goodwin redactaría el texto leído el 13 de marzo, además de ser

el autor del histórico nombre Alianza para el Progreso, un término que recibió el visto bueno del presidente por ser un digno sucesor del acuñado en la época de F.D. Roosevelt, la Política del Buen Vecino. Finalmente, la Alianza para el Progreso se concebía como una barrera de contención frente a la expansión revolucionaria cubana. El cambio social y el crecimiento económico, en un marco de instituciones libres, generaban estabilidad alejando el fantasma del comunismo. Modernización frente a revolución, en definitiva (Smith, 2010).

En su propuesta del 13 de marzo, Kennedy —citando la Operación Panamericana— reclamaba un gran esfuerzo cooperativo que diera satisfacción a las necesidades básicas de los ciudadanos de América Latina, garantizándoles *techo, trabajo y tierra, salud y escuela*, cinco palabras clave que repitió en castellano, enfatizando así su alcance. No se trataba solo de erradicar la pobreza; más bien de impulsar a estas naciones, situándolas junto a las más industrializadas del mundo. La tarea de organizar y articular este magno proyecto correspondería al Consejo Económico y Social de la OEA. El presidente se comprometía, igualmente, a agilizar en el Congreso la aprobación de una ayuda financiera de quinientos millones de dólares prevista desde la etapa de Eisenhower, a apoyar los procesos de integración regional, a estabilizar los precios de las exportaciones latinoamericanas y a mejorar la cooperación científico-técnica y las relaciones culturales y educativas, mostrándose convencido de que, como parte de esta iniciativa, los países reducirían sus gastos armamentísticos. Las expectativas suscitadas fueron enormes. Aunque no se ignoraba su naturaleza anticastrista, en América Latina el proyecto era recibido con esperanza. Kennedy gozaba de credibilidad entre sus dirigentes, y muchos pensaban en un tiempo nuevo de las relaciones hemisféricas (Dosman, 2010).

La reunión extraordinaria del Consejo Económico y Social de la OEA, en Punta del Este (Uruguay), del 5 al 17 de agosto de 1961, institucionalizó la Alianza para el Progreso con la firma

de dos documentos: la Declaración de los Pueblos de América y la Carta de Punta del Este. Ambos textos —concebidos como fuente constitutiva del sistema interamericano— incorporaban el conjunto de acciones previstas para favorecer el desarrollo económico-social y la calidad de vida de las sociedades latinoamericanas junto con las metas concretas a alcanzar. Estados Unidos fijaba una ayuda por valor de veinte mil millones de dólares a lo largo de diez años para programas de sanidad, educación, vivienda, carreteras o infraestructuras industriales; a cambio, los Gobiernos receptores se comprometían a emprender reformas agrarias y reformas fiscales, buscando una distribución más equitativa del ingreso nacional, así como a mejorar el funcionamiento de la Administración y el sistema de libertades. Especial relevancia se otorgaba a la reforma agraria, para atender así a uno de los mayores problemas del continente, como era la propiedad de la tierra además de su deficitaria productividad. A la hora de proceder a la aprobación de la Carta de Punta del Este, el representante cubano en esa reunión de la OEA, Ernesto Che Guevara, rechazó firmar el documento por considerarlo un instrumento expresamente diseñado en contra de la Revolución cubana y del socialismo, además de vaticinar el fracaso de la propia Alianza para el Progreso. Fue la única voz discrepante. Todas las demás delegaciones la ratificaron, incluido el amplio grupo de gobernantes poco sospechosos de ultraconservadurismo, como era el caso de los presidentes de Venezuela, Rómulo Betancourt (1959-1964), de Brasil, Jãnio Cuadros (1961) y el de Argentina, Arturo Frondizi (1958-1962).

El reformismo encontraba un clima favorable para reivindicarse. Ya el 13 de febrero de 1959, Rómulo Betancourt había formulado la llamada doctrina Betancourt. Según esta, y en tanto que principio articulador de su acción exterior, Venezuela no reconocería a ningún Gobierno de facto en América Latina que surgido de un acto de fuerza, interrumpiera a los electos legítimamente nacidos de la libre expresión del voto. El sistema

interamericano —así lo manifestaría el líder venezolano en diversas ocasiones— necesitaba incorporar esos principios y actuar de cordón profiláctico para no regresar a las anteriores experiencias autoritarias ni bajar la guardia frente al comunismo y los movimientos guerrilleros. Al propugnar su doctrina, Betancourt atendía tanto a su frente interno como al externo: a saber, coadyuvar a la consolidación política venezolana —sometida a una agitación social próxima a la lucha armada— propiciando paralelamente un entorno regional donde preservar la democracia se asumiera como *leitmotiv*.

A la Alianza para el Progreso, la Administración Kennedy añadía otra faceta más agresiva respecto a Cuba. Washington arreciaba en sus iniciativas desestabilizadoras y de injerencia, empleando la estrategia armada, las acciones encubiertas y el aislamiento político-económico. El 17 de abril de 1961, un grupo de mercenarios anticastristas adiestrados en Estados Unidos, Guatemala y Puerto Rico, con el apoyo logístico de la CIA, desembarcaban en Bahía Cochinos convencidos de que la invasión sería fulminante y decisiva para liquidar al régimen. Su estrepitoso fracaso y la imagen de un Fidel Castro encabezando la resistencia en Playa Girón contribuían, por el contrario, a reafirmar su poder así como el prestigio del Gobierno revolucionario ante el mundo, particularmente en el campo antiimperialista. Tras Bahía Cochinos, la Operación Mangosta —un abanico de operaciones de sabotajes dentro de la isla— aglutinaba los esfuerzos desestabilizadores de la CIA. Bajo ese clima ya de confrontación con Estados Unidos, una parte de la población cubana —60.000 para 1961— había decidido ya emigrar (Krauze, 2011). En el plano diplomático, Kennedy trataba, además, de aislar a Cuba presionando a los países del continente para que rompiesen sus relaciones bilaterales y accedieran a expulsarla del sistema interamericano, lo que sucedió el 31 de enero de 1962. El 4 de febrero, en respuesta, una gran asamblea popular aprobaba la Segunda Declaración de La Habana, donde se hacía hincapié en que América Latina no solo vivía en condiciones

objetivas para la revolución, sino que esta era inevitable dadas las condiciones de explotación presentes (Brands, 2010).

De manera inexorable, Cuba quedó inserta en la lógica bipolar. La amenaza de una agresión estadounidense empujaba a los dirigentes revolucionarios a buscar seguridad en los brazos de una URSS impaciente, a su vez, por rentabilizar las ventajas geopolíticas del nuevo aliado. La crisis de los misiles —octubre de 1962—, emplazó al mundo al borde del holocausto nuclear. El líder soviético Nikita Kruschev y Fidel Castro negociaron en secreto la instalación en la isla de misiles *ofensivos* capaces de alcanzar territorio estadounidense y otros espacios hemisféricos. La decisión del secretario general del PCUS, motivada tanto por el deseo de proteger a Cuba y afirmar su liderazgo en el movimiento socialista mundial como para neutralizar la superioridad balística intercontinental de Washington sobre Moscú, rompía el *statu quo* internacional así como el dogma de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ya con anterioridad, Washington había estacionado misiles nucleares en Turquía sin la menor consideración hacia Moscú.

El 22 de octubre, al descubrirse el operativo, el presidente Kennedy reaccionaba con firmeza. Decretaba un bloqueo naval en torno a la isla para impedir la llegada de barcos de transporte soviéticos con más misiles, convocaba a la OEA y al Consejo de Seguridad en busca de respaldo diplomático y exigía a la URSS el desmontaje de las instalaciones existentes y la finalización del rearme a Cuba. Tras días de una máxima tensión, el 28 de octubre Moscú aceptaba desmontar y reintegrar el armamento balístico bajo la supervisión de Naciones Unidas a cambio de la promesa tácita estadounidense de no invadir la isla. A la larga, Washington retiraría los suyos de Turquía. La negociación final, directa entre nórteamericanos y soviéticos, sin atender estos a la opinión de los dirigentes de la isla —quienes acabaron convencidos de haber sido un simple peón en una estrategia superior de Kruschev—, unida a otras diferencias (caso del papel de

la lucha armada en la transformación de las sociedades tercermundistas), enfriaría las relaciones entre La Habana y Moscú, un distanciamiento solo solventado —parcialmente— a partir de 1963 con el viaje de Fidel a la URSS y la firma de los acuerdos bilaterales de 1965, y de forma definitiva desde 1968, con el respaldo cubano a la invasión de Checoslovaquia. Entonces Cuba entraría con nitidez en los engranajes de la política exterior soviética (Latrèche, 2011).

Superada la crisis de los miles, América Latina regresaría a su tradicional posición como patio seguro de los Estados Unidos. Coincidiendo con la voluntad explícita de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara de *exportar la revolución*, Washington arrinconó sus promesas modernizadoras y democráticas, priorizando los postulados de seguridad y lucha contrainsurgente. Se trataba de endurecer las relaciones con los Gobiernos menos dóciles, fortalecer las alianzas con los círculos conservadores temerosos por igual ante el factor revolucionario e incrementar la ayuda a los ejércitos latinoamericanos encuadrándolos en su estrategia defensiva hemisférica.

Ni la Alianza para el Progreso ni la doctrina Betancourt alcanzaban el éxito augurado. La primera mostraba avances muy pobres en cuanto al desarrollo económico-social de los países, ya fuera por su deficiente funcionamiento interno o por el rechazo de las elites nacionales a las reformas agraria y fiscal. Tampoco —al igual que la doctrina Betancourt— lograba impulsar la democracia. Con toda probabilidad, la razón última del fracaso de la Alianza para el Progreso estribaba en el inherente conflicto entre sus ambiciosos objetivos humanitarios y el deseo —nada oculto— de ser un instrumento de la Guerra Fría. Por aquellas fechas, una avalancha de golpes de Estado recorrió América Latina —Argentina, marzo de 1962; Perú, julio de 1962; Guatemala, marzo de 1963; Ecuador, julio de 1963; República Dominicana, septiembre de 1963; Honduras, octubre de 1963—, expresión del agudo antagonismo vivido en el interior de las

sociedades latinoamericanas a raíz de la Revolución cubana y de las contradictorias promesas de los proyectos reformistas. Alarmado, Rómulo Betancourt mostraba al presidente Kennedy su decepción ante esa ola involucionista, que no tenía una respuesta coherente desde la Casa Blanca, convencido de que la ciudadanía latinoamericana acabaría identificando a Estados Unidos con el autoritarismo. Al igual —pensaba el dirigente venezolano— que sucedió en 1948.

Tras el asesinato de John F. Kennedy, la espiral represiva y las dinámicas contrainsurgentes aumentaron. Para su sucesor, Lyndon B. Johnson (1963-1969), evitar una *segunda Cuba* requería firmeza y contundencia, no instituciones representativas. Johnson nunca se sintió comprometido con la Alianza para el Progreso, ni la consideraba prioridad. Concentrado en la guerra de Vietnam y en su financiamiento, el programa estrella de Kennedy iría cayendo en un paulatino abandono. Dos sucesos, en Brasil y en República Dominicana, retrataban el tiempo sobrevenido. El 31 de marzo de 1964, los militares brasileños —con beneplácito norteamericano— derrocaban al presidente Joao Goulart (1961-1964), en un nítido episodio de lucha de clases.

En segundo término, la invasión estadounidense de la República Dominicana en 1965 completaba este oscuro panorama. Tras haber sido gobernada con mano de hierro por Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), el país vivía en 1963 una pequeña experiencia democrática con el presidente Juan Bosch. Brillante intelectual y crítico del imperialismo, Bosch era desalojado del poder a los pocos meses de acceder al cargo, acusado de connivencias castristas. Cuando el 24 de abril de 1965 un alzamiento popular, apoyado por los oficiales *constitucionalistas* dirigidos por el coronel Francisco Caamaño, reclamaba el retorno de Bosch y el restablecimiento de la Constitución democrática, la oligarquía dominicana y parte del ejército se opusieron, generándose una dinámica de confrontación civil.

El día 28, Lyndon B. Johnson ordenaba a los marines invadir la República Dominicana. Empleó más de 23.000 efectivos. Su estrategia discursiva se justificaba en la necesaria protección de los ciudadanos estadounidenses y en impedir otro Gobierno comunista sobre el hemisferio occidental. La revuelta inicialmente democrática y nacionalista, explicaba Johnson, había perdido su espíritu original manipulada por elementos castristas, en un complot financiado por Moscú, amenazando la seguridad de las repúblicas americanas. Nada lo confirmaba. Por el contrario, el propósito último de la invasión era neutralizar el presumible éxito de los *constitucionalistas* y favorecer al anticomunismo conservador.

Para amortiguar las críticas, Washington conseguía dotar de cobertura jurídica en la OEA a la agresión militar. Sus marines pasaron a formar parte de la Fuerza Interamericana de Paz, creada *ad hoc* y que, integrada por siete países pero bajo su control, debía contribuir a la pacificación interna. Paralelamente, una comisión —también de la OEA—, negociaría una tregua entre los bandos. El coronel Caamaño, símbolo de la dignidad dominicana, denunciaba la injerencia estadounidense y la parcialidad del organismo interamericano. Su proyecto formulaba un programa democrático y nacionalista para República Dominicana que no llegó a tener éxito. A la larga, la normalización interna significó el éxito del conservadurismo. En septiembre de 1965 la OEA concretaba un plan pacificador y la aceptación —por las partes— de un Gobierno provisional con el cometido de preparar nuevas elecciones. En 1966 las urnas otorgaron la presidencia a Joaquín Balaguer (1966-1978), antiguo colaborador de Trujillo. Juan Bosch y los *constitucionalistas* quedaban fuera. Como sucedió con la Guatemala de Arbenz, la agresión al pueblo dominicano, amparada desde la OEA, se conformaba como instrumento para contrarrestar cualquier proyecto autónomo que se apartara de la influencia estadounidense. El desprestigio del sistema interamericano era ya completo.

CONFLICTOS POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA: DICTADURAS Y GUERRILLAS

En el frente interno, una de las primeras consecuencias del proceso cubano consistió en la formación de guerrillas insurgentes bajo la clara influencia del *foquismo* guevarista. Desde las ortodoxas y con base campesina Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), hasta el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el Perú y en Chile, pasando por los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina, los Tupamaros en Uruguay y Acción Libertadora Nacional en Brasil, además de los países de América Central, muchos jóvenes universitarios de clase media, campesinos y trabajadores, integraron activamente estos movimientos. En algunos casos, las guerrillas tuvieron mayor fuerza que las organizaciones clásicas de la izquierda partidista, aunque no más que los populismos de mediados de siglo (Dabène, 2000).

Entre estos grupos guerrilleros se ha destacado especialmente las FARC-EP, grupo nacido en 1964 sobre la base del Partido Comunista Colombiano. A pesar de que la violencia política y social es una característica del país desde mediados del siglo XX, las FARC —junto al Ejército de Liberación Nacional, ELN, y otras guerrillas de menor alcance— se transformaron con el tiempo en uno de los principales actores sociopolíticos de Colombia, también llamados paraestatales. Esto se ha explicado por variados elementos: la difícil penetración del Estado colombiano y del insuficiente monopolio de las fuerzas armadas en los territorios alejados, la complejidad geográfica del país, junto a la falta de representatividad del bipartidismo de los partidos Liberal y Conservador, han facilitado el surgimiento de estos grupos, que funcionaron con mucha autonomía desde la década de los sesenta. En el caso de las FARC-EP, es sintomático que su surgimiento esté en directa vinculación con las llamadas Repúblicas Independientes, unidades político-territoriales

autónomas en las cuales hacen un contrapeso —y a veces un virtual reemplazo— del aparato del Estado. Esta guerrilla, en un caso atípico, se ha expandido en la década de los ochenta y noventa (Malamud, 2010a).

Sin duda, el caso de las FARC-EP resulta ser un extremo respecto a la influencia de las guerrillas; no obstante, el ejemplo es útil para comprender el impacto de estas organizaciones en las sociedades nacionales.

En los restantes países de la región latinoamericana, sin embargo, muchos ciudadanos y grupos de poder reaccionaron rápidamente a lo que denominaron como *la amenaza del enemigo interno*, dentro de los cuales las guerrillas eran un actor de primer orden (también los partidos y organizaciones de la sociedad civil). Dentro de ese contexto, y tras la intervención militar de Guatemala en 1954 y de Brasil diez años más tarde, muchos países de América Latina experimentaron una proliferación de Gobiernos militares autoritarios, algunos de los cuales ya predominaban antes de la Revolución cubana. Entre estos podemos nombrar el caso de Paraguay, país en el cual el general Alfredo Stroessner encabezó una férrea dictadura entre 1954 y 1989, cruzando prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX. Fundamentada en el control de las fuerzas armadas y del Partido Colorado, se estructuró así un tipo de *Estado patrimonialista*. La dictadura de Stroessner solo pudo ser derrocada en 1989 a través de un golpe militar, propinado por el esposo de su hija, también militar.

Dentro de estos regímenes también sobresale el liderado por la familia Somoza en Nicaragua (Anastasio Somoza García y sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle), entre 1934 y 1979, cuando fue derrocado por una revolución. También se destaca la dictadura de Haití, liderada por François Duvalier y su hijo Jean-Claude Duvalier, que gobernaron ese país entre 1957 y 1986, siendo también derrotados por una insurrección y un golpe militar. En muchas sociedades de la región, sin duda, las

fuerzas armadas eran un actor protagonista en la política desde los mismos días de la independencia, a comienzos del siglo XIX.

En lo que respecta a Sudamérica, y como reacción al planteamiento *foquista* post 1959, las fuerzas armadas comenzaron a percibir como un grave peligro la amenaza representada por las guerrillas nacionales y por los restantes actores sociopolíticos. De esta forma surgieron regímenes que algunos autores denominaron como *burocrático-autoritarios*. Tanto en Brasil (1964), Argentina (1966 y 1976), Bolivia (1972), Chile (1973) y Uruguay (1973) surgieron regímenes de claro perfil anticomunista y conservador, pero en otros países también se originaron Gobiernos militares de corte nacionalista y reformista, como es el caso del Perú (1968) y Panamá (1969). La hegemonía militar fue tan generalizada que en 1978, por ejemplo, solo cuatro países escapaban al autoritarismo castrense: México, Colombia, Venezuela y Costa Rica (Rouquié, 2011).

El caso de Brasil merece una mirada aparte, porque constituye el primer país que se vio afectado por estas intervenciones de las fuerzas armadas, de nuevo cuño. A comienzos de la década de los sesenta, durante la presidencia de Jãnio Quadros (enero-agosto de 1961), se manifestó un cierto "populismo de izquierda", muy en la línea de Getulio Vargas en su última Administración. Presionado por los militares, actor muy poderoso en el contexto de la sociedad brasileña, finalmente Quadros deberá renunciar al cargo, que asume João Goulart (1961-1964), quien había sido exministro de Trabajo de Vargas.

Con una ideología muy reformista y nacionalista —aunque no marxista-leninista—, el Gobierno de Goulart se caracterizó por una política exterior independiente de los Estados Unidos y por el planteamiento de ciertas reformas sociales, como la reforma agraria, el incremento de la inversión pública en educación y el aumento de impuestos a las rentas más altas del país. Frente a una situación considerada de grave amenaza, las capas medias y altas se movilizaron activamente, lo que a su vez se

sumaba a la actitud recelosa —cuando no abiertamente opositora— de Washington hacia ese Gobierno. Johnson consideraba que un Brasil *rojo* tendría las mismas repercusiones geoestratégicas en América Latina que las suscitadas por la proclamación de la República Popular China en Asia —y en el conjunto del equilibrio mundial— en 1949. Aunque en el momento de su caída, Goulart gozaba de un respaldo popular del 76 por ciento, las clases conservadoras desconfiaban de su programa de reformas estructurales en el ámbito educacional, fiscal, político y agrario, llamadas *reformas de base*, temiendo un vuelco socialista (Moniz Bandeira, 2004).

Esta situación incentivó a las fuerzas armadas —de gran protagonismo en el país al menos desde los años treinta— a intervenir en la institucionalidad política. Recurriendo a los métodos de guerra civil para destruir a la oposición y a un virulento discurso anticomunista, el ejército de Brasil inauguraba con este golpe una serie de intervenciones en el Cono sur prolongadas hasta los años setenta. El golpe en Brasil, ejecutado en la noche del 31 de marzo de 1964, dio inicio a una dictadura de veinte años de duración (Del Alcázar, 2011).

En el caso de Argentina, bajo el teniente general Juan Carlos Onganía (1966-1970), se implantó un régimen militar autodenominado Revolución argentina, tras derribar al presidente Arturo Illia (1963-1966). En este país, de fuerte tradición militarista y caudillista durante los siglos XIX y gran parte del siglo XX, se manifestó el tipo ideal de lo que conocemos como *regímenes burocrático-autoritarios*. El componente principal de estos modelos no solamente se definió por su impronta anticomunista y partidaria de un orden tradicional, sino también por la conformación de una alianza social compuesta por tecnócratas, empresarios y militares, quienes tenían una visión específica de desarrollo económico basada en el nacionalismo y en el proteccionismo, aunque desde una perspectiva de economía capitalista en la cual la propiedad privada esté férreamente

resguardada. Igualmente, este régimen burocrático-autoritario enfatiza el carácter permanente, institucional y transformador del mismo, marcando un cambio respecto a la transitoriedad de las intervenciones militares latinoamericanas de gran parte del siglo XX. En el caso de Argentina, esto se dio en el marco de un orden social tremendamente movilizado y con fuertes señales de inestabilidad, producto de la ola de descontento generada por la precaria situación económica, por la prohibición legal del peronismo y por la aparición de las guerrillas armadas.

En ese último sentido destacó el movimiento de los Montoneros, grupo surgido de la Juventud Peronista. Su principal interés radicaba en presionar al Estado con el fin de levantar la orden de no ingresar al país que pesaba sobre Juan Domingo Perón desde su derrocamiento. Política e ideológicamente, promovían lo que denominaban como *socialismo nacional*, que intentaron implantar a través de la lucha armada y cuya primera acción pública —en mayo de 1970— fue el secuestro, juicio y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, principal protagonista del golpe antiperonista de 1955.

De esta forma, los conflictos internos de los países de la región latinoamericana, con una fuerte polarización político-ideológica como componente central y una utilización más o menos general de la violencia política, fueron marcando el desarrollo histórico desde el triunfo de la revolución en Cuba.

La segunda mitad de los sesenta —asimismo— se abrió con grandes oportunidades para el éxito del socialismo, liderado ahora por Cuba. Ejemplo de su gran influencia fue la promoción de iniciativas como la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), y su Proclama del 10 de agosto de 1967. Basta revisar simplemente las tres comisiones en las cuales se dividió el trabajo de la conferencia para comprender su alcance y significación: "La lucha revolucionaria antiimperialista en América Latina"; "La posición y acción común frente a la intervención político-militar y la penetración

económica e ideológica del imperialismo en América Latina", y, por último, "La solidaridad de los pueblos latinoamericanos en las luchas de liberación nacional".

Es necesario subrayar que las tesis que levantó la OLAS —reunión a la cual asistieron más de quinientos delegados de movimientos de América Latina, Asia y África— intentaron posicionar a Cuba como un nuevo centro del comunismo mundial, planteándose como alternativa al modelo ortodoxo de la URSS, así como también una alternativa al comunismo chino, aunque en América Latina, salvo excepciones, la influencia de esta última corriente fue menor. Puede concluirse que esta reunión reafirmó la creencia de la lucha armada de guerrillas como forma de extender el socialismo como régimen político y económico. De todas formas, la muerte del Che Guevara —poco tiempo después de la conferencia—, así como las dictaduras militares de comienzos de la década siguiente, terminaron por restarle importancia a la OLAS.

Por entonces la inestabilidad alcanzaba también a uno de los países con uno de los mayores indicadores de estabilidad política civil y social: México. Surgido de una profunda revolución a comienzos de siglo XX, que duró en rigor más de una década, el país norteamericano alcanzó niveles de desarrollo económico aceptables para su época, basado sobre todo en un férreo control político detentado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había sido fundado por el expresidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), aunque la denominación de PRI corresponde a la década de los cuarenta (1946) (Knight, 2001).

Sin embargo, lo que comenzó en la década de los treinta como un Gobierno basado en un partido nacional, pluriclasista y que representaba la totalidad de los grupos triunfantes de la revolución de 1910, pronto asumió características de autoritarismo y corrupción. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, México creció económicamente de una forma muy sustentable, pero el Gobierno y la maquinaria burocrática

del PRI —manteniendo una fachada de democracia con la no reelección presidencial como su sello fundamental— cayeron en descrédito sobre todo entre jóvenes universitarios y de clases medias, quienes en todo el mundo occidental fueron protagonistas de movilizaciones sociales en diversos países, desde Francia a Estados Unidos.

En el marco de una protesta estudiantil, el Gobierno mexicano ordenó al ejército reprimir a miles de personas en la Plaza de las Tres Culturas, en Ciudad de México. Lo que se conoció como la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, tuvo un saldo de víctimas que aún hoy genera controversias, pues hay quienes sostienen que fueron veinte los muertos, mientras otros argumentan que hubo hasta doscientos. Incluso la diplomacia de los Estados Unidos fue consciente de la gravedad de los incidentes, reflexionando sobre los desafíos que se abrían al sistema priista. Lo cierto es que el caso de México demuestra una contradicción de un país con crecimiento económico y expansión de servicios públicos, pero cuyo régimen de monopartidismo democrático, por otra parte, causó un descontento en una parte importante de la ciudadanía. Ciertamente, la matanza de Tlatelolco marcó un antes y un después en la historia reciente mexicana, al dar inicio a una larga transición política que culminó solo el año 2000, cuando el PRI perdió el poder ejecutivo.

Otro país con una trayectoria aparentemente distinta a la mayor parte de la región es el Perú. De pobre desarrollo democrático y con una economía rica en recursos naturales, pero débil en crecimiento y distribución, los militares se constituyeron en un actor clave de la política local. Desde el golpe militar de 1930, pasando por la represión del APRA, uno de los movimientos populistas latinoamericanos más significativos, el país prácticamente conservaba sus raíces señoriales, aunque en los cincuenta se fortalecieron el Estado, la conectividad y los servicios públicos. En la década siguiente, y tras ser derrotada con relativa facilidad la amenaza de una guerrilla de perfil *foquista*,

la situación en el Perú se encontraba entre la inestabilidad económica, la crisis del sistema de partidos y la falta de gobernabilidad del último presidente antes del golpe militar, Fernando Belaúnde Terry (1963-1968).

El 3 de octubre de 1968 ascendió al poder, a través de un golpe de Estado, el general del Ejército Juan Velasco Alvarado (1968-1975), quien encabezó un régimen militar definido por su contenido nacionalista, antioligárquico y modernizador, aunque se alejó de una postura de izquierda ortodoxa. En el ámbito internacional, Perú, manifestando una postura contraria a las restantes dictaduras latinoamericanas, establecería relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, suscribiendo tratados de ayuda militar y comercial. Todo ello en el marco de un contexto regional extremadamente complejo, ya que los problemas limítrofes con su vecino Chile empeoraron tras unas décadas.

En el orden interno, el régimen de Velasco Alvarado puso en práctica una serie de transformaciones, como la reforma agraria, la cual intentó modificar sustancialmente el sistema de propiedad y social que había existido en el Perú desde hacía décadas, e incluso siglos. En efecto, el llamado *gamonalismo*, o en palabras más simples, el sistema de poder liderado por los latifundistas principalmente en el centro y sur del país, fue reemplazado en vastas zonas por un modelo cooperativo o estatal, lo que acarreó profundas consecuencias para el país en todos los ámbitos. Si bien los alcances de la reforma agraria fueron discutidos en la posteridad, es indudable su carácter transformador y modernizador.

Por otra parte, un segundo eje de políticas estuvo dado por la relación del Estado con la sociedad. En un hecho sin precedentes en los regímenes militares latinoamericanos, Velasco Alvarado creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, SINAMOS. Catalogado por algunos como SIN-AMOS, esta estructura tenía un doble rol de control y movilización a favor del Gobierno castrense. En la práctica, el SINAMOS

cumplía el rol de un partido político único, controlando férreamente a los sectores organizados en el Perú, un país en el cual las organizaciones de izquierda, sumadas al siempre poderoso APRA, tenían una influencia notoria en el mundo social, principalmente indígena y estudiantil. Con todo, Velasco Alvarado representó un fenómeno político interesante en el panorama regional, justamente por encarar de manera definitiva la modernización del país, aunque prescindiendo de las credenciales democráticas, que en el Perú no tuvieron un desarrollo muy elevado (Pérez Herrero, 2007).

Distinto es el caso de Chile. Al igual que otros países como Uruguay, Chile había desarrollado una temprana consolidación de la democracia política desde la tercera década del siglo XX, al menos en comparación con las débiles instituciones de la región. Sin lugar a dudas, uno de los componentes de esta avanzada configuración de la democracia política es la existencia de un sólido sistema de partidos que movilizó a un amplio sector de la sociedad que se asemejaba a Europa occidental. En el ámbito económico, si bien el país había iniciado un moderado plan de industrialización, en la práctica su economía dependía de la exportación de cobre, controlado por empresas norteamericanas.

A mediados de siglo, en Chile se había consolidado una temprana alianza de izquierda marxista, compuesta por sus dos partidos históricos: en primer lugar, por el Partido Comunista, nacido en 1922, y en segundo término, por el Partido Socialista, fundado once años más tarde. Si bien estas organizaciones poseían importantes diferencias estratégicas, ambas se caracterizaron por un pragmatismo que explicó el nacimiento de sendas alianzas políticas y electorales. Si a finales de los años treinta nacía un Frente Popular y en los años cincuenta un Frente de Acción Popular, a finales de los sesenta nacía la Unidad Popular (UP).

En las elecciones presidenciales de septiembre de 1970, liderando a la UP, se presentaba como candidato el socialista Salvador Allende, ex diputado, senador y médico de profesión.

Allende era un político de izquierda tradicional que concurría por cuarta vez a la presidencia de la República, y su triunfo —en estrecho margen frente al candidato conservador— supuso un fenómeno similar a la Revolución cubana, aunque en el caso de Allende lo inédito de su experiencia alcanzó a influir incluso a Europa occidental.

El Gobierno de Allende (1970-1973) desarrolló un profundo proceso de cambios sociales, económicos y políticos. Su programa —Vía chilena al socialismo— consistía en la construcción de un sistema socialista —transformador— utilizando los métodos democráticos que otorgaba el orden jurídico vigente. Allende no solo se convirtió en el primer mandatario socialista del mundo en ser elegido por la vía electoral, sino también en el primero en intentar transitar al socialismo pacíficamente.

En uno de sus grandes cambios, el Gobierno chileno intentó poner en marcha la llamada Área de Propiedad Social de la economía, controlada por el Estado y dominante en la economía. Esta incluiría la Gran Minería del cobre, además del salitre, yodo, hierro y carbón mineral; el sistema financiero, en especial la banca privada y seguros; el comercio exterior; las grandes empresas y monopolios de distribución, y, finalmente, los monopolios industriales estratégicos. Sin lugar a dudas, la aplicación de estas reformas aumentó el nivel de conflicto interno, tanto con sectores empresariales como con la oposición política. Por otra parte, y utilizando la legislación del anterior Gobierno, se profundizó la reforma agraria, logrando la expropiación de 4.400 predios agrícolas que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas, con lo cual se puso término definitivo al orden latifundista. En política exterior, la Unidad Popular trabajó en una línea más propiamente tercermundista, inclinada al no alineamiento pero con unos rasgos de pragmatismo notables, lejos de una pura ideologización.

Desde 1972 en adelante, se manifestaron enfrentamientos muy polarizados entre la coalición gobernante y la oposición

unida en la Confederación Democrática (CODE). Dicha alianza estuvo compuesta por el Partido Nacional, el Partido Demócrata Cristiano, la Democracia Radical y el Partido de Izquierda Radical. También los grupos de extrema derecha, como el Frente Nacionalista Patria y Libertad, y los de extrema izquierda, como Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), aumentaron el nivel del conflicto interno. Y todo ello sin olvidar la intervención de países extranjeros, como Estados Unidos —opuestos desde el primer minuto al proyecto de Allende—, para agudizar aún en mayor medida las tensiones entre los diferentes actores y favorecer una atmósfera imposible.

A la larga, este escenario de crisis político-ideológica socavó la estabilidad democrática y la cultura política de acuerdos que había caracterizado a la institucionalidad chilena, dando paso al golpe militar protagonizado por las fuerzas armadas el 11 de septiembre de 1973, interrumpiendo la institucionalidad y las libertades públicas existentes desde hacía más de cuatro décadas. Se iniciaba, como veremos, una nueva etapa de la historia de Chile.

LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

En el terreno económico comenzaron a concretarse los primeros pasos de una integración regional en respuesta a las complejas deficiencias de los programas de industrialización seguidos por algunos países y a la necesidad de superar los problemas derivados de unos mercados internos excesivamente limitados, la escasa innovación tecnológica y la dependencia de las exportaciones de materias primas. Fundamental resultaba el liderazgo de la CEPAL, que ya en los cincuenta, aleccionada por el avance de la construcción europea, trabajaba a favor de una integración como fórmula para estimular el crecimiento y desarrollo de los estados, su industrialización y la inserción mundial de América Latina (Moniz Bandeira, 2004).

El 18 de febrero de 1960, con la firma del Tratado de Montevideo, nacía la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) —Brasil, Uruguay, Argentina, México, Chile, Perú y Paraguay—, que contemplaba el establecimiento, en un plazo inicial de doce años, de una zona de libre comercio entre sus miembros a fin de poder ampliar sus restringidos mercados nacionales. Colombia y Ecuador se incorporaban en 1961, Venezuela en 1966 y Bolivia en 1967. A su vez, en Centroamérica, donde la iniciativa integracionista era más antigua, la firma el 13 de diciembre de 1960 del Tratado de Managua o Tratado General de Integración Económica Centroamericana, entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, conformaba una zona de libre comercio y una unión aduanera con el objetivo más ambicioso de alcanzar el Mercado Común Centroamericano (MCCA), en los cinco años sucesivos. En 1962 la inclusión de Costa Rica al Tratado de Managua permitió sustituir la Carta de El Salvador de 1951 por una nueva Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).

En los años siguientes, las propuestas integracionistas fueron probablemente el eje principal de las recetas económicas promovidas por los más relevantes líderes latinoamericanos, tanto por razones políticas como de orden económico. La integración vivía en una disyuntiva. Mientras el éxito acompañaba al MCCA, la ALALC obtenía avances muy limitados. O se aceleraba, o acabaría perdiendo su valor como factor de desarrollo. Desde el ámbito de las relaciones internacionales, estos acuerdos respondían a un diagnóstico geopolítico que buscaba situar positivamente a América Latina en un escenario complejo marcado por la Guerra Fría y la lucha de bloques.

En enero de 1965, el presidente de Chile Eduardo Frei Montalva (1964-1970), demócrata-cristiano y partidario de una *tercera vía* entre dictaduras militares y Revolución cubana, tomó la iniciativa de solicitar a cuatro destacadas personalidades (Raúl Prebisch, José Antonio Mayobre, Felipe Herrera, Carlos Sanz

de Santamaría) propuestas e ideas que rompiesen ese *impasse*. La respuesta de estos "sabios" fue la de profundizar con vigor la tendencia integracionista (Fermandois, 2004). Bajo ese espíritu, la Declaración de los presidentes de América, firmada el 14 de abril de 1967 en Punta del Este durante la cumbre de Jefes de Estado de la OEA, se comprometía a crear, a partir de 1970 y en un plazo de quince años, el Mercado Común Latinoamericano (MCL) a través del perfeccionamiento y la convergencia de la ALALC y el MCCA. La democracia figuraba como la garantía de la libertad y el bienestar de los pueblos, en una declaración con un cierto tono de desafío a los Estados Unidos.

A la larga, el único proyecto de importancia fue el Acuerdo de Cartagena, firmado el 26 de mayo de 1969; este acuerdo dio nacimiento al Pacto Andino, que integraba a Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. En virtud de una situación estratégica y de supuestas estructuras económicas comunes, los países andinos establecieron esta alianza comercial y de mutua cooperación, que no se formaba como contrapeso al ALALC, sino más bien como una contrapropuesta subregional. Quizá el Pacto Andino fue uno de los últimos intentos de promover iniciativas de esta índole, la cual, por cierto, tendría escasa duración: ya en 1976, el Gobierno chileno conducido por el General Augusto Pinochet dejaba de pertenecer al Pacto, debido a las prioridades que asumió la política económica y comercial de su régimen autoritario.

CAPÍTULO 3

DICTADURAS DE SEGURIDAD NACIONAL Y TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA. LA DÉCADA PERDIDA Y EL FINAL DE LA GUERRA FRÍA (1973-1990)

Desde finales de la década de los sesenta y comienzos de los setenta, América Latina vivía un clima de gran movilización social y una fuerte polarización política. En Sudamérica, las dinámicas populares habían revitalizado los proyectos de izquierda, impulsando simultáneamente a las organizaciones guerrilleras partidarias de la lucha armada. El temor de los sectores conservadores al desborde social y político derivó en una respuesta brutalmente represiva bajo la forma de dictaduras militares que, inspiradas en la doctrina de Seguridad Nacional, recurrieron a la guerra sucia contra el *enemigo interno* y a la sistemática violación de los derechos humanos con el propósito de instaurar un nuevo orden estatal. Para justificar los golpes de Estado y los Gobiernos autoritarios, se magnificó el papel de los grupos subversivos, que si bien existían, podían ser derrotados sin necesidad de acabar con los sistemas democráticos. De lo que se trataba realmente era de poner fin a los movimientos populares que cuestionaban a las clases dominantes y su papel dirigente y posibilitaban cambios desde la democracia (McSherry, 2009),

en línea con planteamientos socialistas (Frente Amplio de Uruguay con Líber Seregni, o la Vía chilena al socialismo). En su matriz económica, las nuevas autoridades formulaban un cambio radical según un modelo de mercado ultraliberal que despojaba de muchos derechos y beneficios a la población y cuya implementación solo era posible bajo un férreo autoritarismo.

ESTADOS TERRORISTAS EN EL CONO SUR

El Cono sur —desde Chile hasta Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil— quedaba en manos militares. Sin duda la intervención política del ejército —como ya se ha recordado— constituía una constante en el devenir histórico de las sociedades latinoamericanas desde el siglo XIX, pero a diferencia de otras ocasiones, ahora esa presencia incorporaba novedades que la convertían en un acontecimiento diferente.

La vuelta al poder de las fuerzas armadas significó un cambio cualitativo (Dabène, 2000). En primer lugar, sus objetivos eran ambiciosos y presentaban un carácter *fundacional*, distinto al elemento *moderador* de antaño. "No tengo plazos, sino objetivos", la frase del general Onganía al derrocar a Arturo Illia (1963-1966), suponía un tipo de golpe de Estado que hacía de los militares fundadores de un orden social (Roitman, 2013). Aleccionados por la doctrina de Seguridad Nacional y el concepto de guerra moderna, ambicionaban regenerar la nación, de la que se consideraban custodios, manteniendo su armonía, y neutralizar las causas que amenazaban la cohesión interna de la sociedad y eran responsables de la inestabilidad, la agitación y el subdesarrollo, a saber, las fuerzas sociales, políticas, orientaciones ideológicas y modelos económicos de los cuales se nutría la mezcla entre marxismo y nacionalismo presente en la región (Zanatta, 2012). Sin seguridad no habría desarrollo, pero este resultaba imposible en tanto no se restableciera el orden. Seguridad, desarrollo y orden quedaban

vinculados. Políticamente, las dictaduras no solo terminaron con los sistemas constitucionales y democráticos: también desencadenaron una vasta represión contra quienes consideraban responsables de la decadencia moral y el desorden (izquierda, sindicatos, intelectuales). La guerra interna abrió las puertas a la militarización de la sociedad (Roitman, 2013). En el terreno económico, se orientaron hacia la implantación de las formas capitalistas de producción —si bien en grado diverso según cada caso nacional—, muchas veces a partir de las formulaciones de Friedman y Hayek, que iban imponiéndose en Estados Unidos, Reino Unido o República Federal Alemana, transformándose en verdaderos laboratorios (Boisard y Heredia, 2010). Con tales objetivos, los militares no podían fijarse plazos.

Algunas reflexiones más: esas promesas que combinaban orden y mejora económica empujarían a sectores de las clases medias, cansados de agitación y retórica revolucionaria, a ver como natural el protagonismo de las fuerzas armadas. La violencia institucional desplegada por los Estados terroristas presentaba —además— perfiles nuevos. La persecución, detención y eliminación de opositores traspasó las fronteras y actuó como vínculo de cooperación entre unas dictaduras y sus ejércitos —antaño considerados mutuamente como adversarios—, que diseñaron un operativo de represión transnacional y extraterritorial —Plan Cóndor— sin precedentes en la historia de la región (McSherry, 2009). Formalizado en Santiago el 26 de noviembre de 1975 entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Brasil —con colaboración más esporádica de Ecuador, Perú, Colombia—, el acuerdo facilitaba el intercambio de información sobre ciudadanos de distintas nacionalidades así como el desplazamiento de agentes para operaciones encubiertas (secuestros, desapariciones, asesinatos). Si bien las cifras disponibles sobre la represión pueden diferir en ciertos casos nacionales, los datos disponibles son —en términos globales— terribles. Desde 1975 fueron asesinadas en torno a cincuenta mil personas, treinta mil desaparecieron y

unas cuatrocientas mil fueron torturadas o encarceladas. La coordinación del Plan Cóndor contaba con el apoyo de Washington, que proporcionaba financiación y asistencia técnica —e incluso pudo inspirarlo—, convencido de su eficacia en la cruzada anticomunista en el hemisferio. Sin duda, el nuevo papel político jugado por el ejército latinoamericano encontraba el aval de la Administración Nixon (1969-1974).

El 21 de agosto de 1971 caía en Bolivia el régimen izquierdista del general Juan José Torres, derrocado por el coronel Hugo Banzer (1971-1978), quien lanzó una ola de represión contra la izquierda, en especial contra los sectores estudiantiles. En junio de 1973, la democracia era borrada de Uruguay, un país que tenía una sólida experiencia de estabilidad institucional. Y poco después le tocaba el turno a Chile. El 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado del comandante en jefe del Ejército Augusto Pinochet (1973-1990) liquidaba la Unidad Popular y provocaba la muerte del presidente Salvador Allende. La irrupción de las fuerzas armadas desmontaba una legalidad constitucional que este país había desarrollado también por décadas.

Los primeros bandos de la Junta Militar chilena reflejaban la violencia implícita en el golpe y de la situación de represión generada a fin de destruir el sistema político y aterrorizar a la población. El Congreso fue disuelto, se prohibieron los partidos de izquierda, la Constitución quedó suspendida, los medios de comunicación sometidos a vigilancia y se instauró el estado de sitio. Pinochet, además, consolidaba su autoridad gracias a un sistema de concentración y centralización del poder en sus manos —y de todo el aparato represivo—. En el terreno económico, la Junta Militar se rodeó de un grupo de tecnócratas liberales, en su mayoría formados en la Universidad de Chicago —los *Chicago boys*—, partidarios de liquidar el aparato dirigista y proteccionista de las décadas anteriores, considerado un lastre para el desarrollo, y optar —en cambio— por un modelo centrado en la economía de mercado, el desmantelamiento del

Estado, las privatizaciones, el monetarismo y la apertura a la competencia internacional. Los buenos resultados económicos iniciales contribuyeron a consolidar los cimientos del régimen militar y a dotarle de una especial legitimidad. Los principios de mercado debían asimismo regir el funcionamiento del conjunto de la sociedad, lo que en función del ideario neoliberal suponía una democracia restrictiva y conservadora (Rubio Apiolaza, 2013). La Constitución de 1980 reflejaba todos esos planteamientos. Su aprobación en un plebiscito nacional —referéndum del 11 de septiembre de 1980— con un 67,04 por ciento de votos a favor y un 30,19 por ciento en contra (realizado sin garantías democráticas ni libertades civiles), representaba una victoria de los militares al tiempo que ponía de manifiesto la inexistencia de la oposición.

En Argentina —en medio del caos económico, la agitación social y la violencia política—, el 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas derrocaban a Isabel Martínez de Perón (1974-1976), instalando una Junta Militar. Presidida por el general Rafael Videla (1976-1981), quien asumiría el cargo de jefe de Estado el día 28, e integrada por el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, el inaugurado Proceso de Reorganización Nacional tenía como objetivos básicos, de un lado, la recuperación de los valores esenciales de la patria, a través del orden, la moral y la autenticidad, instaurando una *democracia real*, y de otro, la eliminación completa del enemigo subversivo. En el caso argentino, no obstante, el golpe militar aparece como parte de un proceso continuado de deterioro institucional del Estado de derecho, que se arrastraba desde el periodo constitucional tras el retorno a la presidencia de Juan Domingo Perón (1973-1974) con el recorte, primero, de libertades individuales o sindicales y, después, con una legislación autoritaria antisubversiva apoyada en la excepcionalidad jurídica (Ley de Seguridad Nacional y Estado de sitio de 1974), y no como su mera interrupción (Franco, 2012).

La represión clandestina practicada desde el Estado, fuera de toda norma y control legal, se abatió por doquier contra

cualquier ciudadano sospechoso, aunque curiosamente dentro de una apariencia de normalidad, como lo reflejó la celebración pacífica del campeonato mundial de fútbol de 1978 (Zanatta, 2012). Al igual que Chile, la Argentina de las Juntas Militares (1976-1983) también ambicionaba una reorganización de la sociedad. Pero más allá del orden restaurado y el triunfo de la guerra sucia en 1980, los militares no pudieron exhibir éxitos económicos —como era el caso brasileño y en parte chileno—, y fracasaron, igualmente, los intentos por consolidar el régimen. Las viejas disputas castrenses reaparecieron agrietando la estructura de poder y abriendo divisiones tanto sobre la política económica (nacionalistas vs. liberales) como respecto al futuro y vigencia del Proceso de Reorganización Nacional (tiempo y modo de liberalización del régimen).

Este nuevo autoritarismo se completaría, por un lado, con el caso de Perú, cuando en 1975 el general Morales Bermúdez (1975-1980), al llegar al poder, se dedicaría a desmontar el edificio reformador de Velasco Alvarado, y por otro lado el de Ecuador, donde la Junta Militar del 11 de enero de 1976 seguía similares parámetros a los presentes en la región. La convergencia de todas estas dictaduras no escondería, aun así, viejas disputas. La relación casi idílica chileno-argentina, cimentada en su connotación de Estados ideológicos antimarxistas, se truncaba en 1977 debido a la disputa limítrofe sobre el canal Beagle. A punto de provocar la guerra entre Buenos Aires y Santiago en la Navidad de 1978, el enfrentamiento logró pararse *in extremis*, gracias a las gestiones directas de la Santa Sede e indirectas de Brasil y Estados Unidos (Fermandois, 2004).

TERCERMUNDISMO Y NO ALINEAMIENTO

Los cambios de la escena internacional, auspiciados por el empuje del Tercer Mundo y la distensión soviético-norteamericana, habían favorecido el arraigo en la región de dinámicas

exteriores nacionalistas y tercermundistas. Si el Grupo de los 77 (G-77), organización de los países en desarrollo, permitía a los actores latinoamericanos participar desde 1964 en las negociaciones de la ONU para impulsar el desarrollo a través de un cambio más justo en la estructura del comercio mundial (UNCTAD), su presencia dentro del Movimiento de Países No Alineados (MPNA) conformaba un instrumento ideal de proyección política sobre la base de la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos, el desarme, el antiimperialismo, la cooperación al desarrollo o el multilateralismo (Smith, 2010).

La sensación de un mundo transformado continuó. La crisis constitucional abierta con la renuncia presidencial de Nixon —agosto de 1974— y la derrota militar en Vietnam —caída de Saigón en abril de 1975— cuestionaban el liderazgo de Estados Unidos y abrían interrogantes sobre su tradicional capacidad hegemónica sobre el espacio hemisférico. En el ámbito económico, el desorden monetario (1971) y la crisis del petróleo (1973) erosionaban el poder del mundo industrializado mientras crecía la fuerza de los países productores de petróleo (OPEP). En ese clima, el fracaso de las estrategias de desarrollo de los años sesenta acentuó las peticiones del G-77 a favor de un Nuevo Orden Económico Mundial (NOEI) y de reducir la brecha Norte-Sur, propuesta finalmente asumida por la Asamblea General de la ONU el 1 de mayo de 1974. Entre los más firmes valedores del NOEI figuraban la Venezuela de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) y el México de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), dispuestos a cambiar el modelo de distribución de la renta mundial a favor de los países menos desarrollados e incluso articular un bloque latinoamericano dentro de un orden económico global reformado. El 17 de octubre de 1975 Venezuela y México lideraban la formación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) mientras que por entonces Cuba asumía mayor protagonismo en el MPNA, y en Panamá, Omar Torrijos (1969-1981), un militar populista

y líder tercermundista, abanderaba una conciencia crítica latinoamericana articulada sobre un discurso antiimperialista y de respeto a la soberanía política y económica de estos pueblos.

¿Cómo afrontaba Estados Unidos este desafío diplomático regional? Instalado en la Casa Blanca, el demócrata Jimmy Carter (1977-1981) buscaba recuperar una credibilidad exterior perdida por sus antecesores, cuyas implicaciones en la violación de derechos humanos, el apoyo a dictadores o la caída de Allende salían a la luz en el Comité Church del Senado. En su agenda interamericana, Carter apostaba por la defensa de los derechos humanos, atender a las aspiraciones latinoamericanas en torno al NOEI, trabajar hacia un cooperativismo multilateral y mitigar la imagen imperialista acuñada, ámbito donde la cuestión del canal de Panamá surgía como una piedra de toque.

Desde hacía tiempo, la diplomacia de Washington encontraba cada vez mayores dificultades para resistir la presión panameña así como las muestras de solidaridad regional (Costa Rica, Colombia, Venezuela) reclamando un nuevo acuerdo que entregara la soberanía del canal al Estado de Panamá. La Declaración Tack-Kissinger —7 de febrero de 1974— ya había manifestado un cambio en la posición norteamericana, pero Carter daría el impulso definitivo. El 7 de septiembre de 1977, Carter y Torrijos firmaban dos tratados históricos: el Tratado del canal de Panamá, que contemplaba una gradual transferencia a la soberanía panameña y el retiro de las tropas norteamericanas para el 31 de diciembre de 1999, y el Tratado relativo a la Permanente Neutralidad y Funcionamiento del canal de Panamá. Al hilo de estas conversaciones, Washington procedió al cierre de la Escuela de las Américas y a su trasladado definitivo a Fort Benning en 1984 desde Panamá, donde había sido creada en 1946 como centro de enseñanza del ejército norteamericano para formar militarmente a sus camaradas latinoamericanos, en especial dentro de las estrategias de lucha contrainsurgente y antisubversiva.

El éxito de la diplomacia canalera sería, con todo, parcial. Los nuevos tratados —que abrogaban los términos originales de 1903— eran impopulares entre los republicanos norteamericanos. Si bien el Senado ratificaría ambos textos —marzo y abril de 1978—, se añadiría un protocolo facultando a los Estados Unidos a garantizar la funcionalidad y neutralidad de la vía acuática de manera permanente y, por ende, su derecho a emplear la fuerza para reabrir el canal —incluso desde el 1 de enero de 2000—, si hubiera sido cerrado o su funcionamiento obstaculizado (Holden y Zolov, 2000). No sería la única excepción; a la larga esta dimensión moral de la acción exterior de Carter mostraría sus contradicciones, como en el caso de Nicaragua y las ayudas entregadas a Somoza.

LA DÉCADA PERDIDA. RECESIÓN ECONÓMICA, CRISIS DE LA DEUDA Y TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA

La década de los ochenta combinaría con igual intensidad, ilusión y esperanza con pesadilla y frustración en el sueño latinoamericano. A lo largo de estos años, buena parte de los países del Cono sur fueron abandonando el anterior ciclo de autoritarismo y dictadura para recuperar la democracia a través de procesos de transición, diversos y difíciles, que exigieron complejas negociaciones y acuerdos entre las fuerzas armadas y los partidos políticos (Zanatta, 2012). Ciertamente, no toda la región experimentaría esos mismos avances políticos. América Central entró en una espiral de inusitada violencia cuando sus conflictos internos o guerras civiles (Nicaragua, El Salvador, Guatemala) se internacionalizaron, quedando atrapados en la lógica de la segunda Guerra Fría y el neohegemonismo norteamericano de la Administración republicana del presidente Ronald Reagan (1981-1989).

Esa democratización, además, debió convivir junto a una durísima recesión económica cuyo reflejo más dramático sería

la crisis de la deuda. Planteada por México en agosto de 1982 al anunciar la imposibilidad de pagar a sus acreedores y seguida pocos meses después por Brasil, la crisis de la deuda marcaría el inicio de una debacle económica que tendría como resultado, ya en los noventa, la liquidación del modelo de industrialización vigente desde los años cuarenta. Un oscuro panorama socioeconómico se proyectó sobre la región. Los índices de pobreza, desigualdad, desempleo y exclusión empeoraron notablemente, y el desarrollo quedó estancado. La década perdida se instalaba en América Latina.

Sin duda la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas, altamente endeudas desde antaño, afloró con toda su crudeza al modificarse las condiciones del mercado internacional, lo que evidenció los límites estructurales de su anquilosado modelo productivo y de desarrollo. Indudablemente, esta dinámica recesiva se explicaba por factores diversos, externos e internos (Zanatta, 2012). El estancamiento económico mundial, la caída de los precios de las materias primas y el hundimiento de las exportaciones drenaban el flujo de inversiones y créditos hacia la región, mientras la subida de los tipos de interés convertía la deuda externa, contraída masivamente en los años setenta a tasas reducidas, en una soga asfixiante. Hacia 1984, el gasto del pago del servicio de la deuda suponía cerca del 50 por ciento de los ingresos anuales procedentes de las exportaciones regionales (Smith, 2007). A estos condicionantes exógenos se añadieron otros internos, estructurales: el agotamiento del sistema ISI, una infraestructura industrial ineficaz y envejecida, la insuficiencia del ahorro interno, el desequilibrio en las cuentas públicas y déficits fiscales, los precios distorsionados por el proteccionismo y la falta de resultados de los procesos de integración con un ALALC incapaz de concretar su área de libre comercio. Tampoco el *tercermundismo* prosperó, derrumbándose los sueños del NOEI.

En su intento por superar este complicado panorama y sanear las cuentas públicas pensando en lograr una

rápida recuperación, los Gobiernos aplicaron duros programas de ajuste estructural negociados con las organizaciones financieras internacionales, sin éxito a corto plazo y con altos costos sociales. Esas recetas incluían desde recortes en la inversión pública hasta devaluaciones, pasando por exigentes políticas monetaristas. La solución al problema de la deuda monopolizaba la agenda latinoamericana, proyectándose internacionalmente. El peligro de que la amenaza expresada por algunos líderes de negarse al pago de las deudas (caso de Fidel Castro en Cuba o Alan García en Perú) se extendiera por otros países y acabara provocando la desestabilización del sistema bancario mundial persuadió a los Estados Unidos para plantear dos iniciativas —Plan Baker (1985) y Plan Brady (1989)— entendidas como esquemas financieros facilitadores de una solución. Mientras el primero imponía duras condiciones, el segundo en cambio consideraba la eliminación de los atrasos y suponía, de hecho, el tácito reconocimiento de que la deuda nunca sería abonada completamente (Smith, 2007).

En el marco de la tercera ola de democratización, iniciada con la caída de los autoritarismos en la Europa del Sur (Portugal, Grecia, España) y continuada con la crisis de los regímenes comunistas del Este europeo, aparecieron de manera gradual los procesos de transición a la democracia en los países del Cono Sur (Ecuador en 1978, Perú en 1980, Bolivia en 1982, Argentina en 1983, Brasil y Uruguay en 1985, Paraguay en 1989 y Chile en 1990). Aun con diferencias entre sí, abrían un nuevo ciclo político que supondría convertir a la democracia electoral en la norma —no en la excepción— para el Cono sur (Soto, 2013). La derrota militar argentina en la guerra de las Malvinas (1982), al provocar la caída de la Junta Militar, había tenido un efecto determinante en esa onda expansiva de cambio.

Es preciso detenerse en este caso, puesto que el cambio argentino se planteó como un primer modelo de transición, denominado *por colapso* o *por derrota*, debido a que las fuerzas

armadas salieron del poder sumamente deslegitimadas desde el punto de vista social, acosadas por su total responsabilidad en la masiva violación de los derechos humanos y el derrumbe económico e institucional de la nación. Sus principales jerarcas fueron juzgados y condenados por los tribunales de justicia en 1985, y a partir de entonces se abrieron más causas. Y aunque leyes posteriores intentaron limitar el alcance de las condenas por violación de derechos según jerarquía y estamento castrense —Ley de Obediencia Debida y Ley de Punto Final— para evitar así la escalada de la tensión cívico-militar, la crisis estalló en 1987 y 1988 con dos asonadas del ejército que complicaron de manera grave la estabilidad política y el cambio democrático. La transición argentina constituyó en todo caso un gran cambio incluso de cultura política, en el sentido de que al menos desde 1930 no existía una democracia plena, cuando no una clara situación de autoritarismo como tal. Por ello es importante destacar el papel del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) y de la Unión Cívica Radical, la única formación que se había opuesto sin condiciones al régimen autoritario, al contrario del peronismo que vaciló ante el Proceso de Reorganización Nacional.

El caso de Chile es similar al modelo de transición seguido por Brasil o Uruguay. Al hilo de las protestas nacionales que comenzaron en 1983, el país vivió el comienzo del fin del régimen militar de Augusto Pinochet. Tras una fase de articulación de la oposición política y social producto de la crisis económica, la dictadura estuvo en una situación de debilidad muy compleja, debilidad que dio paso a la fortaleza. Desde 1986, fracasados los intentos de derrocamiento similares a los de Argentina, sumado al crecimiento económico, la oposición planteó la opción de transitar a la democracia bajo las reglas propuestas por Pinochet en la Constitución de 1980. En este contexto se realizó el plebiscito de 1988, fundándose para tal efecto la Concertación de Partidos por el No. Alcanzado el triunfo de la oposición, se inició un periodo de negociaciones que establecía un régimen

democrático sobre el que, sin embargo, influyeron de forma determinante las fuerzas armadas y particularmente Pinochet (Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998) a partir de 1990.

El complejo desmontaje de todas esas dictaduras (normalización de las relaciones civiles-militares, fin de los enclaves autoritarios, juicio y castigo a los responsables de la represión), interactuaba —en definitiva— con la debacle económica y la conflictividad social, amenazando la estabilidad de las nacientes democracias, y planteaba serios interrogantes sobre la capacidad de las nuevas autoridades para aplicar las reformas políticas y productivas, recordatorio oportuno toda vez que conviene subrayar cómo la incertidumbre sobre el futuro de esos procesos formó parte de la agenda de las transiciones e incluso de los análisis de los teóricos que pensaron la cuestión contemporáneamente a los hechos (Feld y Franco, 2015).

LA SEGUNDA GUERRA FRÍA. LA GUERRA DE LAS MALVINAS

América Latina ocupó —como otra nota relevante de los años ochenta— gran parte de la agenda diplomática mundial, en un tiempo de reafirmación de la lógica bipolar. Primero, a raíz de la guerra de las Malvinas, y después, sobre todo, con la crisis centroamericana.

Las islas Malvinas —Falkland islands— eran un viejo contencioso entre Argentina y Reino Unido en el Atlántico sur. En 1833, Gran Bretaña había ocupado el archipiélago, expulsando a las autoridades argentinas y a la población hispanohablante, que se vio reemplazada por otra de ascendencia británica. Aunque con el uso del canal de Panamá las Malvinas habían perdido parte del valor estratégico original, el mundo bipolar había actualizado su potencial como llave de las comunicaciones entre el Atlántico y el Pacífico. El 16 de diciembre de 1965

la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconocía la existencia de una controversia argentino-británica e invitaba a las partes a buscar una solución pacífica, sin que las conversaciones entabladas mostraran progresos palpables (Sanchís Muñoz, 2010).

En diciembre de 1981, la Junta Militar al frente del general Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de Argentina (1981-1982), planeó la recuperación por la fuerza del archipiélago como un ejercicio de propia supervivencia política ante el desprestigio del Proceso de Reorganización Nacional. Minado por las divisiones dentro de la cúpula castrense, el deterioro económico del país, las movilizaciones sociales y las denuncias internacionales por la violación de derechos humanos, un éxito en Malvinas proporcionaría la necesaria cohesión nacional, garantizando la continuidad del régimen. En su huida hacia adelante, los militares argentinos confiaban erróneamente en que el Reino Unido no iría a la guerra, limitándose a protestar en los organismos internacionales e imaginaban una actitud complaciente, si no favorable, de Estados Unidos. Con el presidente Ronald Reagan las relaciones bilaterales habían mejorado notablemente: Argentina ocupaba un lugar privilegiado en su nuevo diseño de seguridad para el Atlántico sur, al tiempo que cooperaba en la estrategia norteamericana sobre Centroamérica con el envío de asesores en la guerra sucia (Yofre, 2011; Moniz Bandeira, 2004). El 2 de abril de 1982, las fuerzas argentinas desembarcaban en las Malvinas, neutralizaban la defensa británica y tomaban la capital, Port Stanley. El entusiasmo popular se desbordó en todo el país. Poco después se ocupaban las Georgias del sur y las Sandwich del sur.

Las reacciones no se hicieron esperar. En Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad aprobaba la Resolución 502 —3 de abril—, exigiendo el fin de las hostilidades así como la inmediata retirada de las tropas argentinas, exhortando a las partes para encontrar una vía diplomática al diferendo. En el

Reino Unido, la primera ministra Margaret Thatcher (1979-1990) movilizaba a la flota rumbo al Atlántico sur y establecía un bloqueo naval de doscientas millas en torno a las Malvinas. Su contundente respuesta, con apoyo de la Comunidad Europea y de la Commonwealth, no era ajena al deseo de aprovechar la crisis exterior para superar sus graves problemas internos.

Compleja era la posición de Estados Unidos, obligado tanto a salvaguardar sus privilegiadas relaciones con Londres como evitar erosionar el sistema interamericano o dañar su influencia en el continente. La labor de buenos oficios entre las partes emprendida por el secretario de Estado norteamericano Alexander Haig fracasaba a finales de abril, optando entonces Washington por el respaldo político, militar y estratégico al Reino Unido. Otras iniciativas en favor de la paz (ONU, Vaticano, Perú) —mayo y junio de 1982— también fueron inútiles. La guerra era inevitable (Sanchís Muñoz, 2010). Dada la inminencia del ataque británico, Argentina intentó recurrir en la OEA a los mecanismos de seguridad previstos por el TIAR, base jurídica de la alianza hemisférica contra agresiones extraterritoriales. Pero no tuvo éxito. En el teatro de operaciones, la desigualdad entre las fuerzas combatientes resultó determinante. El 14 de junio, Argentina capitulaba. La guerra había ocasionado cerca de novecientos muertos en total por ambas partes. En el orden interno, poco después de la derrota, el ejército argentino destituía a la Junta Militar y designaba presidente al general Reynaldo Bignone (1982-1983) para preparar el camino a la democracia.

LA REVOLUCIÓN SANDINISTA Y SU SIGNIFICADO

Centroamérica —Nicaragua, El Salvador, Guatemala— era el escenario de una profunda crisis que adquirió la forma de dramáticas guerras civiles. Aunque la violencia era antigua, se desbordó a finales de los años setenta. En un panorama de pobreza,

lacerantes desigualdades y de un Estado históricamente débil, las oligarquías, aliadas históricas de Washington, habían impuesto un bloqueo social que impedía el ascenso de las clases medias, explotaban a campesinos e indígenas y controlaban un proyecto político autoritario edificado sobre el fraude electoral, la represión y la violación de derechos (Bataillon, 2008). Como expresión del descontento nacieron una multitud de organizaciones opositoras. Unas, vinculadas a la izquierda y a la teología de la liberación, formaban frentes de liberación nacional partidarias de la lucha armada: Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua (FSLN); Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador (FMLN); Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Otros actores, en cambio, aspiraban a una reforma democrática desde el sistema, auspiciando los cambios en su interior.

Nicaragua era un paradigma de injusticia y pobreza. En 1981 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definía su estructura social —para antes de la revolución— como modo de producción feudal-colonial. El crecimiento económico desde los años cincuenta, con la inicial superación del monocultivo agrícola y el progresivo desarrollo de su industria, no significó una mejora en la redistribución de la riqueza ni tampoco de la equidad. Mientras la propiedad de la tierra se concentraba en pocas manos, la mayor parte de la población vivía bajo unas duras condiciones (Ferrero Blanco, 2010). Durante los años 1971-1975, en torno al 57 por ciento de los niños menores de 5 años padecía algún grado de desnutrición, cuando en 1976 el gasto militar excedía por tres veces al de salud. Políticamente el país estaba gobernado por una dictadura dinástica, la de los Somoza, protegida por los Estados Unidos. En 1974 una parodia electoral había llevado a la presidencia a un cuestionado Anastasio Somoza Debayle, jefe de la temida y represiva Guardia Nacional, su sostén militar.

Las resistencias contra la dictadura se fueron articulando desde diversos ámbitos. En 1961 la aparición del Frente

Sandinista de Liberación Nacional con su defensa de la lucha armada había conformado la primera oposición rotunda al somocismo. Inspirados en la figura de Augusto César Sandino (1895-1934), sus proyectos ideológicos o modelo de sociedad no eran fáciles de definir. Entre sus miembros se adivinaban marxistas-leninistas, nacionalistas, antiimperialistas o cristianos de base, aunque en todo caso, la principal influencia procedía de la Revolución cubana y la admiración por Fidel Castro, en quien identificaban al padre de toda revolución latinoamericana en pos de una sociedad socialista (Ferrero Blanco, 2010). Diez años después de su aparición como grupo insurgente guevarista, el somocismo seguía en pie y la lucha sandinista venía lastrada por la falta de una estrategia coherente y por las divisiones internas (Guerra Popular Prolongada, Proletaria y Tercerista o Insurreccional). El FSLN buscó penetrar en la sociedad civil, adhiriendo a sectores populares e impulsando organizaciones civiles contrarias al régimen (Del Alcázar, 2012).

Por su parte, la burguesía nicaragüense, las formaciones liberales y el mundo empresarial, antes tan próximos al régimen, fueron marcando sus distancias hasta una ruptura completa, secuenciada en tres momentos. Primero, a raíz de la gestión de la reconstrucción de la Managua devastada por el terremoto de 1972; después con el fraude electoral de 1974 y, finalmente, tras el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978, símbolo de la resistencia pacífica y cuya muerte conduciría a la creación del Frente Amplio de Oposición (FAO) (Dabène, 2000). En el plano diplomático, la OEA fracasaba en una labor de mediación y el presidente Carter intentaba un recambio de Anastasio Somoza rechazado por este.

El quiebre histórico llegó en 1979. El 7 de marzo las tres tendencias del FSLN alcanzaban un acuerdo de unidad, establecían una única dirección nacional y aceptaban la alianza con la burguesía. Poco después lanzaban la insurrección final (sublevación de las masas, ofensiva militar, huelga nacional).

La revolución gozaba ya de amplios apoyos en América Latina (Costa Rica, México, Venezuela, Panamá, Cuba) y de la comprensión de países de Europa occidental y organizaciones internacionales (Internacional Socialista). A la unidad sandinista se añadió la convergencia de todo el antisomocismo (empresarios, intelectuales, revolucionarios) con el único objetivo de acabar con el régimen. A mediados de julio de 1979 quedaba constituida la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) que, integrada por el FSLN —como fuerza mayoritaria—, y los sectores de la burguesía, presentaba un programa con objetivos generales de naturaleza democrática (elecciones libres, pluripartidismo, economía mixta, política exterior no alineada) y objetivos concretos, donde destacaban la reforma agraria, una nacionalización del sistema bancario y la eliminación de la Guardia Nacional, entre otros. Bajo la presión de la OEA y de Estados Unidos, Somoza renunciaba a la presidencia, huyendo del país, mientras la Guardia Nacional se desplomaba. La revolución triunfaba. El 19 de julio de 1979 las columnas del FSLN entraban en Managua, en medio del entusiasmo popular.

La Revolución de Nicaragua —*la más bonita del mundo*, para Julio Cortázar— ofrecía un carácter pluralista, occidental (Del Alcázar, 2012). Las nuevas instituciones dibujaban una democracia formal: la JGRN quedaba como poder ejecutivo provisional y un Consejo de Estado, pluralista, asumía las funciones legislativas y el encargo de promulgar una ley electoral que elegiría a la futura Asamblea Nacional. Pero el entendimiento entre fuerzas tan heterogéneas no duraría, abandonando pronto la JGRN los elementos conservadores del antisomocismo. En realidad, el FSLN ocupaba hegemónicamente el poder para acelerar la transformación socialista: la Asamblea Sandinista de septiembre de 1979 y los decretos de abril y mayo de 1980 reflejaban ese cambio de coyuntura (Ferrero Blanco, 2010). Nicaragua —también— se abría a la influencia cubana y soviética, y prestaba su apoyo a la insurgencia salvadoreña, vista como

socio estratégico para el sandinismo. En 1984 el FSLN triunfaba en las elecciones, llevando a Daniel Ortega a la presidencia (1985-1990). Los objetivos básicos de su programa permanecieron (economía mixta, abanico político, no alineamiento) con avances en salud, educación y reforma agraria, pero en un contexto imposible. La guerra frente a la Contra arruinaría a la larga la economía nicaragüense y el proyecto político sandinista.

CRISIS CENTROAMERICANA E INTERVENCIONISMO DE ESTADOS UNIDOS

En El Salvador y Guatemala se observaban características parecidas a las de los nicaragüenses. En El Salvador, tras fracasar varias opciones reformistas, en un clima de creciente violencia (asesinato del arzobispo monseñor Romero), el 10 de enero de 1981 el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional lanzaba su ofensiva final dando paso a una guerra civil donde destacaría —como uno de sus episodios más sangrientos— la matanza de civiles en El Mozote por fuerzas especiales salvadoreñas. En Guatemala, la respuesta de los militares estuvo vinculada a las estrategias contrainsurgentes de la doctrina de Seguridad Nacional, que en el caso de los campesinos y la población maya adquirió niveles de genocidio. Los grupos guerrilleros guatemaltecos quedaban encuadrados en la URNG a principios de 1982.

Dadas las características del subsistema centroamericano (dependencia de los intereses estadounidenses, insuficiente integración regional, subordinación a las tendencias de la lucha Este-Oeste), la crisis en Nicaragua, El Salvador y Guatemala escapó al control de sus protagonistas para internacionalizarse de la mano del intervencionismo practicado por Washington, sin olvidar la implicación indirecta cubana así como la presencia de otros actores externos (Rouquié, 1994; Del Arenal, 2011). Esa internacionalización alentaba una espiral bélica pero también

impulsaría, a la larga, múltiples iniciativas de paz. Tres estrategias pueden identificarse al respecto: la de Estados Unidos, el Grupo de Contadora y el Proceso de Esquipulas.

Estados Unidos no afrontaba un desafío mayor a su hegemonía en Centroamérica desde la etapa de Jacobo Arbenz (1951-1954). Con la llegada de Ronald Reagan en la Casa Blanca (1981-1989) —momento que coincidió con la ofensiva lanzada por la guerrilla salvadoreña—, la nueva Administración republicana decidió involucrarse por completo en la crisis, convencida de que se estaba asistiendo a una avalancha de subversión comunista sobre el istmo, como parte a su vez de una ofensiva geoestratégica global soviético-cubana (Holden y Zolov, 2000). El triunfo del FSLN amenazaba con reproducirse en El Salvador y Guatemala, afectando a una seguridad nacional ya comprometida por los acuerdos del canal de Panamá. Las implicaciones del accionar norteamericano eran profundas. Si Carter había optado por regionalizar esos conflictos locales, Reagan los globalizaba situándolos en el tablero mayor de la Guerra Fría como peones secundarios de la lucha de poder mundial, donde se jugaba la credibilidad norteamericana y su capacidad de oponerse a los adversarios. Los regímenes de la zona fueron definidos en dos categorías: autoritarios y totalitarios. Mientras los primeros —dictaduras amigas— eran *recuperables* aleccionando con firmeza su trayectoria a la democracia, los segundos —sistemas comunistas como Cuba o Nicaragua— resultaban *irrecuperables* (Zanatta, 2012). La llamada *doctrina Reagan* se reafirmaba en la lucha contra el *Imperio del mal* (URSS y comunismo internacional) así como en el apoyo a *las fuerzas libres* en defensa y fortalecimiento de la democracia.

Desde esos postulados, Washington fijó como prioridad el acoso directo al sandinismo a través de la Contra financiada por la CIA, que operaba desde Honduras, convertida a su vez en una gran base militar estadounidense. Se trataba de expulsar al FSLN del poder, obligándole a convocar elecciones libres o

precipitar su caída. La invasión por los marines de la isla caribeña de Granada el 25 de octubre de 1983 resultaba, leído en estas claves, todo un aviso de lo que podía esperar al sandinismo. Tampoco la celebración de las elecciones de 1984 convenció a la Casa Blanca, que acentuó su cruzada intervencionista desplegando todo un abanico de operaciones encubiertas bajo el modelo de *guerras de baja intensidad* (sabotajes a infraestructuras, minado de puertos, guerra psicológica, embargo económico-financiero, quema de cosechas). El 27 de junio de 1986 la Corte Internacional Penal, en una sentencia histórica, condenaba la actuación norteamericana, exigiendo —sin éxito— el fin de su intervencionismo y el pago de indemnización. Respecto a El Salvador, había que impedir una victoria del FMLN, buscando la democratización del país y concediendo una masiva ayuda militar a sus Gobiernos. Una combinación ensayada también en Guatemala.

Centroamérica era un polvorín, con tres conflictos abiertos (guerras civiles de Guatemala y el Salvador y agresión de la Contra en Nicaragua), una nutrida presencia de fuerzas ajenas a la región (soldados norteamericanos en Honduras y en El Salvador y asesores cubanos en Nicaragua) y una doble tensión fronteriza, hondureña-nicaragüense y nicaragüense-costarricense. El intervencionismo de Estados Unidos encontraba resistencias dentro y fuera del país. En el interior, en la Cámara de Representantes y en sectores de la opinión pública que rechazaban el acoso al Gobierno de Managua e intentaban moderar el maximalismo presidencial con normas legales a la financiación del antisandinismo (Enmiendas Boland I y II) (Smith, 2007; Smith, 2010). En el exterior, el temor de ciertos actores a que la crisis escalara hasta una guerra generalizada dio paso a una iniciativa de paz latinoamericana. En una afirmación de autonomía frente a Washington, México, Venezuela, Colombia y Panamá creaban el 9 de enero de 1983 el Grupo de Contadora, un instrumento de mediación para garantizar la paz a través de una solución dialogada entre todos los países involucrados,

sobre la base del respeto a los principios del derecho internacional y los compromisos en materia de seguridad y cooperación regional. La ONU y la Comunidad Europea lo respaldaban. Argentina, Brasil, Uruguay y Perú crearían en 1985 el Grupo de Apoyo. Un año después, el proceso de Contadora entraba en vía muerta: al permanente obstáculo de la Casa Blanca se sumaban las discrepancias entre los propios componentes de la iniciativa —México, Panamá, Venezuela, Colombia— y las desavenencias y desconfianzas de las partes implicadas.

El cambio comenzó a fraguarse en 1987. El recién elegido presidente de Costa Rica, Oscar Arias (1986-1990) presentaba el 15 de enero de 1987 un proyecto de paz —Plan Arias— capaz de salir adelante gracias al novedoso contexto que le rodeaba. La agenda de Reagan se moderaba en su segundo mandato, paralizada tras el escándalo Irán-Contra —mecanismo de financiación ilegal de la guerra antisandinista— y bajo la incipiente distensión soviético-norteamericana en el final de la Guerra Fría. Paralelamente iba prendiendo un giro democrático en la zona, fruto también de la doctrina Reagan y palpable en la elección presidencial en Guatemala de Vinicio Cerezo (1986-1991). Unido a ello estaba el fracaso de la lucha guerrillera del FMLN y la URNG. En Nicaragua, asfixiada económicamente, la revolución perdía vitalidad, y también apoyos, ya fueran externos —caso de la URSS de Gorbachov—, o internos, con voces cada vez más críticas hacia la gestión sandinista, los ajustes estructurales y la corrupción (*la piñata sandinista*). Y mientras, en el resto de países, aumentaba la presión para una paz efectiva. A diferencia de Contadora, sostenida en las normas del derecho internacional para evitar un conflicto general, el Plan Arias ponía el acento en la ausencia democrática interna a la hora de construir la paz señalando a Nicaragua.

El 6 y 7 de agosto de 1987 los presidentes Cerezo, de Guatemala, Azcona, de Honduras, Duarte, de El Salvador, Ortega, de Nicaragua, y Arias, de Costa Rica, firmaban los Acuerdos de

Esquipulas II. La solución global de pacificación se articulaba sobre los principios del alto el fuego y el fin de las ayudas a las fuerzas irregulares, el diálogo con la oposición, la construcción política democrática de los países, las negociaciones en materia de seguridad, la cooperación regional y el desarrollo y un calendario de compromisos. Para verificar su cumplimiento, contemplaba la presencia de los secretarios generales de la ONU, de la OEA y de otros actores. Para Nicaragua, la solución alcanzada significaba desmantelar la Contra a cambio de convocar elecciones libres. Ese año Oscar Arias recibía el Premio Nobel de la Paz.

Favorecido por la atmósfera de post Guerra Fría, Esquipulas II dio paso a una serie de encuentros y negociaciones regionales orientados a la paz y a hacer viables transiciones democráticas. El 23 de marzo de 1988, los Acuerdos de Sapoá entre el Gobierno sandinista y la Contra —reconocida así como oposición legítima— establecían un cese del fuego definitivo, abriendo el camino dos años después —25 de febrero de 1990—, a unos comicios que otorgaron el triunfo al grupo liberal-conservador de la Unión Nacional de Oposición (UNO). Cabe pensar que, aún de forma indirecta, el objetivo de Reagan quedaba cumplido: expulsar a los sandinistas del poder. En El Salvador y Guatemala, los diálogos de paz supervisados por la ONU —todavía complejos, largos y difíciles— serían irreversibles. En Oslo comenzaban por entonces las conversaciones entre las autoridades guatemaltecas y la URNG y, desde 1989, en Ciudad de México y en Costa Rica lo hacían el Gobierno salvadoreño y el FMLN.

En su balance, la larga crisis centroamericana presentaba caras contrapuestas. De un lado, el drama humano con su registro de muertes, heridos, refugiados, desplazados y víctimas de violación de los derechos humanos. De otro, la democracia electoral iniciaba un difícil camino en esos países, una experiencia en gran parte inédita. Por último, los esfuerzos de pacificación liderados desde la región fortalecían una concertación

latinoamericana, y el impulso al proceso integrador. El 18 de diciembre de 1986, los países del Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo creaban el Grupo de Río, principal mecanismo de consulta política, a nivel de Jefes de Estado, donde abordar asuntos de economía, seguridad, cooperación, deuda externa o desarrollo.

Antes de finalizar la década, Centroamérica viviría otra demostración del intervencionismo de Estados Unidos: la invasión de Panamá. La Operación Justa Causa (20 de diciembre de 1989) se iba a convertir en la primera operación militar de la post Guerra Fría sobre un país latinoamericano no justificada, al menos explícitamente, en términos de conflicto ideológico global.

En una fase de superación de la amenaza revolucionaria, la nueva agenda de seguridad de Washington se iba definiendo por la lucha contra el narcotráfico, las mafias organizadas y la inmigración clandestina; también por fortalecer la dinámica democratizadora (Smith, 2010). En Panamá, el poder se concentraba en manos del jefe de las fuerzas armadas y auténtico hombre fuerte del país, Manuel Antonio Noriega, un ex agente de la CIA, clave en la lucha antisandinista, acusado de blanqueo de dinero y tráfico de drogas. Paralelamente crecía su autoritarismo, proyectándose una sombra de desestabilización sobre la política interna y amenazando la seguridad del espacio del canal. De la noche a la mañana, el antiguo socio de Washington en Panamá se transformaba en un quebradero de cabeza. Las presiones (económico-comerciales, políticas, militares) ejercidas desde la Casa Blanca por George H. W. Bush (1989-1993) para apartarle del poder fracasaban, creciendo la tensión bilateral. El 15 de diciembre, la Asamblea Nacional nombraba jefe de Estado con poderes especiales a Noriega, quien declararía que el país se encontraba en estado de guerra frente a Estados Unidos.

El 20 de diciembre de 1989, Bush ordenaba la invasión del país justificándose en la necesidad de defender la democracia, salvaguardar la vida de ciudadanos estadounidenses, combatir

el tráfico de drogas y proteger la integridad de los tratados canaleros. La Casa Blanca insistiría en que el uso de la fuerza era justo y legal. Ese día Guillermo Endara (1989-1994) juraba como nuevo presidente de Panamá en una base norteamericana del canal. Toda una imagen de imperialismo decimonónico. La resistencia interna quedó neutralizada; el grado de destrucción y de brutalidad de la intervención fue enorme, arrasándose barrios enteros, especialmente los más populares, y provocando cientos de muertos entre la población civil, en medio de violaciones a los derechos humanos. Noriega fue arrestado el 3 de enero de 1990 y trasladado a Miami, donde un tribunal le condenaba a cuarenta años de prisión. De Chile a México, se reaccionó críticamente a los planes de Bush, pero sin que la resolución de la OEA —22 de diciembre de 1989— o las votaciones en la ONU alteraran sus planes. En Estados Unidos la opinión pública apoyaba esa *guerra a la droga* y las encuestas reflejaban que el 80 por ciento de los ciudadanos deseaban detener o retrasar la devolución del canal al pueblo panameño prevista para finales de 1999 (Holden y Zolov, 2000; Smith, 2010).

CAPÍTULO 4

ENTRE DEMOCRACIA Y NEOLIBERALISMO: LA GLOBALIZACIÓN (1990-2002)

La región latinoamericana experimentaba, a principios de la década de los noventa, importantes y variadas transformaciones fruto de la combinación de la evolución de sus propias dinámicas como del cambio operado en el sistema internacional. Una relación intrínseca tendía a vincular comportamientos nacionales y/o regionales con los esquemas mundiales. Con el final de las dictaduras de seguridad nacional y las guerras civiles, se asiste al inicio de un tiempo histórico que acaba alterando de manera significativa su ámbito político-institucional y la cultura política, colocando al continente americano ante una realidad desconocida, si atendemos en especial a los procesos de cambio político de los siglos XIX y XX (Rouquié, 2011). Indudablemente el final de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial tienden también a interactuar, dejando su inequívoca huella. Con la desaparición de la URSS y el bloque socialista y una Cuba inmersa en el repliegue del Periodo especial, América Latina dejaba de ser escenario del conflicto Este-Oeste para insertarse en los engranajes de una creciente y progresiva globalización.

A lo largo de los años noventa, continuando la senda abierta en la década anterior, el continente atraviesa un inédito ciclo de cambio político caracterizado por el predominio de los sistemas democráticos sobre la hegemonía de las fuerzas armadas así como por la evolución de los conflictos civiles armados centroamericanos hacia procesos de pacificación sumamente significativos. Este escenario dejaría a la región, como nunca antes en su historia, con un evidente predominio de mecanismos democráticos respecto a los de naturaleza autoritaria, en lo que se define como el periodo más extenso vivido bajo reglas democráticas, desde su independencia en el siglo XIX.

Bajo estos presupuestos, el retorno de gobiernos democráticos y de las libertades públicas, junto a un orden que garantizaba el pluralismo político e ideológico y la resolución pacífica de los conflictos, obligó al conjunto de actores sociopolíticos a definir nuevas estrategias y comportamientos en un marco institucional en parte desconocido. Países como Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Paraguay, entre otros, que habían experimentado durante el siglo XX largos períodos de violencia política, Gobiernos militares, guerras civiles, revoluciones y regímenes populistas con contenido rupturista, se vieron fuertemente impactados por un proceso democratizador inédito, tanto institucional como culturalmente. También Chile y Uruguay, reconocidos por construir y sostener regímenes democráticos de larga duración, una vez cerrada la etapa de sus Gobiernos militares empujaron también a las primeras administraciones postdictadura a devolver a sus sociedades los elementos fundamentales de una cultura política democrática (Martínez Lillo y Rubio, 2015). El final del socialismo real y del fenómeno guerrillero, a excepción de las FARC-EP en Colombia, situaban a la izquierda en un escenario definido por la lucha eminentemente electoral (PNUD, 2004).

Contemplado así, el primer desafío de las sociedades latinoamericanas tras las situaciones de violencia y de los conflictos armados se expresa en un contexto donde se carecía de

una cultura que enfatizara la convivencia democrática en sus diferentes expresiones (pluralismo, elecciones libres, libertad de expresión, entre otras), por lo que en definitiva, la reconstrucción o la construcción de las diferentes democracias se convirtió en una empresa compleja que requirió la voluntad de muchos actores (Soto, 2013). Asimismo, y admitida la trascendencia del cambio político sobrevenido, debe subrayarse no obstante que la instauración de regímenes democráticos no derivó automáticamente en garantía de estabilidad y gobernabilidad. Las secuelas del autoritarismo militar (y civil), de la corrupción y de la violencia, entre otros factores, continuaron aún presentes en el desarrollo de muchos países de América Latina. En definitiva, la consecución de una gobernabilidad de calidad y una democracia duradera tropezó con múltiples obstáculos, aun predominando las elecciones libres y libertades, en teoría, democráticas.

Apuntando en similar dirección, conviene advertir cómo en la política latinoamericana de los años noventa no se llegaron a abandonar por completo las formas de liderazgo o el modo de hacer política de décadas anteriores. Por un lado, la caída de los modelos de cambio social como el socialismo, más los efectos de las dictaduras militares y las transformaciones en la estructura social y laboral conformaron un campo propicio para la emergencia del llamado neopopulismo, a saber, un avance de estas formas de hacer política pero con ciertas características nuevas que lo distinguían del fenómeno clásico. El abandono del intervencionismo económico, su crítica y denuncia de los partidos políticos y su apuesta por los sectores marginales e informales de las capas populares comprenden parte del fenómeno (Conniff, 2003). Por otro lado, esa misma realidad derivaría en la proliferación de elementos de autoritarismo y de desconfianza hacia la democracia, elementos nunca abandonados de la cultura de los liderazgos o movimientos de la región.

Un factor novedoso, en cambio, es poder comprobar cómo esta construcción democrática descansaría en el mayor

protagonismo e influencia asumido por las organizaciones internacionales y regionales. Si Naciones Unidas, junto a la Comunidad Europea, participaba activamente en la pacificación centroamericana, la Organización de Estados Americanos (OEA) recuperaba capacidad política y una legitimidad perdida en los años anteriores. Desde el Grupo de Río, sus miembros dinamizaban la institución hemisférica, convencidos de su potencialidad en la defensa y preservación de derechos y libertades. En 1990 la OEA creaba una unidad para el fomento de la democracia cuya tarea básica era vigilar las elecciones, y en 1991 adoptaba la Resolución 1080 diseñada para ayudar y lograr que los países volvieran al camino de la democracia constitucional. Ese mismo año, la fundación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), respondía tanto al deseo de reimpulsar la cooperación económica regional como a la necesidad de fortalecer las transiciones en Argentina, Brasil, Uruguay e inclusive Paraguay, que en su caso no implicó un cambio del partido dominante en el poder. Por tanto, impulso a la integración regional y democratización quedaban asociadas. La cláusula democrática, incorporada a los estatutos de MERCOSUR en 1998, y por la cual, de hecho, la realización de un golpe de Estado provocaría la suspensión o expulsión del grupo, le convertía en una suerte de gendarme de las libertades en América del Sur (Smith, 2009).

Las novedades del tiempo de post Guerra Fría no quedaron limitadas al ámbito estricto de la recuperación democrática. Junto a esos avances políticos —o quizá de su mano—, esta década sería testigo de potentes transformaciones en el orden económico que modificaron estructuralmente el sistema productivo, las relaciones económicas y sociales, además de las formas de producción del continente latinoamericano. La instalación del neoliberalismo, es decir, de economías "abiertas" con protagonismo de la iniciativa privada, se definiría como un cambio de matriz de desarrollo, más allá de lo exclusivamente económico, para alcanzar y penetrar el orden cultural e ideológico.

Con sus medidas de desregularización, privatización de empresas y servicios públicos, liberalización de los mercados financieros, primacía de las exportaciones de bienes primarios sobre la industrialización, unido al cambio de base del mercado laboral, fue configurando, entre otras medidas, un orden diferente al existente. ¿Por qué razones? En primer término, por la disminución de la influencia del Estado, no tanto como actor económico que lo llevó a asumir responsabilidades empresariales sino como proveedor de servicios sociales básicos, como motor del desarrollo integral de las sociedades latinoamericanas y como articulador de intereses y formas de identificación sociocultural. El reemplazo del Estado por el mercado, de lo colectivo por lo individual, impactó en múltiples esferas de la vida social, acarreando unas transformaciones que aún hoy siguen teniendo sus consecuencias (Foxley, 1988).

América Latina se construía sobre el consenso entre democracia electoral y libre mercado. Los nuevos líderes surgidos por entonces no dudaron en abrazar claramente el neoliberalismo, ya fuera por convencimiento propio o por las necesidades del país, con la esperanza de poder acelerar el crecimiento, abandonar la incertidumbre económica y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero el neoliberalismo, definido como un proyecto de cambio de matriz productiva y sociocultural, si bien significaría un impulso en términos macroeconómicos, elevando los indicadores de avance económico, bajando sostenidamente la inflación, el déficit fiscal y mejorando la escasa capacidad de innovación de sus economías así como los datos exportadores, también es cierto que tal crecimiento no tuvo su correlato esperado en la consolidación de sociedades más equitativas ni cohesionadas. Esa tensión entre crecimiento y desarrollo, de vieja presencia sobre el continente, formó parte sustantiva de los debates intelectuales más importantes vividos en la región por entonces (Reid, 2009).

A la democratización y el neoliberalismo se añadió un tercer rasgo para comprender la América Latina de los años

noventa: la incuestionable supremacía de los Estados Unidos. A partir de unas condiciones objetivas inusitadamente buenas, Washington acentuaba su predominio hemisférico casi total económico, financiero o comercial, favorecido además por el retroceso de otros competidores extracontinentales (Unión Europea, Rusia, Japón o China). Los presidentes George H. W. Bush (1989-1993) y Bill Clinton (1993-2001) elaboraron una estrategia centrada en impulsar el libre mercado, la integración y la promoción democrática (elecciones transparentes, normalización relaciones cívico-militares, derechos humanos), como una garantía de desarrollo y estabilidad continental que aseguraba, a su vez, los intereses norteamericanos. Las nuevas amenazas a la seguridad —narcotráfico, mafias transnacionales, inmigración ilegal, refugiados— fueron abordadas desde el ejercicio de una *hegemonía preventiva*, revestido bajo el argumento de fortalecer la democracia (Smith, 2010). Ocurriría, por ejemplo, con Haití en 1994, y con el reforzamiento de la presión sobre Cuba, a través de la Ley para la Democracia Cubana (Ley Torricelli, 1992), que pretendía sembrar el caos al intensificar las sanciones económicas estadounidenses, y de la Ley de la Libertad y la Solidaridad Democráticas Cubanas (Ley Helms-Burton, 1996), diseñada para globalizar el embargo comercial y castigar aún más la economía de la isla. Estados Unidos permanecía en la lógica de transformar por la fuerza el régimen de La Habana, mientras Cuba —aún más aislada desde la desaparición de la URSS—, aguantaba en el durísimo Periodo especial.

LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA RECONCILIACIÓN

Como ya se ha mencionado, los procesos de transición continuaron ampliándose y consolidándose en la dinámica política. Estos implicaban el reacomodo postdictadura de las fuerzas

armadas al poder civil, aunque en situaciones diversas y nunca fáciles, tanto por la débil institucionalidad aún presente como por las dificultades para reducir la autonomía de los militares, con una oficialidad que se mostraba reticente a la hora de asumir su responsabilidad en la violación de derechos humanos. Emprendido el avance democrático, la reclamación social que exigía conocer con exactitud las atrocidades cometidas por las dictaduras y someter a juicio a sus responsables se encauzó a través de las Comisiones de la Verdad, abriéndose así a la posibilidad de enfrentar un pasado trágico, difícil y complicado pero imprescindible. Por otra parte, los modelos del cambio político resultaban diversos, por lo cual no hubo solo una forma de asumir dichas demandas (O'Donnell y Schmitter, 2009).

En Chile, el presidente Patricio Aylwin (1990-1994), al frente de la Concertación de Partidos por la Democracia, recibía la Jefatura del Estado de manos del general Pinochet para pilotar una transición centrada en articular un nuevo sistema de convivencia, normalizar la relación civil-militar y rubricar la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. El 25 de abril de 1990 se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación —o Comisión Rettig—, lo que constituía el paso más importante y valiente para esclarecer —sobre la base de la verdad y la justicia— las violaciones militares de los derechos humanos. Con dificultades para suprimir los enclaves autoritarios heredados de la dictadura, los avances democráticos serían parciales aunque, a la larga, irreversibles. En terrenos clave, la decepción fue profunda: la fórmula acuñada por Aylwin —*verdad y justicia en la medida de lo posible*—, demostraba los límites aún presentes (Moulian, 1997).

En gran medida, el caso chileno se transformó en modelo a seguir por otros países. Los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010) se sustentaron en una alianza multipartidista que componían el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido

Socialista y el Partido Radical Socialdemócrata. Esta alianza ganó las cuatro primeras elecciones presidenciales del periodo democrático, caracterizándose por llevar a cabo un reformismo moderado y una política de acuerdos con la oposición de derechas. Entre los instantes más conflictivos y de incertidumbre de ese proceso, destacaron varios episodios de tensiones cívico-militares que amenazaron —relativamente— la estabilidad democrática, hasta el arresto en Londres del general Pinochet, el 16 de octubre de 1998, hecho que disminuyó el poder disfrutado hasta entonces por los militares y marcó —según algunos observadores— el punto final de la transición política.

Después del mandato de Aylwin, el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), militante del Partido Demócrata Cristiano, se distinguió por llevar a la práctica un acción más moderada que el anterior, centrado en mantener la gobernabilidad del país y enfatizando su Administración en la modernización económica. Durante su presidencia, culminó el juicio contra el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, que tuvo como consecuencia el encarcelamiento de la plana mayor de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política del régimen de Pinochet, lo que se considera un avance en materia de justicia.

En el terreno económico, los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia continuaron llevando a cabo, en términos generales, el patrón de libre mercado diseñado por Augusto Pinochet. Desde 1990, Chile destacaría por la estabilidad macroeconómica, la prudencia fiscal y el desarrollo de las exportaciones, en el marco de una economía globalizada y abierta al mundo. Se apostó, básicamente, por un sector privado fuerte y un Estado con un rol que enfatizaba la regulación más que la promoción directa del desarrollo, dentro de una estrategia económica denominada *crecimiento con equidad*. El crecimiento del país fue alto, alcanzando un 7 por ciento de promedio entre 1990 y 1998. Mientras Aylwin impulsó una

reforma tributaria y laboral mediante acuerdos transversales, con Frei Ruiz Tagle se estrecharon las relaciones económicas en el plano internacional y se impulsaron avances en infraestructura a través del entendimiento entre lo privado y el Estado, lo cual continuó el presidente Ricardo Lagos (2000-2006), quien llegaría a firmar varios tratados de libre comercio con países clave del mundo desarrollado (Estados Unidos), y con entidades supranacionales (Unión Europea). Desde el ámbito de las políticas sociales, se implementaron activas iniciativas para reducir la desigualdad del ingreso y los niveles de extrema pobreza, que ha disminuido en estas décadas. Por ejemplo, en 1990 se creó el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), y en 2004, el programa Chile Solidario, para atender a las personas en situación de extrema pobreza. Se aprobó también la Reforma de Educación (1996); la nueva Ley de Matrimonio Civil, que estableció, entre otros aspectos, el divorcio con disolución del vínculo matrimonial (2004); la Ley de Filiación (1998); la Reforma Procesal Penal (2000) y la reforma del sistema previsional (2008). Además, se aumentó el gasto público en salud, educación y vivienda (Garretón, 2013).

Los procesos de cambio resultaron más complejos en otras latitudes. En Centroamérica, como se ha enunciado, más que de transición cabría hablar de una refundación democrática. Pasada la euforia inicial derivada de la finalización de los conflictos civiles, tanto en El Salvador como en Guatemala, los avances chocarían con un contexto político, social y cultural aún muy adverso.

Tras aprobarse en 1991 la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), el 16 de enero de 1992 se firmaba en el Castillo de Chapultepec (México) el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN, bajo el auspicio de la ONU y la colaboración de Colombia, México, España y Venezuela. A su vez, el 15 de marzo de 1993, la Comisión de la Verdad para El Salvador —creada para investigar las violaciones de los derechos humanos durante el

conflicto civil—, entregaba al Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, su informe final titulado *De la Locura a la Esperanza*. Ambas iniciativas —Acuerdo de Paz e Informe Final— debían conformar la clave de la bóveda de un nuevo sistema político y las bases socioeconómicas para el futuro de un país pacificado.

En Guatemala, el 29 de diciembre de 1996 tenía lugar la firma del Acuerdo para una Paz Firme y Duradera entre el Gobierno y la guerrilla del URNG con el respaldo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). El camino hacia la paz y la democratización había comenzado seis años antes, en 1990, periodo en el cual fueron sucediéndose reuniones y encuentros, alcanzándose variados compromisos, desde la reducción de las violaciones a los derechos humanos hasta el fortalecimiento del poder civil, pasando por las futuras bases sociales y económicas del país. De aquellos destacaba el Acuerdo de Oslo (23 de junio de 1994), que establecía la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), apoyada y financiada por la ONU con el cometido de fijar el historial de los crímenes vinculados con un conflicto armado prolongado durante más de treinta años. Su mandato se ceñía, sin embargo, a intentar esclarecer ese turbulento pasado, que no a juzgar ni responsabilizar a nadie, careciendo igualmente de autorización para identificar a los responsables de la violencia.

El contexto en el que se desenvolvería la CEH, así como sus propias insuficiencias y limitaciones legales, provocaron que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA), de la mano de monseñor Juan Gerardi, iniciara una investigación paralela sobre los mismos temas, conocida como Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Por otra parte, la Iglesia era la única organización capaz de superar las limitaciones culturales que enfrentaría la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. El 24 de abril de 1998, monseñor Gerardi presentaba públicamente

en la Catedral de Ciudad de Guatemala el documento final de la REMHI, *Guatemala: nunca más,* donde se citaba pormenorizadamente el horror de las desapariciones, masacres, asesinatos y torturas sufridas, proporcionando —como información, entre otras— la identidad de cincuenta mil muertos civiles de la guerra. El trabajo afirmaba sin ambages que el ejército de Guatemala y sus unidades paramilitares asociadas eran responsables del 80 por ciento de los asesinatos de civiles, y que la guerrilla habría cometido poco menos del 5 por ciento de los crímenes de guerra. Dos días más tarde, Girardi era asesinado (Goldman, 2009).

El informe de la CEH, *Guatemala. Memoria del Silencio*, presentado en 1999, estimaba una cifra de muertos y desaparecidos de más de doscientas mil personas, entre 1962 y 1999, impresionando de manera especial el genocidio practicado por las fuerzas de seguridad del Estado sobre la población indígena (maya y ladina). En el enfrentamiento ejército-guerrilla, Guatemala había sido un terreno fértil para la aplicación de la noción del enemigo interno intrínseco a la doctrina de la Seguridad Nacional (Rouquié, 1994; Del Alcázar, 2012).

Tampoco el funcionamiento democrático era empresa sencilla en países de América del Sur, donde las tentaciones autoritarias y la violencia habían sido una constante en el siglo XX. Así sucedió en Perú.

Durante el periodo entre los años 1980 y 2000, Perú vivió sometido a una fuerte violencia política, protagonizada fundamentalmente por dos movimientos subversivos: el Partido Comunista-Sendero Luminoso (PCP-SL), nacido en 1980, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), organización surgida a mediados de 1984. Aun cuando ambos grupos resultaron en extremo violentos, sería el PCP-SL el actor subversivo que más daño causó en cuanto a asesinatos y violación de los derechos humanos, adjudicándosele el 53,7 por ciento de las muertes en el periodo, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Cabe señalar que el conflicto

armado, a partir de estimaciones realistas, dejó un saldo de setenta mil muertos en veinte largos años (Aranda, 2010). La paradoja de este caso es que desde el mismo año 1980 —fecha en la cual el PCP-SL inicia sus acciones armadas— el país atravesaba su transición política desde un largo Gobierno militar (1968-1980), a través de las Administraciones de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990), Gobiernos que intentaron en vano detener la subversión. De hecho, con este último presidente el exceso del ejército en la lucha antiterrorista se hizo ya patente, en una espiral cada vez más descontrolada de acción-reacción.

Ya en los años noventa se manifiesta otra etapa del conflicto, definida por la violencia del Estado, emprendida sin ambages por el Gobierno de Alberto Fujimori, elegido presidente de la República en 1990. Desde su llegada al poder, los servicios de inteligencia cometieron continuas violaciones de los derechos humanos, lo que le permitiría, sin duda, a Fujimori lograr la derrota sobre el terrorismo de la extrema izquierda, pero dentro de un completo deterioro institucional y grave pérdida de legitimidad democrática. Esto llevó a la realización de un auto golpe de Estado el 5 de abril de 1992 que le otorgó poderes autoritarios, mientras que al año siguiente Fujimori procedió a someter a sufragio una nueva Constitución, que permitía una reelección presidencial inmediata, la cual consiguió en 1995. Con esto consolidó un decisivo poder sobre las instituciones y los principales grupos políticos y sociales peruanos (Burt, 2011).

Este auto golpe de Estado se considera un caso de regresión autoritaria dentro de las redemocratizaciones latinoamericanas. Y con razón. El contrapunto entre ambas situaciones políticas resulta innegable solamente con mencionar las principales medidas adoptadas por el mandatario peruano: tras los acontecimientos del 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso de la República, procedió a controlar los medios de comunicación e intervino sobre el poder judicial, limitándose

las libertades públicas, buscando ampliar su margen de capacidad decisoria, evitando la fiscalización parlamentaria a la hora de ejecutar con absoluta discrecionalidad su dura política económico-social e ignorando también las acusaciones de atentar contra el respeto de los derechos humanos.

Sin duda, la aparición de la violencia social y política hasta niveles insospechados parece ser rasgo distintivo de la reciente historia peruana. Factores de largo plazo, como la tradicional exclusión de las grandes mayorías indígenas y provincianas de las principales decisiones, la profunda fragmentación geográfica y territorial que divide al país en tres grandes áreas, en gran parte inconexas entre sí (costa, sierra y selva), y las fuertes discriminaciones raciales, regionales y sociales, son los elementos que configuran un cuadro donde no parece encontrarse salida aparente a corto plazo. Pero hay un elemento que atraviesa estructuralmente las grandes carencias del país —lo que puede extenderse a toda América Latina— y es la escasa responsabilidad de su clase política, la cual fue incapaz de darle un proyecto serio al país.

¿Qué función cumplían —cabe interrogarse— las Comisiones de la Verdad? Una pregunta pertinente y oportuna, dado el profundo desafío que debieron enfrentar las transiciones democráticas. A los casos de Argentina —el Nunca Más, de la CONADEP dirigida por Ernesto Sábato, 1984—, Chile y Perú, se sumaban las experiencias ya citadas de El Salvador, Guatemala, así como las de Ecuador (2007) y Brasil (2011). Y es que —sin duda— los procesos de normalización política interna iban acompañados del reto sobre cómo reconstruir los pasados traumáticos, originados por dictaduras, represiones autoritarias, guerras civiles y conflictos internos. Desde esa consideración, las distintas comisiones surgían en tanto que espacio de reconstrucción de la memoria, imprescindibles para edificar democracias integradoras e inclusivas donde toda la sociedad fuese partícipe y protagonista. En la mayoría de los casos, no obstante, tendieron a

conformarse como *memorias oficiales*, al ser el Estado y no los ciudadanos el que encabezó este proceso, limitando lógicamente su acción. Igual reflexión cabe hacer en cuanto a sus competencias, funciones y capacidad jurídica. Aun así, la formación y papel de las Comisiones de la Verdad fue un avance notorio en la transformación no solo institucional de América Latina, sino también en su nueva cultura política.

Un último factor —en la esfera de lo político— remitiría al continuado esfuerzo de la OEA para asumir funciones de vigilancia y garantía multilateral del orden democrático en la región. Lo había demostrado ya a principios de los noventa con la mencionada Resolución 1080, y volvería a rubricarlo a comienzos del siglo XXI. La desaparición de las dictaduras, salvo en Cuba, y la convergencia de sus miembros seguían ofreciendo una oportunidad indudable para el enraizamiento de las libertades. Bajo el impulso del secretario general César Gaviria, el 11 de septiembre de 2001 la Asamblea Extraordinaria de la OEA confirmaba en Lima la Carta Democrática Interamericana. Con el respaldo unánime de los 34 socios, el texto definía la democracia como un derecho de los pueblos, y comprometía a los Gobiernos a su defensa y preservación, así como a la salvaguarda de los derechos humanos y a contemplar la suspensión de la participación en la organización a todo Estado miembro que alterara su orden democrático, incumpliendo los fundamentos asumidos. La Carta era considerada un hito en la historia de la democracia del hemisferio.

ECONOMÍA NEOLIBERAL Y REGIONALISMO ABIERTO

Las transformaciones económicas representaban la segunda gran novedad. La década perdida derivó en un cuestionamiento absoluto del modelo proteccionista e intervencionista, y en su reemplazo por el neoliberal, inspirado en el libre mercado,

las privatizaciones y la apertura comercial. Aun cuando existían precedentes (Chile o Bolivia), estas prácticas adquirieron su auténtica dimensión a raíz del Consenso de Washington, un conjunto de recomendaciones que John Williamson formuló en noviembre de 1989 como instrumento para el crecimiento y modernización de las economías latinoamericanas, convertido en el nuevo paradigma. Sus recetas recomendaban la reducción del papel del Estado, una rígida disciplina fiscal, recortes del gasto social, privatización de empresas y servicios públicos, una drástica modificación en materia comercial y la completa apertura a los mercados exteriores (Smith, 2010).

En Argentina, seguramente el caso más emblemático de experimento neoliberal es el que encabezó el presidente Carlos Menem (1989-1999). Este anunciaba el 1 de agosto de 1990 un proyecto de transformación nacional cuyos pilares descansaban sobre dos grandes leyes: la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica, ambas implementadas aprovechando el mal recuerdo dejado por la Administración radical de Raúl Alfonsín y su descalabro económico. La primera de esas legislaciones sostenía la necesidad de iniciar una larga lista de privatizaciones de empresas públicas estratégicas, por ejemplo ENTEL, la empresa de telefonía, y de Aerolíneas Argentinas. Además, se privatizó la red vial, los canales de televisión, y buena parte de los ferrocarriles y de los yacimientos petrolíferos. La segunda —Ley de Emergencia Económica— suspendía todo tipo de subsidios, privilegios, además de autorizar el despido de funcionarios públicos. El discurso de la *gran transformación* acabó ocupando de forma hegemónica todo el espacio y el debate público nacional (Romero, 2012).

De entre los diferentes impactos provocados, seguramente conviene destacar cómo el Gobierno de Menem puso en cuestión el modelo de Estado que se había instaurado desde el peronismo de los años cuarenta del siglo XX, y que ni siquiera las dictaduras militares de los sesenta y setenta habían podido desestructurar. Se trataba, en definitiva, de un cambio radical en

la matriz de desarrollo económico e incluso en la concepción de ciudadanía que se había arraigado en amplios sectores de la sociedad argentina (Novaro y Palermo, 2003).

Similares programas se aplicaron también —y con similar dureza— en Perú. Alberto Fujimori comenzó ejecutando una temida estrategia de *shock* con el fin de reducir la inflación y el déficit fiscal, ordenando de este modo la economía. Se terminó con la fijación de los precios y los tipos de cambio diferenciados, lo que tuvo como efecto una baja de la deuda externa y el regreso de la confianza en la comunidad financiera internacional. También se inició un vasto plan de privatizaciones de los servicios básicos (electricidad, servicios telefónicos) e industrias estratégicas (pesca, minería) que habían sido estatizados en el gobierno militar, e incluso antes. Se flexibilizó, asimismo, el mercado laboral, con lo cual el poder de negociación de los sindicatos disminuyó de manera considerable, cuando tradicionalmente en el Perú habían tenido una fuerza muy notable. Las consecuencias fueron similares a otras latitudes: las políticas sociales, aquellas que hacían menos vulnerables a los sectores empobrecidos, fueron desmanteladas, asistiéndose, por el contrario, al enriquecimiento de los segmentos más acomodados.

También en México —con Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994—, Ecuador —con Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, entre 1996 y 2000— y Brasil se llevaron a cabo similares programas económicos. En Brasil, las administraciones de Fernando Collor de Mello (1990-1992), Itamar Franco (1992-1994) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), a pesar de tener perfiles político-ideológicos diferentes entre sí, ejecutaron políticas de igual naturaleza, privatizando empresas tan importantes como USIMINAS y la Compañía Siderúrgica Nacional, bancos estatales, empresas telefónicas y ferroviarias (Vidal Luna y Klein, 2007). Todo esto sucedía en un país que vivía en medio de una compleja reconstrucción democrática tras la larga dictadura militar (Aarão, 2014).

Por otra parte, la nueva agenda económica reimpulsó los procesos de integración, bajo la fórmula del regionalismo abierto. La integración se concebía como un instrumento funcional y complementario en la inserción internacional de las economías latinoamericanas, con un *desarrollo hacia afuera* y el impulso de las uniones aduaneras y del mercado común (Moniz Bandeira, 2004). El 26 de marzo de 1991, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay firmaban el Tratado de Asunción, dando origen al MERCOSUR. En el caso del Grupo Andino, este confirmaba en 1995 un arancel común, pasando a denominarse más adelante Comunidad Andina de Naciones (CAN). Otras subregiones se sumaban al proceso. El 13 de diciembre de 1991 se constituía el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), con Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y, posteriormente, Belice, que reformaba la Carta de la ODECA. El MCCA, tras reemprender sus actividades en 1993, quedó incorporado en el SICA. En el caso del Caribe, los miembros del CARICOM firmaban, en el 2001, una nueva versión de su tratado fundacional para concretar la formación de un mercado común.

América Latina no era ajena a un mundo construido en torno a espacios integrados, reflejo del capitalismo global. Una ola a favor del libre comercio recorría el continente. El 7 de octubre de 1992 los presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Estados Unidos de América, George H. W. Bush (1989-1993), y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney (1984-1993), firmaban en San Antonio (Texas) el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) —*la arquitectura de un nuevo sistema internacional*, según Henry Kissinger— que eliminaba las barreras aduaneras y comerciales entre los tres países y promovía el libre intercambio de productos y capitales, para transformarse en uno de los mayores bloques de comercio a escala mundial. México buscaba perpetuar las reformas neoliberales emprendidas por Salinas, impidiendo una vuelta atrás, a los modelos anteriores, así como conquistar la paz social gracias al

aumento de unas inversiones extranjeras favorecedoras de empleo y reducción de la pobreza. Estados Unidos, por su parte, pretendía anclar la economía del vecino del sur a los beneficios de su estructura productiva y situar a la diplomacia mexicana bajo su estela exterior (Smith, 2010).

El TLCAN no solo era un acuerdo entre los países de América del Norte. Representaba el punto de partida hacia toda una reconfiguración de las relaciones continentales. El 27 de junio de 1990, George H. W. Bush anunciaba su proyecto —Iniciativa para las Américas— de establecer una gran área de libre comercio desde Anchorage (Alaska) hasta Tierra de Fuego (Argentina). Asumida por la Administración demócrata, el presidente Clinton acentuó la estrategia a favor de una cooperación económico-política hemisférica con el acuerdo de todos los dirigentes regionales. Entre el 9 y 11 de diciembre de 1994 se celebraba en Miami (Florida) la Primera Cumbre de las Américas, en cuya Declaración de Principios los 34 jefes de Estado americanos, Cuba excluida, reafirmaban —junto a la defensa de los derechos humanos, la erradicación de la pobreza o la lucha contra el narcotráfico— un compromiso con la democracia, el libre comercio y la integración y el compromiso explícito de crear un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en el año 2005. El libre comercio sería una constante en las Cumbres de las Américas de Santiago de Chile (1998) y de Quebec (2001).

Dentro del regionalismo abierto quedaban encuadrados el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), desde 1989, o la Asociación Estratégica América Latina-Unión Europea, en 1999. Novedad sería, igualmente, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, compuesta por los países de lengua portuguesa, española y catalana de América y Europa, que a partir de los rasgos compartidos de una historia y culturas comunes, constituían un espacio económico, político, social y cultural. Su máxima expresión era la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno —o Cumbre Iberoamericana—, cuya

puesta de largo fue la Primera Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, en junio de 1991 (Del Arenal, 2011).

Las políticas neoliberales reintrodujeron a América Latina en la senda del crecimiento económico, pero aún de forma débil y con un duro impacto social. Mayor estabilidad macroeconómica, control de la inflación o mejora del comportamiento exterior figuraban entre los logros de un ciclo reformista cuyos beneficios, sin embargo, no se extendieron a todos los sectores de la población por igual, provocando un serio retroceso en términos de equidad e incremento de la pobreza. Según la CEPAL, entre mediados de los ochenta y los noventa el número absoluto de personas viviendo en condiciones de pobreza pasó de 125 a 186 millones. Para 1997, a tenor de otras cifras, la región superaba los 200 millones de pobres. En México, el TLCAN arrojaba a la indigencia a cientos de miles de miembros de la clase media. En Perú, el neoliberalismo se aplicaba desde el autoritarismo populista del fujimorismo, y en Venezuela se hacía con un sistema político-institucional absolutamente desprestigiado. La ecuación mercado-democracia tampoco se confirmaba. La falla en la calidad de las nuevas democracias (debilidad institucional, brechas entre partidos y ciudadanía, corrupción) era nota predominante en muchos países.

LAS RESISTENCIAS. TENSIONES Y CONFLICTOS

Paralelamente, desde mediados de los noventa la emergencia de distintos movimientos sociales (indígenas, campesinos sin tierras, pequeños agricultores, desocupados, piqueteros o asalariados) fue inaugurando un nuevo ciclo latinoamericano de protestas, de resistencia frente al modelo neoliberal, que con un discurso contrahegemónico pasaba a cuestionar el libre comercio o la democracia representativa al tiempo que exigía profundos cambios económicos, sociales y políticos. Una idea

central latía en las expresiones generalizadas del descontento: las democracias restauradas habían defraudado las expectativas de las grandes mayorías ciudadanas, que aspiraban tanto a mejorar sensiblemente sus condiciones de vida como a que se les reintegrara una dignidad perdida (Mirza, 2006).

Primer exponente de esta conflictividad sería la rebelión protagonizada el 1 de enero de 1994 en Chiapas (México) por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), alzado frente al Estado mexicano para reclamar el reconocimiento de los derechos indígenas y en demanda de tierra, trabajo, democracia real, justicia y paz. A pesar de tener un origen indígena y centrado en cuestiones locales, el neozapatismo se situaba también en una visión universal de la problemática capitalista. Su insurrección era una lucha contra el régimen social impuesto por el TLCAN —de hecho el alzamiento coincidió con su entrada en vigor— y, de manera más general, por la exclusión y subordinación sistemáticas propias de la construcción regional del mercado mundial (Ansaldi y Giordano, 2012).

Las novedades eran perceptibles asimismo en la izquierda. En junio de 1990 se constituía a instancias del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) el Foro de São Paulo (FSP), que lograba reunir a 48 partidos y agrupaciones de 13 países, para debatir la coyuntura vivida tras el derrumbe del socialismo real y las consecuencias de la implantación de los proyectos neoliberales en la región. Se trataba no solo de oponerse a estos, sino también de proponer e impulsar alternativas democráticas viables y convertir a la izquierda en una opción efectiva de Gobierno. Después de los encuentros de Ciudad de México (1991), Managua (1992), La Habana (1993) y Montevideo (1995), el FSP conformaba el espacio privilegiado de debate de una izquierda plural, renovando pensamiento y estrategias sobre la base de nuevos consensos sociales. Así, en julio de 1996, en el VI Encuentro FSP de El Salvador, la histórica intervención del dirigente del PT, Luis Inácio Lula da Silva remitía a una

tercera generación de la izquierda, que retomando la iniciativa de las masas, estimulando el debate y haciendo autocrítica, ganara legitimidad en la sociedad: hoja de ruta para unas fuerzas que ascendieron años después a los Gobiernos de distintos países (Vidal Luna y Klein, 2007).

En América del Sur los negativos datos económicos favorecían unos conflictos sociopolíticos que acabaron por afectar a la propia gobernabilidad de los Estados. En enero del 2000, la crisis financiera de Ecuador —fruto del neoliberalismo practicado— se unía a la caída de los precios del petróleo con la lógica reducción del gasto estatal y a un levantamiento indígena para decidir la suerte del Gobierno de Jamil Mahuad (2000), destituido por el Congreso Nacional. Ese mismo año, la amplia movilización popular lograba poner término al régimen de Alberto Fujimori, quien huiría del Perú buscando refugio en Japón, renunciando a la primera magistratura del país vía fax.

Emblemático sería el desplome de Argentina. Las reformas neoliberales de Carlos Menem impulsaron la venta del patrimonio nacional —desde el petróleo hasta las empresas estatales— ante una sociedad encandilada por el consumismo y el supuesto ingreso en el primer mundo. A finales de la década, una profunda brecha separaba a ricos y pobres en medio del mayor endeudamiento externo de su historia; un marasmo económico agravado con la gestión del presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), líder de una coalición progresista (Unión Cívica Radical-FREPASO), maniatado por las entidades financieras mundiales. El modelo estalló en diciembre de 2001 cuando al aplicarse el corralito, la confiscación de 45.000 millones de dólares de ahorros de los argentinos, se desató una protesta popular, con movilizaciones y saqueos por todo el país, duramente reprimidos. La protesta incluía igualmente a amplios sectores de la clase media urbana. La consigna "¡Que se vayan todos!" expresaba un rechazo social hacia esas políticas y a sus gobernantes, en un clima de hartazgo generalizado. A pesar de

decretarse el estado de sitio, la violencia no disminuyó. El balance de los enfrentamientos dejaba un saldo de 27 muertos y miles de heridos. El día 20 de diciembre, ante una situación límite, Fernando de la Rúa intentaba convocar al *justicialismo* a un gran acuerdo de gobernabilidad, sin éxito. Pero tampoco ya su propia coalición le respaldaba: ese mismo día presentaba la renuncia, abandonando la Casa Rosada en helicóptero. Toda una imagen para la historia.

En México, el 11 de marzo de 2001, la Marcha de la Dignidad zapatista desembocaba en la plaza de El Zócalo después de recorrer la distancia entre Chiapas y el Distrito Federal. En la concentración, miles de manifestantes reclamaban el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y convertir en ley los derechos indígenas y la defensa de su patrimonio cultural.

CAPÍTULO 5

EL GIRO A LA IZQUIERDA Y LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL CONTINENTE (2002-2016)

La década de los 2000 se iniciaba en el continente en medio de un serio cuestionamiento al modelo de desarrollo, tanto político como económico, que se había generalizado desde finales de la Guerra Fría. Una óptica crítica de los años noventa, al tiempo de la redemocratización. América Latina resultaba en realidad un espacio más complejo, heterogéneo y plural, donde los consensos formulados con anterioridad —democracia electoral y mercado— demostraban fragilidades, limitaciones e insuficiencias, además de un importante déficit de legitimidad social y ciudadana. Tanto los procesos de transición política y los de fundación democrática, dependiendo de cada caso particular, como la estrategia económica neoliberal que la mayoría de los países habían adoptado en la década de los noventa dieron paso a un nuevo ciclo histórico, catalogado como de giro a la izquierda. Sin duda, estamos en presencia de un cambio político que merece un análisis mayor, aunque la incertidumbre de sus resultados aún está a la vista.

En perspectiva histórica, las oleadas políticas no representan una novedad en el devenir latinoamericano, lo que en

rigor puede establecerse desde el propio nacimiento de los estados modernos de la región. A lo largo de su siglo XX contemplamos ya sean fases autoritarias (años treinta y sesenta-setenta), de democratización (tras la Segunda Guerra Mundial y en los años ochenta) o la neoliberal de post Guerra Fría, siempre guardando las necesarias excepciones a la regla. Bajo esta consideración, la ola de izquierdas de la década del 2000 no es un fenómeno nuevo en tanto que proceso (simultaneidad y paralelismo en las evoluciones políticas de diferentes países); pero sí lo es respecto a su naturaleza, *roja* o *rosa*, al situar en el centro del escenario a fuerzas que habían permanecido marginadas y reprimidas mucho tiempo, o sin participación activa en la democracia representativa (Dabène, 2012): en este caso, las izquierdas de la región, que habían caído en la marginalidad política o en la crisis de identidad ideológica tras la caída del Muro de Berlín en 1989.

A finales de la década de los noventa, el proceso político latinoamericano se vio modificado abruptamente. Y es que entre la victoria de Hugo Chávez en Venezuela (6 de diciembre de 1998) y la de Dilma Rousseff en Brasil (31 de octubre de 2010) se encadenaron veinticuatro triunfos electorales presidenciales de candidatos izquierdistas en trece países, incluyendo también en este cómputo varias reelecciones en la jefatura del Estado. Solo México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Panamá —con su perfil conservador y de relativa cercanía a los Estados Unidos—, además de Belize, Surinam y Guyana, quedaron al margen de este *contagio*. Para el caso de Chile, podemos situar el mandato del derechista Sebastián Piñera (2010-2014) como un paréntesis entre las dos administraciones de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-). Por ello, también merece incluirse en este grupo mayoritario.

¿Qué aspectos conviene subrayar a la hora de analizar el nuevo ciclo político? Las fuerzas y actores que lideraron este giro están más bien caracterizadas por la diversidad. Desde el

peronismo del matrimonio Kirchner en Argentina, pasando por el Partido de los Trabajadores de Brasil, el chavismo en Venezuela, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales en Bolivia o el Frente Amplio uruguayo, hasta el retorno democrático al poder del sandinismo en Nicaragua y del FMLN en El Salvador, tanto en América del Sur como en Centroamérica, cabe observar fuertes diferencias entre ellos, dentro —sin duda— de puntos comunes. Podemos encontrar, como similitudes básicas, un discurso crítico o menos acomodaticio hacia Estados Unidos, la revitalización del papel del Estado en la promoción del desarrollo y en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, además de algunas concepciones económicas estatistas mezcladas con toques de nacionalismo económico aunque también ideológico. Sin embargo, lo cierto es que este giro a la izquierda —a diferencia del proyecto neoliberal de la década anterior— no descansa sobre un corpus de ideas coherente y homogéneo. En otros términos, no hay una receta o un manual para comprender e interpretar este fenómeno como si fuera una entidad única, impidiendo —al mismo tiempo— obtener conclusiones apresuradas sobre este asunto.

En consecuencia, debe señalarse que estos Gobiernos obedecen a sus circunstancias históricas, nacionales e internacionales —inserción en el orden mundial—, sobre la base de una heterogeneidad de experiencias propias que dependen de trayectorias nacionales singulares, culturas políticas, liderazgos, fortaleza del sistema de partidos e institucional, entre otros rasgos. No todas las sociedades latinoamericanas conocieron idénticos proyectos —unos más radicales, otros menos—, ni se aplicaron con igual intensidad ni obtuvieron similares resultados. Una diversidad necesariamente incluida en las características, transformaciones y factores del llamado Post Consenso de Washington.

Frente a un análisis que prioriza ese carácter diverso y heterogéneo, otros enfoques aluden en cambio a la tesis de las "dos izquierdas" que, *grosso modo*, distingue casi en exclusiva

entre una izquierda socialdemócrata y otra anclada en un pasado revolucionario, donde la irrupción del liderazgo del militar venezolano Hugo Chávez introduciría la variable populista, también replicada en otros países. A veces tal dicotomía alude, asimismo, a las diferencias entre proyectos reformistas confrontados a otros radicales, claramente antiimperialistas y anticapitalistas. Los medios de comunicación han popularizado esas visiones a partir de los discursos de líderes y dirigentes. Aun reconociendo que tal dicotomía puede estar ocasionalmente presente —o ser útil en un plano comunicacional—, conviene recordar cómo la mayoría de trabajos e investigaciones inciden en considerar la validez de la variedad y de la diversidad de las experiencias en la ola de la nueva izquierda latinoamericana (Dabène, 2012; Pérez Herrero, 2006).

Más allá de su significado político-ideológico, resulta de especial relevancia subrayar la dimensión cultural y simbólica de estos triunfos electorales. La elección de Lula da Silva, un obrero metalúrgico sindicalista, o de Evo Morales, un campesino cocalero con fuertes raíces indígenas, o de tres mujeres como Cristina Kirchner, Michelle Bachelet o Dilma Rousseff, presidentas electas de la república en Argentina, Chile y Brasil, son signos de que existe una transformación más profunda que en la mera dimensión político-electoral. Asimismo, que un exsacerdote de izquierdas como Fernando Lugo se convirtiera en la principal autoridad de Paraguay (2008-2012) pone de manifiesto —refleja, en último término— la magnitud de los cambios sociales sobrevenidos, toda vez que sectores original y tradicionalmente excluidos se hacen presentes para ocupar altas responsabilidades gubernamentales. Semejantes acontecimientos establecen un cambio social en los liderazgos políticos de la región, que históricamente habían estado en manos de la oligarquía. Bajo estas consideraciones estamos en presencia de un panorama nuevo, que también afecta a las dimensiones económicas, sociales y culturales de la región.

A su vez, la categoría neopopulismo ha retornado al debate académico para caracterizar a estas experiencias políticas (De la Torre y Arnston, 2013).

Desde el punto de vista económico y social, después de atravesar por una difícil coyuntura —el lustro perdido— entre 1997 y 2002, y cuyo corolario estuvo representado por el corralito en Argentina y por la crisis económica en Ecuador, se manifestó en gran parte de la región un retorno a las políticas de crecimiento económico. Y es que entre los años 2003 y 2008 se pasó a una favorable coyuntura —el llamado quinquenio dorado—, generando altas tasas de crecimiento y de mayores ingresos fiscales, lo que redundó en una significativa disminución de las tasas de pobreza y de la extrema pobreza. Este ciclo de crecimiento económico se explica en gran parte por las modificaciones en el mercado mundial, fundamentadas en el gran alza de los precios en los productos energéticos, minerales, alimentos y otras materias primas, a partir de un tirón de la demanda consumidora dirigida —básicamente— desde China e India, que durante ese periodo estaban experimentando tasas de crecimiento en torno al 7 por ciento anual.

Dentro de ese contexto, se podría calificar el periodo 2003-2008 como uno de los momentos de mayor expansión económica de la historia reciente de América Latina, incluso considerando también la segunda mitad del siglo XX. De acuerdo con las cifras disponibles y para la región en su conjunto, las tasas de crecimiento del producto interno bruto alcanzaron —en promedio— un 2,2 por ciento en 2003, 6,1 por ciento en 2004, 5 por ciento en 2005, 5,8 por ciento en 2006 y 2007 y 4,2 por ciento en 2008. Este crecimiento tuvo asimismo un destacado impacto social, ya que los indicadores de crecimiento per cápita también se incrementaron en torno a un 3 por ciento anual durante ese ciclo. Tomando como referencia los datos aportados, puede llegar a afirmarse que dicho crecimiento, combinado con unas políticas públicas adecuadas emprendidas por los Gobiernos,

llegaría a ser un elemento decisivo para implementar amplias políticas sociales y de expansión de subsidios públicos a las capas menos favorecidas de la sociedad. Algo palpable, por ejemplo, en las áreas de salud, educación, vivienda, previsión y subsidios directos a las familias.

Las repercusiones de este fenómeno fueron notables en términos de transformación social. A diferencia de la América Latina de la década perdida de los años ochenta y de la década neoliberal de los noventa, ahora se asistiría a un descenso de los indicadores de pobreza, lo que en todo caso no fue homogéneo para las profundas diversidades nacionales (y regionales) de los distintos países latinoamericanos. A pesar de formar parte de la economía moderna y de la globalización, en definitiva, la pobreza continuó siendo uno de los males estructurales y permanentes en la historia de este continente. El caso de Chile —por ejemplo— se ha consolidado como una excepción al convertirse en el único país de la región que ha bajado sustantivamente sus niveles de pobreza, desde un 35 por ciento en 1990 al 13,7 por ciento a mediados de la década del 2000, sin considerar la indigencia, que tiene niveles mínimos en ese país, actualmente cercanos al 2 por ciento. En una óptica continental, la estadística señala que entre 2000 y 2007 la pobreza disminuyó en diecisiete países de América Latina, aunque la CEPAL estimó en 2008 que la región aún registraba 68 millones de personas en extrema pobreza e indigencia y 184 millones en situación de pobreza.

Tomando en cuenta todas estas variables —políticas y socioeconómicas—, puede concluirse, en definitiva, que en la década de los 2000 lograría consolidarse en América Latina un cambio de matriz conceptual y política, opuesta a la que dominó el debate público en los ochenta y noventa del siglo pasado. Las nociones de Estado, mercado, democracia, inserción internacional y la dimensión cultural-valórica fueron, principalmente, las que verificaron ese punto de inflexión y lograron desafiar las

nociones más conservadoras y neoliberales, planteando nuevos desafíos a las sociedades de la región y con resultados aún en desarrollo.

EL GIRO A LA IZQUIERDA Y LOS CASOS NACIONALES

Uno de los más destacados representantes de aquel giro político fue el expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-2013), a quien podemos considerar iniciador de este ciclo de Gobiernos en la región. Nacido en la ciudad provinciana de Barinas, este militar hizo una larga carrera política enarbolando los principios del bolivarianismo, que desde los años ochenta penetró en algunos oficiales de clase media, mezclado con ingredientes de la izquierda tradicional. A lo largo de los noventa, las tensiones sociales y políticas atormentaban a un país que era considerado un "ejemplo democrático" para América Latina, al menos durante la etapa más represiva de las dictaduras militares de seguridad nacional. Venezuela, de hecho, se transformó en refugio de miles de exiliados políticos, fruto de su estable sistema democrático, que, sin embargo, albergaba —cada vez con mayor amplitud— una serie de críticas de la ciudadanía.

El sistema de partidos políticos —liderado desde el año 1958 por la Acción Democrática, AD, de orientación socialdemócrata, y por el Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, de ideología democratacristiana— y el sistema institucional en general fueron sacudidos por coyunturas críticas como la revuelta social del "Caracazo", en febrero y marzo de 1989, reflejo a su vez del deterioro continuado del modelo económico basado en la renta petrolera, y por el frustrado golpe militar en el cual participaría directamente Chávez, el 4 de febrero de 1992, contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993). En la historia reciente venezolana, estos

dos momentos reflejaron la crisis del sistema político y partidario, con fuertes críticas hacia la clase política acusada de haberse enriquecido con los ingresos del petróleo, principal recurso natural del país. Este desgaste cristalizó en las elecciones presidenciales de 1998, ganadas por Chávez a partir de un programa electoral articulado en torno a la promesa de convocar una Asamblea Constituyente que reemplazara a la Constitución de 1961 y a caminar hacia una democracia participativa, dentro de un fuerte discurso antipartidista con claros componentes de izquierda. Su triunfo catapultó el inicio de un largo Gobierno, que solo terminó con la muerte del líder bolivariano —el 5 de marzo de 2013— en el ejercicio del cargo.

En el plano interno, el Gobierno de Chávez —marcado por unos ingresos del petróleo que alcanzaron un récord en el precio del crudo—, nacionalizó industrias, redistribuyó la renta y aumentó fuertemente los programas sociales, ampliando el acceso de la población a la alimentación, la vivienda, la sanidad y la educación, iniciativas que, junto a otras de índole política, generaron una fuerte polarización dentro de la sociedad venezolana, que sin embargo no tenía capacidad real para cuestionar su poder y legitimidad. Chávez iría encadenando sucesivas victorias electorales. Sin embargo, el aumento de la criminalidad y la crisis económica agravada desde el año 2009 con sus secuelas de inflación, desabastecimiento y debilitamiento del aparato productivo han incrementado un fuerte rechazo en amplias capas de la población. Situación aún más compleja desde que su heredero, Nicolás Maduro (2013-), asumió la primera magistratura del país.

En cuanto a la política internacional chavista, esta atravesó dos momentos esenciales que implican la radicalización de su proyecto político. El punto de inflexión entre ambos instantes se sitúa en la celebración del referéndum revocatorio de 2004 ganado por Chávez, precedido del intento de golpe de Estado de abril de 2002 y la huelga general de PDVSA (Aranda, 2013).

Si la primera etapa viene definida por la idea de equilibrio internacional y la multipolaridad, dentro de un posicionamiento netamente antineoliberal (sin ser necesariamente anticapitalista), partícipe de la *tercera vía*, con un tenue antiimperialismo y sin una absoluta oposición a los Estados Unidos, a partir de 2004, en cambio, se asistirá a un serio cuestionamiento del orden mundial capitalista y la opción por la construcción de un nuevo sistema multipolar, con posiciones firmemente antiimperialistas, la defensa del "socialismo del siglo XXI" y el distanciamiento completo con Washington, todo ello sobre la base de una firme cooperación Sur-Sur (el empoderamiento de los países del sur) y de la integración latinoamericana donde el ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas), con Cuba como primer miembro, ocupa lugar propio. Cabe subrayar, con énfasis, la omnipresencia de las referencias a Simón Bolívar dentro del conjunto de la política exterior de Chávez, quien manifestaría siempre, en cada referencia a la región, la intención de alcanzar el *sueño bolivariano* de construir una comunidad latinoamericana unitaria (Subercaseaux, 2016; Aranda y Salinas, 2013). En febrero de 2004, por ejemplo, Caracas acogía la XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los Quince —expresión de los mecanismos de cooperación entre las naciones en vías de desarrollo— donde el discurso de apertura de Hugo Chávez —*El Sur también existe*— recogía múltiples referencias a los posicionamientos anteriormente descritos e identificables en la expresión de la cultura política de esta generación de izquierda latinoamericana.

Todas estas denuncias se orientaban —en definitiva— a promover un nuevo modelo de desarrollo de los Estados periféricos, alternativo al imperante, desde una óptica autónoma y contrahegemónica a los poderes internacionales, mediante la concertación de los actores del Sur, abriendo la posibilidad de acometer amplios mecanismos de reformas en el campo de la salud, la educación, la formación o la organización

económico-comercial. La propuesta de Chávez resucita un *tercermundismo* renovado, una apuesta por la multipolaridad del sistema, con el mundo del Sur convertido en protagonista de un nuevo tiempo y de sus destinos.

El giro a la izquierda tuvo otro impulso muy significativo el año 2003. El país más grande de la región, Brasil, consolidaba un escenario político nuevo y relevante a raíz del triunfo presidencial del líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luis Inácio Lula da Silva, quien llegaba al poder después de tres intentos fallidos anteriores (1989, 1994 y 1998). Su elección por una amplia mayoría del 61 por ciento de los sufragios, representa un indudable cambio en Brasil, tras una década controlada por el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), otra muy interesante figura —dicho sea de paso— del panorama latinoamericano. Al igual que había sucedido en otros escenarios, también las reformas neoliberales emprendidas por Cardoso, si bien tuvieron el mérito de mejorar los índices macroeconómicos y enderezar el rumbo global brasileño, no lograron —en paralelo— su correlato en la sociedad y particularmente en los sectores populares.

El triunfo del PT trajo consigo la incorporación de un nuevo componente social en el Gobierno brasileño. Nacido en plena dictadura militar, en 1980, el PT surgió como una alternativa a la izquierda más ortodoxa, incorporando a sus filas comunidades cristianas de base, sindicatos industriales y una parte de la clase media baja. El propio Lula había surgido a la vida pública como trabajador y dirigente sindical en el cono industrial de São Paulo, experimentando las precariedades de un país que, si bien desde los cincuenta tenía un cierto grado de industrialización y desarrollo, albergaba una importante *deuda social* reflejada en altos niveles de marginalidad, delincuencia, pobreza y desempleo.

El 1 de enero de 2003 Lula asumía el cargo de presidente de la República, definiendo con claridad lo que denominó como

una *crisis del modelo* que se había aplicado en Brasil desde hacía al menos quince años. La nueva tarea consistía —de acuerdo al enfoque de Lula— en transformar las estructuras productivas, económicas y sociales, aunque sin comprometer en su integridad el modelo de desarrollo. Particularmente, la derrota de la pobreza y del hambre, sumado al complejo problema de la propiedad de la tierra, aparecen como las principales deudas de un país que se acerca hoy a los doscientos millones de habitantes.

En un tiempo histórico muy corto, la agenda impulsada por Lula conseguía ir modificando el perfil estructural de esa sociedad y acelerar la reducción de las desigualdades sociales y regionales. En 2012 una investigación del Boston Consulting Group destacaba cómo el desarrollo reciente de Brasil presentaba los índices de mayor calidad de entre los ciento cincuenta países estudiados. ¿Dónde situar —entre otras— las singularidades de la experiencia brasileña? (Mercadante, 2013). En primer lugar, en el hecho de que su desarrollo se ha dado en un contexto que, aunque divergente con la ortodoxia dogmática, ha mantenido el equilibrio macroeconómico, el control de la inflación y el respeto a los contratos firmados, sin caer en concesiones demagógicas o populistas. Esa justa combinación y equilibrio permitiría reducir las profundas desigualdades sociales mientras, al mismo tiempo, disminuía la deuda externa y aumentaban los superávits comerciales y las reservas, superándose —en paralelo— la histórica vulnerabilidad externa de su economía. En segundo lugar, estos avances han convivido con un perfeccionamiento de las instituciones republicanas y de su democracia, caracterizada por incorporar —en este tiempo— mecanismos de consulta popular y de democracia participativa. Por último, Brasil ha generado una matriz energética limpia y renovable, con especial atención a una sustancial reducción a la desforestación de la Amazonía.

Tras abandonar la acción de gobierno y situar a una militante de su partido como la primera presidenta mujer del Brasil,

Dilma Rousseff, la popularidad de Lula pasa por altibajos, en razón a distintas actuaciones judiciales, aun cuando estas difícilmente podrán cuestionar —a la larga— su condición de ser un personaje clave de los últimos treinta años, no solo para la política de su país sino para la del conjunto de América Latina, a cuyo impulso integrador ha contribuido decisivamente.

En el mismo tenor del discurso de Lula se puede situar el caso de Argentina, aun cuando su situación era más grave después de su profunda y casi terminal crisis financiera, social y política, que alcanzó su punto de ebullición en diciembre de 2001 con la renuncia de De la Rúa. Posterior a esta, y en el intervalo de poco tiempo, el país contemplaría atónito la sucesión veloz de cuatro presidentes, acentuándose de esta forma la inestabilidad de las propias instituciones representativas, incapaces de ofrecer algún tipo de solución o salida al dramático momento nacional. Por fin, el 27 de abril del 2003, pudieron realizarse elecciones —con garantías democráticas— que llevaron a la Casa Rosada, si bien con un porcentaje mínimo de sufragios, a Néstor Kirchner, gobernador de la provincia sureña de Santa Cruz durante casi dos décadas (1991-2003). Su elección, en todo caso, devolvía en cierta medida la estabilidad político-institucional que el país requería para superar la crisis económica y devolver la confianza de la comunidad internacional.

Hay que señalar también que Kirchner formó parte del Partido Justicialista o peronista, aunque su línea dentro de la organización es mucho más cercana a la histórica izquierda nacionalista y antiimperialista de esa formación. En definitiva, la propuesta política del llamado kirchnerismo se basó en distintos ejes con un punto común: superar la compleja década de 1990, que para este Gobierno había sido el antecedente fundamental para explicar los males del país, e iniciar un nuevo ciclo histórico en el nuevo milenio. Una nueva política de derechos humanos, de recuperación económica, de negociación de la deuda externa, una retórica nacionalista-antiimperialista y un

nuevo protagonismo del Estado se consolidan entonces como los principales ejes establecidos por Néstor Kirchner pensando en los años venideros, y continuados posteriormente por su esposa Cristina Fernández, presidenta de la República entre 2007 y 2015.

Otro de los liderazgos de esta ola izquierdista estará representado por Evo Morales, presidente de Bolivia (2005-), cuyo triunfo electoral, de un profundo significado político, y también simbólico, marca el cambio más relevante del país andino después de la revolución nacionalista y populista de 1952.

El ascenso de Morales representa una novedad política por varios motivos. En primer término, por su fuerte componente indígena y campesino, su lugar de nacimiento (la ciudad provinciana de Oruro) y su activa vinculación con los movimientos sociales. Este protagonismo de la sociedad civil se manifestó en uno de sus puntos máximos en las protestas de septiembre y octubre de 2003, en contra de la política económica y de la gestión del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), que culminó con la renuncia del jefe de Estado y su autoexilio fuera de Bolivia (aparte de sesenta y cuatro muertos y más de doscientos heridos). En general puede señalarse que, de la mano de Morales, los movimientos sociales demostraron y asumieron un evidente protagonismo y liderazgo dentro del país.

Por otro lado, la procedencia política de Morales también representa una novedad, debido a que el Movimiento al Socialismo (MAS), partido del cual es miembro Morales, es una organización de relativa reciente creación, pues se fundó en 1997. En las elecciones presidenciales de 2005, el MAS consiguió amplia mayoría, dejando excluidos del poder a los partidos históricos que desde la revolución de 1952 dominaban la escena política boliviana: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a los cuales hay que sumar a la derecha tradicional, liderada durante muchos años por el exdictador Hugo Banzer, quien gobernó el país de forma dictatorial entre 1971 y 1978, y democráticamente electo entre 1997 y 2001.

Las medidas adoptadas por Morales constituyen, en las diversas áreas de la acción pública, un giro político en el devenir reciente de Bolivia de profundas consecuencias, hasta el punto de convertirse en uno de los procesos más ricos y apasionantes del reciente escenario latinoamericano. Por otra parte, su elección presidencial —ganó las elecciones de diciembre de 2005, en las cuales compitió con el político Jorge Quiroga— en un país con más del 60 por ciento de población indígena, unida a la insurrección zapatista de Chiapas de 1994, son parte, quizá la más brillante, del surgimiento —hace más de cincuenta años— de los movimientos indígenas que han contribuido a modificar la imagen de una América lejos de la uniformidad latina y con un Estado-nación homogéneo debilitado (Le Bot, 2013).

Las dimensiones del cambio boliviano encuentran una de sus expresiones en el terreno económico. El 1 de mayo de 2006, por ejemplo, Morales procedía a la nacionalización de los recursos hidrocarburos del país —Decreto Héroes de Chaco—, una medida que, junto a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, había conformado uno de los ejes de las demandas de las grandes movilizaciones del año 2005 que acabaron con el anterior presidente Carlos D. Mesa (2003-2005), e incorporadas por Morales a su compromiso electoral.

Evo Morales ha implementado algunos ejes de la transformación que propuso para el país altiplánico: recuperar los recursos naturales para el Estado, a través de la nacionalización, una política social redistribucionista de los ingresos y una cierta retórica nacionalista y antiimperialista, la cual llevó a una escalada relativa de la situación de límites territoriales con su vecino, Chile, además de ciertas tensiones con grupos de clases medias y altas, especialmente en el oriente del país. Con todo, se puede señalar que la ascensión al poder de Morales constituyó una ruptura histórica relevante, quizás comparable —como se ha dicho— a la propia revolución de 1952.

Junto a Bolivia, conviene acercarse a la realidad de Uruguay, donde los presidentes Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-) y José Mujica (2010-2015), representantes de la coalición de izquierda Frente Amplio, han sido uno de los últimos impulsores de esta estrategia crítica que propone un retorno a los contenidos más progresistas. Como en muchos de los ejemplos anteriores, la llegada al poder de estos partidos o alianzas, y este es un caso concreto, se había producido como consecuencia de la desintegración de los sistemas de partidos tradicionales, lo que abrió paso a nuevas formas de expresión como movimientos sociales, o a formaciones de más reciente creación. El giro a la izquierda también se complementa con los casos centroamericanos en Nicaragua, con Daniel Ortega (1985-1990 y 2007-), y en El Salvador, con Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez (2014-), ambos exmiembros de la guerrilla sandinista y del Farabundo Martí. Merece también mencionar el caso de Ecuador, donde Rafael Correa (2007-), lleva a cabo su "revolución ciudadana", dejando atrás la inestable década de los noventa en ese país.

Más allá del hecho nacional, los componentes políticos de América Latina se van modificando en función del nuevo contexto histórico internacional. El ascenso y la consolidación de las "nuevas potencias", caso de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), van complejizando el mundo unipolar surgido inmediatamente en la post Guerra Fría. Sin lugar a dudas, este escenario trajo como consecuencia la elevación de los ingresos que los países sudamericanos percibieron por sus exportaciones, lo cual ha dado una mayor sostenibilidad económica a las experiencias de izquierda. En América del Sur, no solamente países como Venezuela y Bolivia han apostado por tales orientaciones, sino que Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, así como países centroamericanos —con mayor protagonismo de Cuba—, han encabezado unos intentos por romper la tendencia de la década de los noventa.

¿FIN DE CICLO?

En estos últimos años el giro a la izquierda y el retorno de determinados liderazgos populistas han experimentado un fuerte retroceso, lo cual obliga a plantear un punto de reflexión sobre las fortalezas y los límites de esos Gobiernos así como respecto a sus capacidades para entender y asumir los actuales retos y las demandas sociales surgidas. No son las únicas incógnitas. Las interrogantes y, por ende, expectativas se han instalado en la región de la mano de otros acontecimientos históricos cuyo impacto, en diferentes niveles e intensidades, va a resultar innegable. De un lado, el acercamiento Cuba-Estados Unidos; de otro, la negociación del proceso de paz en Colombia entre el Gobierno y la guerrilla de las FRAC-EP. Sin olvidar, asimismo, cómo la victoria electoral del republicano Donald Trump a la presidencia norteamericana (8 de noviembre de 2016) y el fallecimiento del líder revolucionario cubano, y símbolo de todo un tiempo en la historia latinoamericana, Fidel Castro (25 de noviembre de 2016) son factores esenciales a considerar obligatoriamente para poder evaluar con exactitud y corrección el futuro horizonte del continente.

Desde el ámbito económico, la realidad en los últimos años presenta indicadores que no pueden ser sino de alarma, a pesar del impulso inicial. La crisis económica de 2009 y sus efectos en el mundo desarrollado también alcanzaron —y con fuerza — a América Latina en su conjunto. Por ejemplo, la crisis hizo disminuir el producto interno bruto ese mismo año un 2,9 por ciento, y los índices de desempleo superaron el 8 por ciento de promedio. De forma individual, los principales países afectados por el crecimiento económico negativo fueron México (-6,7 por ciento) y algunos países de Centroamérica y América Central, como Honduras (-3 por ciento), El Salvador, (-2,5 por ciento) o Nicaragua (-1,5 por ciento), muchos de ellos influidos por su cercanía y su dependencia del mercado de los Estados Unidos.

Tal como en toda su historia, uno de los problemas estructurales de las economías latinoamericanas está relacionado con los altos niveles de desigualdad existentes, a lo que habría que agregar la pobreza aún tan persistente. A nivel comparativo, respecto a este último indicador, si bien la región tiene menores indicadores de pobreza que Asia meridional y oriental y África Subsahariana, sus cifras son más altas que en regiones como Asia central y Europa oriental. A pesar de esto, en lo que respecta a la extrema pobreza, las tasas del continente son muy altas (superiores por ejemplo a países de Oriente Medio y del norte de África), lo cual da muchas pistas sobre las profundas diferencias sociales. Hacia el año 2013, de acuerdo a datos de la CEPAL, el 28,1 por ciento de la población latinoamericana vivía bajo el umbral de la pobreza.

Los niveles de desigualdad en la región son aún más alarmantes. A finales del siglo XX y a comienzos del siglo actual, América Latina seguía siendo la región más desigual del mundo, lo que tiene como característica fundamental la concentración del ingreso en los sectores de mayores rentas. De acuerdo al índice Gini, de los diez países más desiguales del mundo, cinco pertenecen a Latinoamérica, entre ellos Brasil, que representa la tercera parte de la población total de la región. Si bien a comienzos de siglo la desigualdad se redujo en algunos países —como consecuencia del crecimiento económico y las políticas sociales— uno de los desafíos de la región es todavía disminuir las profundas desigualdades sociales: sin duda, esto afecta a la propia economía, las opciones para alcanzar el desarrollo, la cohesión social y el sentimiento de identidad colectiva, tan importantes para mejorar la participación y el régimen democrático no solo como sistema institucional, sino como experiencia cultural común y de ciudadanía común.

En el plano político, se distinguen ciertas modificaciones que permiten al menos poner en tela de juicio el éxito y la proyección del giro a la izquierda. El triunfo de Mauricio Macri en

las elecciones presidenciales de Argentina, junto a la derrota de Nicolás Maduro en las parlamentarias de Venezuela, ambas de finales de 2015, además del revés de Evo Morales en el referéndum —celebrado en febrero de 2016— con el que pretendía reformar la Constitución para hacerse reelegir por cuarta vez, parecen significar, en opinión de destacados observadores, el cuestionamiento a este ciclo. Similar valoración, evitando caer en reduccionismo, podría hacerse de la victoria en Perú de Pedro Pablo Kuczynki en junio de 2016.

De un impacto indudable a la hora de dimensionar esas mismas transformaciones y considerar una posible inflexión en el liderazgo regional de la izquierda es la crisis institucional abierta en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff (31 de agosto de 2016), sumada al retroceso del PT y al cuestionamiento de la figura de Lula. Acusada de maquillar el presupuesto y de irregularidades fiscales, que no de corrupción, el juicio político contra Dilma votado mayoritariamente por el Senado terminó con su carrera y facilitó la llegada al poder del vicepresidente Michel Temer, miembro del centro-derechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), cuyas primeras decisiones marcan una rectificación de la agenda del lulismo, del proyecto PT, y un nuevo camino para el país. Sus manifestaciones, en línea con las de Macri, respecto a aplicar a Venezuela la cláusula democrática de MERCOSUR ante la deriva autoritaria de Maduro revelan, asimismo, nuevos posicionamientos exteriores.

El distanciamiento político entre Caracas y Buenos Aires-Brasilia, unido a las denuncias sobre el incumplimiento venezolano en cuanto a la adecuación de sus normativas internas a las del grupo de MERCOSUR, determinaron que el 1 de diciembre de 2016, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay notificaran a Venezuela la pérdida de su condición como miembro pleno de la organización, abriendo así una nueva crisis en el proceso de integración regional.

Las denuncias expresadas por Dilma de haberse asistido con su *impeachment* a un "golpe de Estado institucional" conviven con las protestas sobre la calidad institucional de la democracia brasileña —una clase política ampliamente afectada por los casos de corrupción (Petrobras)— y la polarización nacional en medio de una economía en recesión desde 2015 y del temor de amplios sectores de las clases de renta media a perder los beneficios adquiridos en los últimos años. Conviene no olvidar, igualmente, la deriva que para el conjunto de América Latina —en lo económico, político e internacional— acarrearía la inestabilidad de Brasil.

TIEMPO DE NOVEDADES: LA NORMALIZACIÓN WASHINGTON-LA HABANA Y EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

Para muchos analistas el final de la Guerra Fría no había logrado instalarse por completo en América Latina debido a la permanencia —tras más de medio siglo— del enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba, cuyas ramificaciones regionales continuaban latentes, contribuyendo a la ausencia de diálogo y cooperación entre los actores hemisféricos.

El 17 de diciembre de 2014 —para sorpresa de todo el mundo— los presidentes Barack Obama (2009-2017) y Raúl Castro (2006-2008, interino, 2008-) anunciaban un acuerdo para tratar de normalizar las relaciones entre La Habana y Washington y su intención de ir arreglando las cuestiones que durante tiempo y de manera tan grave los había enfrentado. Un acuerdo resultado de conversaciones secretas bilaterales sostenidas hacía meses, con la intermediación del Papa Francisco y el Gobierno de Canadá. *Debemos aprender el arte de convivir civilizadamente con nuestras diferencias*, las palabras de Castro ese día, resumían el espíritu de las partes.

El giro norteamericano era muy significativo. Obama optaba por un nuevo enfoque hacia la isla, quizá convencido de que la política ejecutada desde 1959 no solo no había logrado hacer avanzar los intereses norteamericanos, sino que tampoco convencía a otros actores de la comunidad internacional, ni precipitó cambios democráticos en Cuba ni tampoco ayudaba a mejorar las condiciones de vida de los isleños. Por el contrario, cada vez eran más las voces de países latinoamericanos y caribeños reclamando cambios en el accionar de Washington hacia Cuba, tanto respecto al bloqueo como a la presencia de La Habana en las instituciones hemisféricas —OEA y Cumbre de las Américas— (Clinton, 2014). Retirado Fidel Castro —fallecido Hugo Chávez— y con Raúl Castro iniciando un proceso de reformas y de concesiones capitalistas desde 2008, la coyuntura —en la óptica de Washington— era óptima. El presidente norteamericano parecía así aproximarse al punto clave de una nueva estrategia: renunciar al uso de la fuerza para cambiar el sistema político y económico cubano (Zaldívar, 2016).

¿Suponen las actuales directrices reconocer el fracaso de toda una política practicada desde la Guerra Fría? No es seguro, y tampoco caben respuestas maximalistas, pero los debates están servidos (LeoGrande y Kornbluh, 2015). Y en Cuba, ¿qué razones se pueden aducir para explicar el reto de iniciar el deshielo frente a Estados Unidos? Con mucha probabilidad, Raúl Castro, consciente de los cambios necesarios en Cuba y de la importancia de dar aliento a su propio pueblo, de estimular a los cubanos en el tiempo nuevo, busca en la normalización bilateral dar sentido a su propia gestión política, que concluye en 2018 (Zaldívar, 2016). Sabedor, también, de que las negociaciones con Washington respetarán los principios de soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos.

Desde diciembre de 2014, y a través de rondas negociadoras, Cuba y Estados Unidos han alcanzado acuerdos para reanudar las relaciones diplomáticas —interrumpidas en 1961—,

reabrir sus embajadas en La Habana y Washington (20 de julio de 2015) y elaborar una agenda de cooperación en áreas de salud, agricultura, educación e inmigración, así como en comunicaciones, restableciéndose los vuelos directos y el servicio de correos e incrementándose los lazos comerciales y las opciones de los estadounidenses para viajar y hacer negocios en la isla. Cuba era retirada de la lista, elaborada por el Departamento de Estado, de países patrocinadores del terrorismo. Como colofón, el 20 de marzo de 2016, Obama visitaba Cuba —el primer presidente norteamericano tras 88 años—, afirmando que llegaba *para enterrar el último resquicio de la Guerra Fría en el continente americano.* En todo caso, el camino hasta una completa normalización bilateral está condicionado a la solución de los grandes contenciosos aún pendientes, que incluyen desde la desaparición completa del bloqueo sobre la isla hasta el arreglo de la situación de la base naval de Guantánamo o el pago de indemnizaciones por las nacionalizaciones de la revolución. Todo lo cual necesitará de liderazgo de cada una de las partes y capacidad para superar obstáculos, muchos de ellos nacidos de las propias dinámicas internas en ambos países.

Las declaraciones de Trump sobre Cuba a raíz de la muerte de Fidel Castro, muy en línea con los sectores cubanos conservadores de Miami, sugieren una marcha atrás en ese deshielo abierto por Obama, e incluso el regreso al enfrentamiento que caracterizó la dinámica bilateral entre ambos países si el nuevo presidente cumple sus promesas de campaña electoral, como anular los nuevos lazos turísticos o comerciales. Podemos pensar, también, que su llegada a la Casa Blanca no augura tampoco buenos tiempos en las relaciones con América Latina, en razón de sus manifestaciones y de la agenda hemisférica a aplicar (proteccionismo comercial, muro con México, inmigración, inversiones…).

De trascendente cabe calificar también el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una

Paz Estable y Duradera alcanzado el 24 de agosto de 2016 en La Habana, tras cuatro años de negociación, entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, la guerrilla más antigua de América Latina, poniendo fin a una guerra de cincuenta y dos años que ha costado en torno a doscientos sesenta mil muertos, siete millones de desplazados, decenas de miles de desaparecidos e incontables dosis de sufrimiento y dolor. A raíz del entendimiento en La Habana, las FARC-EP, en su Xª Conferencia Nacional Guerrillera (San Vicente del Caguán, 17-23 de septiembre), decidían disolver su estructura militar transformándose en un partido político, y poco después, por último, el 26 de septiembre de 2016, en Cartagena de Indias, el presidente Juan Manuel Santos (2010-) y el líder guerrillero Rodrigo Londoño "Timochenko" firmaban definitivamente el acuerdo, en medio de una gran expectación nacional e internacional, con la presidencia del secretario general de la ONU y varios jefes de Estado latinoamericanos.

Pensado para construir sobre bases sólidas la paz en la Colombia del postconflicto, el acuerdo contempla medidas políticas, socioeconómicas, de seguridad y verificación y justicia transicional. Junto a los proyectos de reforma rural integral —actuando sobre los factores generadores de pobreza y desigualdad—, la lucha contra las drogas ilícitas, la presencia de la misión de la ONU, encargada de verificar el cese al fuego y la dejación de armas, las medidas a las FRAC-EP para facilitar su incorporación a la vida civil y a la política así como compensaciones a las víctimas del conflicto, el punto más conflictivo radica en el modelo de justicia para los responsables de graves delitos y asesinatos. De manera sorpresiva, el plebiscito del 2 de octubre, en el cual los colombianos debían ratificar lo suscrito, arrojó una victoria —estrecha— de los partidarios del "no", encabezados por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), frente a los del "sí". El resultado muestra la honda insatisfacción de una parte importante del pueblo colombiano con el acuerdo, debido, probablemente, al exceso de impunidad contemplado y

al elevado rechazo que continúan generando las FARC-EP. No resulta —con toda probabilidad— fácil borrar de la memoria social las secuelas del largo ciclo de violencia sufrido, ni tampoco pretender la transformación completa —casi de un día para otro— en organización política de una estructura militar. Ante esta inesperada situación provocada por el voto contrario de la ciudadanía colombiana, que colocaba al proceso de paz en un limbo jurídico y real, la concesión del Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos —octubre de 2016— debía reactivar las vías hacia la reconciliación. Con una voluntad inequívoca en favor de la paz, Gobierno y guerrilla volvían a negociar rápidamente un nuevo acuerdo, que fue aprobado en tiempo récord y tras intensos debates por el Consejo de la República el 30 de noviembre, pudiéndose superar por vía parlamentaria el rechazo plebiscitario —2 de octubre— del anterior acuerdo. El nuevo documento, con cambios notables y no solo superficiales, deberá ser implementado progresivamente no sin dificultades, adivinándose el carácter complejo que supone la construcción de la paz en Colombia tras más de medio siglo de conflicto civil.

En esta coyuntura de ilusiones por la superación de viejas controversias y los interrogantes políticos sobre el futuro, ¿qué elementos conforman el reto latinoamericano del siglo XXI? Sin duda, el superar la pobreza y la desigualdad a partir de políticas públicas garantes de cohesión social —desde la educación a la sanidad—, en el marco de democracias cuya calidad institucional permitan su correcta gobernanza, atendiendo a las demandas de una nueva ciudadanía crítica y responsable, evitando tanto el caudillismo y las dinámicas populistas como la violencia criminal y la inseguridad cotidiana que se han instalado por el continente. A saber, un nuevo contrato social que regule lo que cada grupo aporta al Estado y lo que recibe de él (Martínez Lillo y Estefanía, 2016). Y todo ello para que, como sugería Carlos Fuentes en diálogo con Ricardo Lagos, *este nuevo sueño de América Latina no termine en otra pesadilla* (Fuentes y Lagos, 2012).

BIBLIOGRAFÍA

ALCÁNTARA, Manuel *et al.* (2006): *Reformas económicas y consolidación democrática. Historia contemporánea de América Latina. Volumen VI (1980-2006)*, Madrid, Síntesis.

ANSALDI, Waldo (2006): *La democracia en América Latina, un barco a la deriva*, México, FCE.

— Y GIORDANO, Verónica (2012): *América Latina. La construcción de un orden*, 2, Buenos Aires, Ariel.

AARÃO, Daniel (coord.) (2014): *Modernização, dictadura e democracia, 1964-2010*, Volume 5, Madrid y Río de Janeiro, Editorial Mapfre y Editora Objetiva.

ARANDA, Gilberto (2010): *Mesías andinos. Continuidad y discontinuidad entre Velasco Alvarado, Fujimori y Ollanta Humala*, Santiago, Editorial Universitaria.

— (2013): *El proyecto de Hugo Chávez. Participación, isocracia e integración regional (1999-2007)*, Santiago, Editorial Universitaria.

— y SALINAS, Sergio (2013): *Bolívar según Chávez. Ensayo de una tendencia*, Santiago, RiL Editores.

BATAILLON, Gilles (2008): *Génesis de las guerras intestinas en América Central (1960-1983)*, México, FCE.

BETHELL, Leslie (ed.) (1990-2002): *Historia de América Latina*, 16, Barcelona, Crítica.

BOISARD, Stéphane y HEREDIA, Mariana: "Laboratoires de la mondialisation économique. Regards croisés sur les dictatures argentine et chilienne des années 1970", *Revue d'histoire* 1/2010 (105), París, Sciences Po Les Presses, Vingtième Siècle, pp. 109-125.

BRANDS, Hal (2010): *Latin America's Cold War*, Massachusetts, Harvard University Press.

BULMER-THOMAS, Víctor (1998): *La historia económica de América Latina desde la Independencia*, México, FCE.

BURT, Jo-Marie (2011): *Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

CARMAGNANI, Marcello *et al.* (1999): *Para una historia de América*, 3, México, FCE.

CLINTON, Hillary R. (2014): *Hard choices. A memoir*, Londres, Simon & Schuster.

CONNIFF, Michael (2003): "Neopopulismo en América Latina. La década de los 90 y después", *Revista de Ciencia Política*, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 23 (1), pp. 31-38.

DABÈNE, Olivier (2000): *América Latina en el siglo XX*, Madrid, Síntesis.

— (dir.) (2012): *La gauche en Amérique latine (1998-2012)*, París, Sciences Po Les Presses.

DE CASTRO GOMES, Angela (coord.) (2013): *Olhando para dentro, 1930-1964*, 4, Madrid y Río de Janeiro, Mapfre y Objetiva.

DE LA TORRE, Carlos (2003): "Masas, pueblo y democracia: un balance crítico de los debates sobre el nuevo populismo", *Revista de Ciencia Política*, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 23 (1), pp. 55-66.

DE LA TORRE, Carlos y ARNSON, Cynthia J. (eds.) (2013): *Latin American Populism in the Twenty-First Century*, Baltimore y Washington, Woodrow Wilson Center Press y Johns Hopkins University Press.

DEL ALCÀZAR, Joan (ed.) (2011): *Historia actual de América Latina (1959-2009)*, Valencia, Tirant Lo Blanch.

— (2012): "América Latina en el siglo XX", en Juan B. Amores Carredano (coord.), *Historia de América*, Barcelona, Ariel.

DEL ARENAL, Celestino (2011): *Política exterior de España y relaciones con América Latina*, Madrid, Siglo XXI y Fundación Carolina.

DEL POZO, José (2002): *Historia de América Latina y del Caribe (1825-2001)*, Santiago, LOM Ediciones.

DEVÉS, Eduardo (2003): *El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Entre la*

modernización y la identidad. Tomo II, Desde la CEPAL al Neoliberalismo (1950-1990), Buenos Aires-Santiago, Biblos – DIBAM.

DOSMAN, Edgar J. (2010): *La vida y la época de Raúl Prebisch (1901-1986)*, Madrid, IELAT-Marcial Pons.

FELD, Claudia y FRANCO, Marina (dirs.) (2015): *Democracia, hora cero. Actores, políticas y debates en los inicios de la posdictadura*, Buenos Aires, FCE.

FERMANDOIS, Joaquín (2004): *Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial (1900-2004)*, Santiago, Pontificia Universidad Católica Ediciones.

FERNÁNDEZ ABARA, Joaquín (2016): *La izquierda chilena ante los movimientos nacional populares latinoamericanos (1943-1956)*, texto inédito.

FERRERO BLANCO, María Dolores (2010): *La Nicaragua de los Somoza (1936-1979)*, Huelva, Universidad de Huelva.

FRANCO, Marina (2012): *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y 'subversión' (1973-1976)*, Buenos Aires, FCE.

FOXLEY, Alejandro (1988): *Experimentos neoliberales en América Latina*, México, FCE.

FUNES, Patricia (2014): *Historia mínima de las ideas políticas en América Latina*, Madrid, Turner y Colegio de México.

FUENTES, Carlos y LAGOS, Ricardo (2012): *El siglo que despierta*, Madrid, Taurus.

GARRETÓN, Manuel Antonio (2013): *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los Gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*, Santiago de Chile, Editorial Arcis, Clacso y El Desconcierto.

GERMANI, Gino (1977): "Democracia representativa y clases populares", en Octavio Ianni, *Populismo y contradicciones de Clase en América Latina*, Ciudad de México, ERA.

GOLDMAN, Francisco (2009): *El arte del asesinato político*, Barcelona, Anagrama.

HARMER, Tanya (2013): *El Gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana*, Santiago, editorial Diego Portales.

HERNÁNDEZ, Juan Luis y SALCITO, Ariel (comps.) (2007): *La Revolución boliviana. Documentos fundamentales*, Buenos Aires, Newen Mapu.

HERMET, Guy (2003): "El populismo como concepto", *Revista de Ciencia Política*, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 23 (1), pp. 5-18.

HOLDEN, Robert H. y ZOLOV, Eric (eds.) (2000): *Latin America and the United States. A documentary history*, Oxford, Oxford University Press.

KLAREN, Peter (2005): *Nación y sociedad en la historia del Perú*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

KRAUZE, Enrique (2011): *Redentores. Ideas y poder en América Latina*, Barcelona, Debate.

KNIGHT, Alain (2005): *Revolución, democracia y populismo en América Latina*, Santiago, PUC y Centro de Estudios Bicentenario.

LACLAU, Ernesto (2005): *La razón populista*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

LATRÈCHE, Leila (2011): *Cuba et l'URSS. 30 ans d'une relation improbable*, París, L'Harmattan.

LE BOT, Yvon (2013): *La gran revuelta indígena*, México, Océano.

LEOGRANDE, William M. y KORNBLUH, Peter (2015): *Diplomacia encubierta con Cuba. Historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana*, México, FCE.

LÓPEZ, Margarita *et al.* (2010): *Temas y procesos de la historia reciente de América Latina*, Santiago, Arcis y Clacso.

MALAMUD, Carlos (2010a): *Historia de América*, Madrid, Alianza Editorial.

— (2010b): *Populismos latinoamericanos. Los tópicos de ayer, de hoy, de siempre*, Madrid, Paraninfo.

MARTÍNEZ LILLO, Pedro A. y ESTEFANÍA, Joaquín (coords.) (2016): *América Latina: un nuevo contrato social*, Madrid, Marcial Pons.

— y RUBIO APIOLAZA, Pablo (2015): *América Latina y tiempo presente. Historia y documentos*, Santiago, LOM Ediciones.

— (2016): "Del neoliberalismo conservador al giro a la izquierda: el discurso político latinoamericano en la era global, 1990-2010", en Pedro A. Martínez Lillo y Joaquín Estefanía (coords.), *América Latina: un nuevo contrato social*, Madrid, Marcial Pons, pp. 55-89.

MCSHERRY, J. Patrice (2009): *Los Estados depredadores. La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina*, Santiago, LOM Ediciones.

MERCADANTE, Aloizio (2013): *Brasil. De Lula a Dilma (2003-2013)*, Madrid, Clave Intelectual.

MIRZA, Christian A. (2006): *Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina. La construcción de nuevas democracias*, Buenos Aires, Clacso.

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto (2004): *Argentina, Brasil y Estados Unidos. De la*

Triple Alianza al MERCOSUR, Buenos Aires, Grupo NORMA.

MOULIAN, Tomás (1997): *Chile Actual: Anatomía de un mito*, Santiago, Universidad Arcis-LOM.

NOVARO, Marcos y PALERMO, Vicente (2003): *La dictadura militar 1976-1983: del golpe de Estado a la restauración democrática*, Buenos Aires, Paidós.

O'DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe C. (2009): *Transiciones desde un Gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, Buenos Aires, Prometeo.

PALAZUELOS, Antonio (2014): "Introducción", en Raúl Prebisch, *Los caminos del desarrollo. Lecciones*, Madrid, Los Libros de la Catarata.

PÉREZ HERRERO, Pedro (ed.) (2006): *La 'izquierda' en América Latina*, Madrid, Editorial Pablo Iglesias.

— (2007): *Auge y caída de la autarquía. Historia contemporánea de América Latina, Volumen V (1950-1980)*, Madrid, Síntesis.

PETTINÁ, Vanni (2011): *Cuba y Estados Unidos, 1933-1959. Del compromiso nacionalista al conflicto*, Madrid, Los Libros de la Catarata.

PNUD (2004): *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate*, Buenos Aires, Alfaguara.

REID, Michael (2009): *El continente olvidado. La lucha por el alma de América Latina*, Barcelona, Belacqva.

REVECO, Juan Manuel (1992): "Un repaso a las teorías sobre el populismo latinoamericano", *Estudios Sociales*, 73, Santiago.

ROITMAN, Marcos (2013): *Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de estado en América Latina*, Madrid, Akal.

ROMERO, Luis Alberto (2012): *Breve historia contemporánea de la Argentina (1916-2010)*, Buenos Aires, FCE.

ROUQUIÉ, Alain (1994): *Guerras y paz en América Central*, México, FCE.

— (2011): *A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina*, Buenos Aires, FCE.

RUBIO APIOLAZA, Pablo (2013): *Los civiles de Pinochet. La derecha chilena en el régimen militar, 1983-1990*, Santiago, DIBAM y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

SADER, Emir y JINKINGS, Ivana (coords.) (2009): *Latinoamericana. Enciclopedia contemporánea de América Latina y el Caribe*, Madrid, Clasco y Akal.

SANCHÍS MUÑOZ, José R. (2010): *Historia diplomática argentina*, Buenos Aires, Eudeba.

SKIDMORE, Thomas y SMITH, Peter H. (1996): *Historia contemporánea de América Latina*, Barcelona, Editorial Crítica.

SMITH, Joseph (2007): *Historical dictionary of United States-Latin American relations*, Maryland, Scarecrow Press.

SMITH, Peter H. (2009): *La democracia en América Latina*, Madrid, IELAT y Marcial Pons.

— (2010): *Estados Unidos y América Latina. Hegemonía y resistencia*, Valencia, Universitat de Valencia.

SOTO, Álvaro (2013): "El triunfo de la democracia. Las transiciones: un camino hacia la democracia", en Antonio Rovira (coord.), *Gobernanza democrática*, Madrid, Marcial Pons, pp. 203-209.

SUBERCASEAUX, Bernardo (2016): *Simón Bolívar y la Carta de Jamaica. Significantes en disputa en la Venezuela contemporánea*, Santiago, LOM Ediciones.

TAFFET, Jeffrey F. (2007): *Foreign aid as foreign policy. The Alliance for Progress in Latin America*, Nueva York, Routledge.

THOMAS, Hugh (2006): *Cuba: la lucha por la libertad*, Barcelona, Debate.

TORRES G., Osvaldo (2012): *Democracia y lucha armada. MIR y MLN-Tupamaros*, Santiago, Pehuén.

TOURAINE, Alain (1989): *América Latina, política y sociedad*, Madrid, Espasa.

UNESCO (2008): *Historia general de América Latina*, 8, Madrid, Trotta Editorial y Unesco.

VIDAL LUNA, Francisco y KLEIN, Herbert (2007): *O Brasil desde 1980*, São Paulo, Jirafa Editores.

YOFRE, Juan B. (2011): *1982. Los documentos secretos de la Guerra de las Malvinas y el derrumbe del Proceso*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

ZALDÍVAR, Carlos (2016): "Cuba: preguntas y respuestas", en Pedro A. Martínez Lillo y Joaquín Estefanía (coords.), *América Latina: un nuevo contrato social*, Madrid, Marcial Pons, pp. 155-179.

ZAMORA, Augusto (2006): *La paz burlada. Los procesos de paz de Contadora y Esquipulas*, Madrid, SEPHA.

ZANATTA, Loris (2012): *Historia de América Latina. De la colonia al siglo XXI*, Buenos Aires, Siglo XXI.

AMÉRICA LATINA ACTUAL
DEL POPULISMO AL GIRO DE IZQUIERDAS

INVESTIGACIÓN Y DEBATE

PEDRO A. MARTÍNEZ LILLO
PABLO RUBIO APIOLAZA

La historia de las últimas siete décadas en América Latina resulta clave para pensar su situación actual y permite arrojar luz sobre las rupturas y continuidades históricas que ha atravesado el continente latinoamericano. Tomando como punto de partida el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría, para concluir en la actual globalización, este libro propone una síntesis rigurosa tanto de los procesos políticos, sociales y económicos de distinto signo que han atravesado la región como de los conceptos que han determinado su desarrollo: así, el surgimiento y expansión de populismos y neopopulismos, su inserción en un orden bipolar a raíz de la Guerra Fría, las consecuencias del proceso cubano sobre el continente, el auge de las dictaduras, la violencia política y la consolidación democrática posterior, la inserción de las economías en el modelo neoliberal, son algunos de los hitos que son analizados desde una perspectiva histórica, hasta llegar a los recientes acontecimientos como el proceso de paz colombiano o el nuevo rumbo que han adoptado las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Una obra de referencia para todo aquel interesado en comprender el presente de América Latina y su evolución histórica, que aporta elementos críticos para aproximarse a los problemas pendientes y los desafíos actuales que enfrenta el continente.



